



**Universitat Autònoma
de Barcelona**

Departamento de Medios, Comunicación y Cultura
Máster oficial en Medios, Comunicación y Cultura

La presunción de inocencia en cuestión

Análisis del tratamiento informativo de la corrupción y los delitos sexuales en los periódicos
colombianos *El Tiempo* y *El Espectador*

Trabajo Final de Máster

Autora: Karol Yohanna Bonilla Ramírez
Director: Jaume Soriano Clemente

Bellaterra, junio de 2018

RESUMEN

Esta investigación analiza el respeto por el derecho a la presunción de inocencia en el tratamiento informativo realizado por los periódicos *El Tiempo* y *El Espectador* en el marco del registro noticioso de hechos de corrupción y delitos sexuales en Colombia entre enero y abril de 2018.

Se realiza una aproximación empírico-analítica que da cuenta del cubrimiento periodístico de este tipo de casos para lo cual se aplica una estrategia extensiva sobre una muestra de piezas noticiosas divulgadas por los medios seleccionados. Para el desarrollo de este trabajo se utiliza el análisis de contenido como técnica de investigación.

A lo largo del documento se profundiza en la relación entre presunción de inocencia y medios de comunicación, y se enfatiza en el papel de estos últimos en la construcción de opinión pública; de ahí la necesidad de reflexionar sobre las representaciones sociales que se hacen desde la escena mediática, especialmente cuando estas pueden constituirse como lesivas de ciertos derechos y atribuir responsabilidades de manera anticipada a quienes se encuentran implicados en un proceso penal.

Además de reconocer la importancia de los medios de comunicación en la consolidación de sociedades democráticas, se quiere insistir en que el ejercicio de la libertad de expresión debe fundarse en el respeto por las garantías constitucionales y legales y, en ese sentido, los periodistas no pueden asumir el rol de jueces para dirimir causas de tipo penal, dando lugar a juicios paralelos que, como se verá a lo largo de este trabajo, representan un riesgo para el debido proceso.

Palabras clave: Presunción de inocencia, derecho penal, comunicación, periodismo, corrupción, delitos sexuales.

ABSTRACT

This investigation analyzes the respect for the presumption of innocence in the informative treatment carried out by the newspapers *El Tiempo* and *El Espectador* in the context of the news record of facts of corruption and sexual crimes in Colombia between January and April, 2018.

An empirical-analytical approach is carried out that accounts for the journalistic coverage of these types of cases, for which an extensive strategy is applied to a sample of news pieces disclosed by the selected media. For the development of this work, content analysis is used as a research technique.

Throughout the document, the relationship between the presumption of innocence and the media is deepened, and the role of mass media in public opinion construction is emphasized; hence the need for thinking about the social representations made from the media scene, especially when these can be constituted as harmful to some rights and attribute responsibilities in advance to those who are involved in a criminal process.

In addition to recognizing the importance of the media in the consolidation of democratic societies, it is necessary to insist that the exercise of freedom of expression must be based on respect for constitutional and legal guarantees and, in this sense, journalists cannot assume the role of judges to settle criminal cases, giving rise to parallel judgments that, as will be seen throughout this work, represent a risk to due process.

Keywords: Presumption of innocence, criminal law, communication, journalism, corruption, sexual crimes.

RESUM

Aquesta investigació analitza el respecte pel dret a la presumpció d'innocència en el tractament informatiu realitzat pels diaris *El Tiempo* i *El Espectador* en el marc del registre noticiós de fets de corrupció i delictes sexuals a Colòmbia entre gener i abril de 2018.

Es realitza una aproximació empírico-analítica que reflecteix el cobriment periodístic d'aquest tipus de casos aplicant una estratègia extensiva sobre una mostra de peces noticioses divulgades pels mitjans seleccionats. Per al desenvolupament d'aquest treball s'utilitza l'anàlisi de contingut com a tècnica d'investigació.

Al llarg del document s'aprofundeix en la relació entre presumpció d'innocència i mitjans de comunicació, i s'emfatitza en el paper d'aquests últims en la construcció d'opinió pública; d'aquí la necessitat de reflexionar sobre les representacions socials que es fan des de l'escena mediàtica, especialment quan aquestes poden constituir-se com lesives de certs drets i atribuir responsabilitats de manera anticipada als que es troben implicats en un procés penal.

A més de reconèixer la importància dels mitjans de comunicació en la consolidació de societats democràtiques, es vol insistir en que l'exercici de la llibertat d'expressió ha de basar-se en el respecte per les garanties constitucionals i legals i, en aquest sentit, els periodistes no poden assumir el paper de jutges per dirimir causes de tipus penal, donant lloc a judicis paral·lels que, com es veurà al llarg d'aquest treball, representen un risc per al degut procés.

Paraules clau: Presumpció d'innocència, dret penal, comunicació, periodisme, corrupció, delictes sexuals.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	8
1. JUSTIFICACIÓN	11
1.1 Objetivos	13
1.1.1 Objetivo general	13
1.1.2 Objetivos específicos.....	13
1.2 Hipótesis de investigación.....	14
2. MARCO TEÓRICO	15
2.1 La presunción de inocencia en el derecho internacional.....	15
2.2 La presunción de inocencia en el marco legal colombiano.....	16
2.2.1 Ley 906 de 2004.....	17
2.3 La libertad de expresión y el derecho penal.....	23
2.3.1 Sobre los juicios paralelos y la presunción de inocencia	31
2.4 Los medios de comunicación en la construcción de opinión	34
2.5 Corrupción y medios de comunicación: el escándalo y su visibilidad.....	40
2.6 Los delitos sexuales en los medios de comunicación	45
2.7 El populismo punitivo	48
3. PRESENTACIÓN METODOLÓGICA.....	54
3.1 Operacionalización de variables.....	54
3.2 Diseño metodológico.....	59
3.3 Análisis de contenido	59
3.3.1 Muestra.....	60
3.3.2 Periódico <i>El Tiempo</i>	60
3.3.3 Periódico <i>El Espectador</i>	62
3.4 Delimitación temporal.....	62
3.5 Criterios para la búsqueda de noticias	63
3.6 Libro de códigos.....	65

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	66
4.1 Información de identificación	67
4.2 Representación del presunto inocente	71
4.3 Representación del delito	85
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS: CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS	90
CONCLUSIONES.....	109
ANEXOS	116
BIBLIOGRAFÍA.....	127

ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICOS E IMÁGENES

Tabla I - Matriz de búsqueda de noticias	64
Tabla II - Noticias según medio de comunicación y tipología.....	67
Tabla III - Distribución mensual de las noticias	68
Tabla IV - Clasificación de las piezas noticiosas según la sección.....	69
Tabla V - Tipología noticiosa en la sección Nacional	70
Tabla VI - Autoría de las noticias	70
Tabla VII - Tipología del personaje por medio.....	71
Tabla VIII - Uso del alias por medio.....	72
Tabla IX - Referencias al presunto inocente por medio.....	73
Tabla X - Tiempo condicional según medio de comunicación.....	79
Tabla XI - Alusiones a antecedentes del presunto inocente.....	79
Tabla XII - Tipo de información adicional según medio de comunicación.....	81
Tabla XIII - Menciones sobre la vida personal del presunto inocente según el medio de comunicación	83
Tabla XIV - Cantidad de fuentes empleadas por medio	83
Tabla XV - Tipo de fuente según medio de comunicación.....	84
Tabla XVI - Tipología noticiosa según medio de comunicación.....	85
Tabla XVII - Clasificación de noticias según etapa procesal.....	85
Tabla XVIII - Uso de adjetivos según el medio de comunicación.....	88
Tabla XIX - Registro de elementos discursivos alusivos a la emoción y al sentimiento según medio de comunicación.....	89
Tabla XX - La presunción de inocencia según la tipología noticiosa	98
 Gráfico 1 - Representación del procesado según medio de comunicación	 107
 Imagen 1 - El primer y segundo nivel del establecimiento de la agenda	 36
Imagen 2 - Boletín de prensa Fiscalía General de la Nación, 1 de junio de 2018.	94

INTRODUCCIÓN

Este documento es el producto de una aproximación empírico – analítica efectuada a propósito del registro noticioso de hechos de corrupción y delitos sexuales entre enero y abril de 2018 por parte de los periódicos *El Tiempo* y *El Espectador* —los dos diarios de circulación nacional de pago más leídos en Colombia—, cuyo objetivo principal fue analizar el respeto por el derecho a la presunción de inocencia en el abordaje de estos casos de tipo penal.

En total, se examinaron 64 piezas noticiosas¹ a las cuales se les aplicó una ficha de análisis construida tras la revisión bibliográfica de la que se extrajo la información que pudiera consolidarse como indicativa de la devaluación o afectación de la presunción de inocencia.

Los resultados, obtenidos tras el análisis de contenido, permitieron en una primera medida elaborar un contexto general sobre el respeto del derecho a la presunción de inocencia, y posteriormente, realizar un análisis comparado de la tipología planteada y de los diarios estudiados.

Este trabajo está estructurado a manera de capítulos: en el primero de ellos, usted encontrará los motivos que sustentan la selección del tema de estudio, los objetivos planteados y las hipótesis de investigación; en el segundo, de carácter teórico, se hace una aproximación conceptual a la relación entre presunción de inocencia y medios de comunicación. Para ello, se hace referencia al ámbito legal dentro del que se enmarca el principio de presunción de inocencia tanto en el contexto internacional como en el colombiano, y se hace un recorrido por conceptos como libertad de expresión/ información en vinculación directa con el derecho penal; los juicios paralelos y su impacto en los procesos penales; los medios de comunicación en la construcción de opinión; así como la corrupción y los delitos sexuales en la esfera mediática.

¹ Las piezas analizadas corresponden a los datos contenidos y suministrados por la base de datos *Factiva*, en el apartado *Publications*.

Dentro de los autores considerados se tienen: Abraham Barrero Ortega (2001), cuyos aportes a propósito de los juicios paralelos y el periodismo se constituyen en un punto de partida importante para abordar la relación entre dos derechos: la presunción de inocencia y la libertad de expresión; en esa misma línea se encuentran los planteamientos de Carlos Bernal y Manuel Moya (2015), quienes se centran de manera particular en el caso colombiano.

También se recogen las contribuciones de Mercedes García Arán², Joan Botella Corral, Rafael Rebollo Vargas, Joan Baucells i Lladós y Luiz Peres – Neto (2008), que en el libro *Malas noticias: Medios de comunicación, política criminal y garantías penales en España* profundizan en el tratamiento del crimen en los medios de comunicación, así como en el concepto de populismo punitivo.

De igual manera, se tienen en cuenta las aportaciones de Lorenzo Gomis (1991), sobre el ejercicio periodístico; Maxwell McCombs (2006), a propósito de la influencia de los medios de comunicación en la agenda pública; Jhon B. Thompson (2005), quien en el texto *El escándalo político: Poder y visibilidad en los medios de comunicación* define y caracteriza la corrupción desde la perspectiva mediática; y Francesc Barata³ que, junto a otros autores como José Luis Díez Ripollés (2000), proporciona pistas sobre el tratamiento periodístico del delito, especialmente útiles durante el proceso de operacionalización de las variables de análisis. Los delitos sexuales fueron considerados desde la teoría del periodismo de sucesos.

En el tercer apartado se presenta la metodología empleada para esta investigación y se refieren elementos propios de la técnica de recolección de datos aplicada, así como la muestra, delimitación temporal y *corpus* de análisis. Posteriormente, en el cuarto capítulo, se sistematizan los resultados

² Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona.

³ “Doctor en ciencias de la comunicación y profesor de la Universidad Ramón Llull, URL (Barcelona), como también profesor del Graduado en Criminología de la Universidad de Barcelona, UB, y del Master Europeo Sistema Penal y Problemas Sociales. [...] En la última década se ha dedicado a la investigación del tratamiento periodístico de la violencia criminal y en el año 2002 presentó su tesis doctoral *La mirada periodística sobre el delito*”. (“Francesc Barata,” n.d.)

obtenidos y que sirvieron como base para la contrastación de hipótesis que tiene lugar en la quinta sección.

Como cierre de este documento, se especifican las principales conclusiones resultantes de esta investigación.

1. JUSTIFICACIÓN

¿Son los medios garantes en la práctica de los derechos de los ciudadanos? ¿Existe primacía de unos derechos sobre otros? ¿Hay momentos en los que, ante los medios de comunicación, los ciudadanos pierden ciertos derechos? Estos son solo algunos de los interrogantes sobre los que se fundamenta esta investigación.

Además de pensar en el ejercicio del periodismo como un elemento clave para la consolidación de sociedades informadas, se considera importante profundizar en la manera como se registran esos datos que influyen de modo determinante en la formación de opiniones.

Así pues, para el desarrollo de este trabajo se tomará como foco de análisis el respeto por el derecho a la presunción de inocencia en el marco del registro noticioso de casos de corrupción y delitos sexuales en Colombia.

Los diarios que se analizarán son *El Tiempo* y *El Espectador*, los dos periódicos de circulación nacional de pago más leídos en ese país⁴. La selección de la muestra se efectuará de manera aleatoria entre las noticias publicadas por estos medios de comunicación entre enero y abril de 2018. *Factiva*⁵ será la base de datos utilizada para la recolección de la muestra.

Como resultado de esta investigación se tendrá un panorama del modo como se aborda el respeto por el derecho a la presunción de inocencia en estos dos diarios, a partir de las representaciones realizadas tanto del presunto inocente —como nos referiremos a la persona sujeta a la acción

⁴ Según el Estudio General de Medios 2017, citado por Caracol Radio (2017). Disponible en: https://www.ivoox.com/periodicos-mas-leidos-colombia-audios-mp3_rf_20158329_1.html

⁵ Propiedad de Dow Jones. Es una de las bases de datos de prensa más importantes del mundo y permite la consulta de cerca de 33.000 fuentes informativas globales, dentro de las que se identifican publicaciones licenciadas, sitios web, blogs, imágenes y videos. A través de un sistema de búsqueda booleano, permite acceder a información premium generada por fuentes reputadas de todo el mundo, identificar tendencias en los contenidos y delimitar la búsqueda de acuerdo con criterios específicos. (“Factiva | Global News Database & Licensed Content - Dow Jones,” n.d.)

penal— así como de las conductas investigadas. Para ello, se ha planteado como tipificación noticiosa de análisis la siguiente: casos de corrupción y delitos sexuales.

La selección de estos dos tipos responde a que el primero constituye una de las mayores preocupaciones de los colombianos según la encuesta Gallup Colombia de febrero de 2018⁶, por lo cual es un tema de interés nacional y que generalmente involucra a personalidades del ámbito político, judicial, económico y social del país, y el segundo —delitos sexuales— porque se considera importante analizar la manera en que es tratada la presunción de inocencia frente a esa clase de delitos, vinculados específicamente con la libertad, la integridad y la formación sexual.

Al tratarse por un lado de delitos que atentan contra los recursos públicos y por el otro, de hechos que involucran la integridad sexual de las personas valdría la pena realizar una comparación frente al respeto por la presunción de inocencia en cada tipo y determinar la existencia o no de diferencias en su tratamiento.

El análisis de dos tipos de noticias tan diferentes nos permitirá, además, observar si el respeto o no a la presunción de inocencia trasciende los ámbitos temáticos y, por tanto, hasta qué punto está instalado en las rutinas del trabajo periodístico.

Lo anterior posibilitará profundizar en la contribución que se está realizando por parte de los periódicos de pago más influyentes en Colombia en la garantía de los derechos de todo ciudadano, especialmente en el ámbito judicial cuando la condición de inocente, de acuerdo con la normativa vigente, debe ser mantenida hasta tanto no se demuestre lo contrario en los estrados judiciales.

⁶ Entre otros, esta encuesta tiene como objetivos “sondear la opinión pública sobre hechos de actualidad y evaluar la opinión que tiene la gente en general de Colombia y del Presidente Juan Manuel Santos”(Gallup Colombia Ltda., 2018). Datos recolectados entre el 16 y el 26 de febrero de 2018, a través de encuestas telefónicas. A la pregunta ¿cuál es el principal problema que tiene Colombia en estos momentos? Un 29% de los encuestados respondió que la corrupción, posicionándose por encima de otros aspectos como orden público/seguridad y poder adquisitivo/economía.

En el desarrollo de este trabajo se elaborará una caracterización pormenorizada de la presunción de la inocencia aplicada al análisis de piezas noticiosas, con el fin de desarrollar una aproximación cuantitativa a su tratamiento por parte de los diarios estudiados.

Se espera que los resultados de esta investigación sirvan como referencia para el cubrimiento periodístico de casos judiciales en un sentido amplio y no solamente de los tipos aquí examinados, y que, a su vez, permitan reflexionar sobre el compromiso de los medios de comunicación con la garantía de los derechos de los ciudadanos y especialmente sobre los relatos que se construyen con el ejercicio periodístico.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo general

Analizar el respeto por el derecho a la presunción de inocencia en el registro noticioso de casos de corrupción y delitos sexuales en Colombia por parte de los periódicos *El Tiempo* y *El Espectador* entre enero y abril de 2018.

1.1.2 Objetivos específicos

1. Determinar los factores característicos del respeto por la presunción de inocencia en el tratamiento informativo de los casos de corrupción y de delitos sexuales analizados.
2. Identificar las similitudes y diferencias en el abordaje del respeto por la presunción de inocencia según la tipificación de casos estudiados: hechos de corrupción y delitos sexuales.
3. Comparar el tratamiento del derecho a la presunción de inocencia por parte de los dos periódicos objeto de análisis en esta investigación.

1.2 Hipótesis de investigación

Hipótesis 1: Existe una tendencia a dar por cierta la responsabilidad penal de los presuntos inocentes con antelación a una sentencia judicial en su contra, lo cual supone la violación de la presunción de inocencia.

Hipótesis 2: La presunción de inocencia es violada con mayor frecuencia en los casos relacionados con delitos sexuales que en aquellos vinculados con hechos de corrupción.

Hipótesis 3: El periódico *El Espectador* respeta en mayor medida la presunción de inocencia en comparación con el periódico *El Tiempo*.

2. MARCO TEÓRICO

Este capítulo realiza un acercamiento teórico a la definición de presunción de inocencia y a su representación formal tanto en la normativa internacional como en el contexto colombiano. Así mismo, presenta algunas consideraciones a propósito de la relación entre medios de comunicación, presunción de inocencia y libertad de expresión-información, para lo cual se hace una aproximación a los conceptos de juicios paralelos y populismo punitivo.

2.1 La presunción de inocencia en el derecho internacional

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948)

La materialización efectiva de los derechos humanos como un factor clave para “promover el progreso social y [...] elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948) constituye un ideal y una apuesta común por la que todos los pueblos deben esforzarse. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948)

Pensar en la aplicación práctica de esta premisa, particularmente desde el ejercicio periodístico es la raíz de este trabajo. Para ello, se toma como foco de análisis el derecho a la presunción de inocencia, entendido, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), como parte de ese conjunto de principios fundamentales para el beneficio y la felicidad de todos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) son

instrumentos de carácter internacional que reconocen la importancia del respeto por este principio y coinciden en el sentido que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. (Convención Americana de Derechos Humanos, 1969)

2.2 La presunción de inocencia en el marco legal colombiano

“[...] Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable [...]”. (Constitución Política de Colombia, 1991)

La Constitución Política de Colombia (1991), en su artículo 29, a propósito del debido proceso y de la presunción de inocencia como fundamento, establece:

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Por su parte, el Código de Procedimiento Penal (2004) plantea, en su artículo 7, que:

Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda

que se presente se resolverá a favor del procesado. En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria. Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda.

Estos planteamientos, en congruencia con lo indicado por los parámetros internacionales, coinciden en mostrar la condición de inocente como una premisa que solo puede ser desvirtuada a partir de una decisión judicial.

A continuación, profundizaremos en este marco legal, con el propósito de establecer el contexto normativo dentro del que se enmarca el ejercicio del derecho a la presunción de inocencia en Colombia. En ese sentido, se considera relevante hacer algunas menciones sobre la Ley 906 de 2004 —que delimita el procedimiento penal—, sus principales objetivos, las fases de un proceso penal, la designación del presunto inocente según las distintas etapas, entre otros aspectos que permitirán construir un panorama general frente a esta dinámica.

2.2.1 Ley 906 de 2004

“La primacía de la libertad de un sujeto procesado frente a las posibilidades de retención, limitando su natural derecho no sólo a la locomoción, a ser considerado inocente hasta no ser vencido en juicio, es la más clara expresión de la conquista de la humanidad en el reconocimiento de su dignidad”. (Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), 2015, p. 277)

La Ley 906 de 2004 reglamenta el procedimiento penal en Colombia. Su implementación tuvo como principales objetivos “no solo fortalecer la función de investigar, sino también implementar un sistema más garantista”. (Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), 2015, p. 21)

Es el resultado de la transición de un sistema caracterizado por la no separación de las funciones de investigación y juzgamiento, y de la preponderancia de las formas escritas (Ley 600 de 2000), a un sistema fundado en la oralidad (Ley 906 de 2004), y en el que:

[...] Se encuentran perfectamente diferenciadas las funciones de los intervinientes en la actuación: un juez imparcial que a nombre del Estado evalúa la responsabilidad del acusado con base en las pruebas que son presentadas a su conocimiento de manera pública, oral, concentrada, con plena confrontación y contradicción; un fiscal, que a nombre del estado ejerce la acción penal a través de la acusación y que como titular de la pretensión punitiva, tiene la obligación de presentar en el juicio las pruebas de cargo adecuadas para desvirtuar la presunción de inocencia; y, una defensa, que en plena igualdad de condiciones con el acusador, representa los intereses del sujeto pasivo de la acción penal. (Gaceta del Congreso No. 134 de 26 de abril, 2002, citado en Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), 2015, p. 24)

Bajo este esquema, el proceso penal se concibe entonces como “la contienda entre dos sujetos procesales —defensa y acusador— ubicados en un mismo plano de igualdad, al final del cual, como resultado del debate oral y dinámico, el tercero imparcial que es el juez, tomará una decisión”. (Gaceta del Congreso No. 531 del 21 de noviembre, 2002, citado en Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), 2015, p. 24)

En ese orden de ideas, posibilitar el acceso a las garantías constitucionales y legales a todas y cada una de las partes intervinientes durante el transcurso del proceso penal se constituye como un elemento fundante de la aplicación del derecho penal.

2.2.1.1 Fases del proceso penal

Ahondar en el derecho a la presunción de inocencia, para efectos de este trabajo y como se mencionó en párrafos anteriores, implica conocer los aspectos más significativos que determinan el proceso penal en Colombia.

En ese sentido, y con el propósito de realizar una primera aproximación a la manera como es representado el presunto inocente a través de los medios de comunicación objeto de estudio, se

encuentra relevante dar una mirada a las etapas del proceso penal en ese país y a partir de ello, identificar los términos que definen la condición formal del presunto inocente en cada una de ellas.

Al respecto, Avella (2007) refiere: “La fase de indagación comienza con la noticia criminal y termina con la formulación de la imputación⁷, con la que se da lugar a la investigación propiamente tal, la que concluye a su vez con la presentación del escrito de acusación, que da inicio a la etapa de juicio, misma que termina con la ejecutoria de la sentencia que pone fin al proceso”. (p. 61)

Se definen pues tres etapas procesales: **indagación, investigación y juicio.**

Indagación: En esta etapa se busca determinar la existencia de la conducta punible, y en ese caso, los posibles autores y/o partícipes. Es de carácter reservado. “La duración de la indagación estará determinada, en primer orden, por la consecución de elementos materiales de prueba, evidencia física o información legalmente obtenida, que permitan edificar inferencia en nivel de motivos razonablemente fundados respecto de la existencia de la conducta punible como de la autoría y participación, estadio en el cual lo procedente es la formulación de la imputación”. (Avella, 2007, p. 64)

En caso contrario, es decir, que la Fiscalía⁸ no cuente con elementos de prueba suficientes, o no sea posible determinar la existencia de la conducta, esta puede archivar la indagación o solicitar al juez la preclusión de la misma. (Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Acusatorio, 2006)

⁷La audiencia de formulación de imputación “permite la vinculación de una persona a una investigación. En ella la Fiscalía, en presencia del juez de garantías, le debe comunicar a la persona los hechos por los cuales lo va a investigar” (Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Acusatorio, 2006. p, 38)

⁸ De acuerdo con el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia (1991) “Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes”. Sin embargo, para el caso de miembros del Congreso de la República, la función de investigar y juzgar está atribuida a la Corte Suprema de Justicia. Para el caso del Presidente de la República, los Magistrados de las Altas Cortes y el Fiscal General de la Nación, la función de juzgamiento es adelantada por el congreso de la República. (“Funciones del Congreso”, 2010)

En esta etapa, el presunto inocente se denomina como indiciado: “Persona a la cual aún no han formulado imputación pero que es sospechoso de la comisión de un delito por hechos que indican que se puede ser el autor o partícipe del mismo”. (Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Acusatorio, 2006, p. 50)

Investigación: En esta fase, la Fiscalía busca fortalecer los elementos materiales probatorios que sustentan la formulación de imputación con el objeto de acusar ante un juez a los procesados, solicitar la preclusión, o proceder con la aplicación del principio de oportunidad⁹. (Avella, 2007)
La defensa tiene un papel activo y puede cumplir las actividades necesarias para controvertir los argumentos del ente acusador. También, en caso de evidenciar algún tipo de indicio de vulneración de los derechos fundamentales del procesado, está facultada para solicitar al juez su verificación. (Avella, 2007)

En caso de encontrar méritos para formular imputación, la persona investigada adquiere la condición de **imputada**: “Persona a la cual la Fiscalía General de la Nación comunica en presencia de un juez de garantías los hechos por los cuales lo está investigando. Esta calidad es la forma de vincularlo formalmente a un proceso penal”. (Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Acusatorio, 2006, p. 50)

El capítulo III, en su artículo 126, del Código de Procedimiento Penal define al imputado como la calificación que se adquiere “desde su vinculación a la actuación mediante la formulación de la imputación o desde la captura, si esta ocurriere primero. A partir de la presentación de la acusación adquirirá la condición de acusado”. (Congreso de la República de Colombia, 2004)

Durante esta etapa también tiene lugar la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en la que el ente acusador, de considerarlo necesario, puede solicitar al juez:

⁹ “Con el nombre de principio de oportunidad se conoce la facultad de no adelantar un proceso penal contra alguien, porque bajo determinadas circunstancias se considera que hay más ventajas en la renuncia a la acción penal que en el enjuiciamiento de una persona”. (Reyes, 2008)

[...] La limitación material o jurídica de la libertad de una persona y de algunos derechos como el patrimonio económico (si se le impone una caución real), la locomoción (si se le imponen presentaciones periódicas o un dispositivo electrónico), cuando se infiera razonablemente que es autor o partícipe de la conducta punible investigada y por la cual se le ha formulado imputación. Ellas pueden ser entonces privativas o no privativas de la libertad, según la clasificación que trae el Código de Procedimiento Penal en su artículo 307”. (Manual de procedimientos de la Fiscalía General de la Nación, 2006, citado en Vanegas, 2007, p. 76).

De ser aprobada esta medida, la persona investigada podrá ser denominada como asegurada.

Juicio: “Es la fase final del proceso penal previsto en la Ley 906 de 2004. Está integrado por las audiencias de formulación de acusación, preparatoria, juicio oral, y fijación de sentencia”. (Avella, 2007, p. 87)

En esta etapa se realiza el descubrimiento de las pruebas de ambas partes en igualdad de condiciones ante un juez imparcial. Como resultado se obtendrá un sentido de fallo: condenatorio o absolutorio. En ese momento, se pueden considerar las siguientes denominaciones para el procesado:

- **Acusado:** “Persona a la cual la Fiscalía acusa de haber cometido un delito. Este término se utiliza solo en la etapa de juicio oral, a partir del escrito de acusación”. (Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Acusatorio, 2006, p. 49)
- **Condenado:** “Persona que ha sido declarada culpable de un delito por un juez mediante sentencia ejecutoriada y, como consecuencia, se le impone una pena”. (Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Acusatorio, 2006. 49)

2.2.1.2 La publicidad en el proceso penal

La Ley 906 de 2004, además de presentarse como reglamentaria de un sistema más garantista para las partes intervinientes, dio especial importancia a la publicidad del proceso penal, de modo que permitió el ingreso (con algunas restricciones legales) a determinadas actuaciones por parte del público y de los medios de comunicación. (Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), 2015). Formalmente, este principio es planteado en el artículo 149 de esa norma de la siguiente manera:

Principio de publicidad. Todas las audiencias que se desarrollen durante la etapa de juzgamiento serán públicas y no se podrá denegar el acceso a nadie, sin decisión judicial previa. [...] No se podrá, en ningún caso, presentar al indiciado, imputado o acusado como culpable. Tampoco se podrá, antes de pronunciarse la sentencia, dar declaraciones sobre el caso a los medios de comunicación so pena de la imposición de las sanciones que corresponda. (Congreso de la República de Colombia, 2004)

Es claro que, si bien la publicidad es un elemento clave dentro del sistema penal acusatorio, y sobre todo si partimos del derecho a la información de todos los ciudadanos, también lo es que esta en ningún sentido debe sobreponerse al derecho a la presunción de inocencia.

En todo momento previo a la sentencia condenatoria por parte del juez y a una decisión en firme que ratifique dicha condena —en caso de presentarse una apelación por parte del condenado— la persona debe considerarse como inocente. En ese sentido, “cualquier medio que se utilice para mostrarlo como culpable está prohibido, como, por ejemplo, presentar la medida de detención como una pena anticipada o como una prueba de su culpabilidad”. (Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Acusatorio, 2006, p. 28)

Sobre la divulgación de información relacionada con procesos penales se plantea que: “Por ninguna razón se debe exhibir a una persona capturada ante los medios de comunicación. Es importante tener presente que no necesariamente por el hecho de ser capturada, una persona puede ser señalada

como culpable. Ningún medio de comunicación podrá utilizar los calificativos de imputada, acusada a ninguna persona, sin que ésta haya recibido tal señalamiento por parte de un juez”. (Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Acusatorio, 2005, p. 29)

Considerar estas denominaciones y usarlas en la etapa penal que corresponde es una muestra de respeto por el derecho a la presunción de inocencia. Con ello no se quiere decir que el periodista deba limitarse única y exclusivamente a la aplicación del lenguaje penal en sus relatos noticiosos, pues “[...] no es un jurista, ni un abogado, ni un juez y, por tanto, su misión no es ser un técnico del Derecho, sino informar con rigor empleando con corrección los términos”. (Rodríguez, 2015, p. 104). Lo que sí se hace imprescindible es que con la terminología empleada se evite caer en imprecisiones que afecten los derechos de la persona que está siendo sujeto de la acción penal.

El uso de términos como procesado e investigado, así como de implicado, supuesto implicado, supuesto autor y sospechoso es apropiado para referirse a los presuntos inocentes, según lo especifica Barata (2009).

2.3 La libertad de expresión y el derecho penal

La libertad de expresión es un derecho fundamental amparado por el Derecho Internacional y por la normativa interna colombiana.

La Declaración Universal de Derechos Humanos indica, en su artículo 20, que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948)

En esa misma línea se expresa la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) que, a propósito de la libertad de pensamiento y de expresión, refiere en su artículo 13 que:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
 - a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
 - b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas [...].

A su turno, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) manifiesta:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
 - a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
 - b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

En el contexto colombiano este derecho, entendido como fundamental, es presentado por la Constitución Política (1991), en su artículo 20, de la siguiente manera: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información

veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

La libertad de expresión goza de un especial reconocimiento y es considerada por Botero et al. (2017) como una condición para la consolidación de sociedades democráticas, cuya existencia sería imposible “sin que las personas tengan la plena libertad de expresar sus propias ideas y opiniones, circular la información disponible, deliberar abierta y vigorosamente sobre los asuntos públicos, ejercer control ciudadano sobre la gestión de lo público, impedir la instauración del autoritarismo, denunciar la injusticia o la arbitrariedad, consolidar una opinión pública informada y activa, y permitir la realización y autodeterminación”. (p. 31)

Es pues una pieza clave para el establecimiento de sistemas pluralistas, en los que la posibilidad de manifestarse libremente y de ejercer control sobre el poder público se convierten en aspectos imprescindibles. Bernal & Moya (2015) afirman que además la libertad de expresión —dentro de la que se encuentra la libertad de información y de opinión— permite controlar aspectos de trascendencia e interés general de tipo político, judicial, electoral, entre otros.

De manera específica, sobre la libertad de información, los mismos autores (2015) dicen que esta debe entenderse en doble vía: desde quien produce la información hasta quien la recibe. De ahí que “este derecho debe estar sometido a un control estricto por parte del medio de comunicación que va a dar conocer una información a la comunidad; por ello su ejercicio debe partir de condiciones adecuadas para su materialización”. (p. 55)

Esta afirmación pone de manifiesto que el derecho a la libertad de expresión, materializado en la libertad de información, por una parte, no puede ser entendido con un alcance absoluto; pues si bien mantiene un estrecho vínculo con el ejercicio democrático, también lo es que en su aplicación este no puede incurrir en la violación de otros derechos como la dignidad, la honra, el buen nombre o la presunción de inocencia.

En ese sentido, la información suministrada por los medios de comunicación debe procurar por ser “veraz, imparcial [...]; no debe ser tergiversada o manipulada, transformada o errónea. Todo ello con la finalidad de no hacer incurrir en un error a aquel que la recibe”. (Bernal & Moya, 2015, p. 55)

Lo anterior atribuye a los medios de comunicación un rol estrechamente ligado con la responsabilidad social, en la medida en que tanto su alcance como influencia trascienden el ámbito privado y se posicionan en un escenario público donde sus afirmaciones adquieren mayor visibilidad.

Lo anterior pone en cuestión entonces los ámbitos de aplicación de la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de informar sobre asuntos penales donde también están en juego los derechos tanto de la víctima como de la persona que es investigada. ¿cuáles son los límites? ¿En qué momento informar sobre un hecho puede entenderse como el ejercicio legítimo de la libertad de expresión?

Como se mencionó previamente, la libertad de informar y por extensión, de expresión, es un ingrediente imprescindible de la democracia. “Entre mayor democracia exista en un determinado Estado, más fuerte se hace el derecho a la libre expresión”. (Bernal & Moya, 2015, p. 20)

Sin duda, el trabajo de los medios de comunicación se convierte en parte esencial de las sociedades pluralistas; no obstante, es necesario profundizar en aquellas situaciones en las que la libertad de expresión entra en conflicto con el derecho penal.

En Colombia, la Corte Constitucional se ha pronunciado a través de distintas sentencias con el fin de dirimir ese dilema y ha puesto límites al derecho de la información. Como premisa general, el alto tribunal ha afirmado que “el derecho a la información [...] es de doble vía, con lo cual se quiere significar que puede ser reclamado tanto por el sujeto activo como por los sujetos pasivos de la relación informativa, es decir, por quien emite las informaciones y por quien las recibe. Este último

puede exigir que le sean suministradas con veracidad e imparcialidad y aquél, por la misma razón, tiene a su cargo los deberes correlativos”. (Sentencia No. T-074/95)

Esto refiere que si bien, en el ejercicio de divulgar determinados datos los medios de comunicación pueden ampararse en el derecho a la información - expresión, también lo es que los ciudadanos o espectadores —quienes reciben esa información— tienen el derecho a exigir que esta se ajuste a criterios de verosimilitud y es ahí donde aparece una de sus limitantes, planteada así por la Corte Constitucional (1992):

El derecho a informar llega hasta el punto en el cual principie a invadirse la esfera del derecho de la persona y la comunidad, no ya únicamente a recibir las informaciones sino a que ellas sean veraces e imparciales. De donde surge como lógica e ineluctable consecuencia que las informaciones falsas, parciales o manipuladas no corresponden al ejercicio de un derecho sino a la violación de un derecho, y como tal deben ser tratadas desde los puntos de vista social y jurídico. (Sentencia No. T-512/92)

En esa medida, el límite al derecho a la información se encuentra cuando este se suscribe a la difusión de contenidos que afecten el derecho de todo ciudadano a recibir información verosímil. Además, cuando producto de estas difusiones se atente contra el pleno goce de derechos como la presunción de inocencia y el debido proceso.

La Corte también se ha pronunciado de manera general sobre la práctica periodística en el marco del derecho a la información y ha manifestado que el periodista o medio de comunicación es responsable de todo aquello que publica. En ese sentido, “si ha recurrido a terceros en calidad de fuentes y hace públicos los datos que ellos suministran, sin ocuparse en su verificación, asume los riesgos inherentes al crédito que les ha concedido”. (Sentencia No. T-074/95)

Así pues, confirmar la información con anterioridad a su publicación es una práctica que el alto tribunal considera parte de la ética periodística y por tanto como una necesaria muestra de lealtad hacia los espectadores. Sobre ese particular, la sentencia No. T-074/95 dice:

Desde el punto de vista jurídico, tiene que ver con la responsabilidad social incorporada a todo ejercicio del derecho a informar. La confirmación salvaguarda la credibilidad del informador y simultáneamente neutraliza la eventual reacción de quien temerariamente aspire a rectificar lo que encuentra sustento en hechos reales y probados. A juicio de la Corte, representa una verdadera garantía del derecho a la información en cuanto fortalece y afirma la certeza colectiva. (Corte Constitucional, 1995)

Sobre la presunción de inocencia y el derecho a la información, la misma Corte ha afirmado que este último “[...] no prevalece sobre la presunción de inocencia cuando el medio de comunicación da por sentado que una persona es responsable penalmente por haber cometido conductas punibles cuando no se ha proferido fallo judicial en firme. En estos eventos la Corte ha determinado que el anticiparse al fallo judicial genera un menoscabo a la garantía penal, que se resarce con la rectificación de la noticia”. (Bernal & Moya, 2015, p. 42)

Es claro entonces, según la norma, que el derecho a la información se hace efectivo y sujeto de reclamo por parte de los medios de comunicación en la medida en que durante su ejercicio no vulnere otros, como es el caso de la presunción de inocencia y los demás que a este se vinculen; en caso de que así sucediese, el medio de comunicación debe tomar las acciones necesarias para corregir el error, de modo que se reduzca al máximo el daño que esto hubiese podido causar.

“Hacer que el lector, oyente o televidente considere verdadero algo que no ha sido establecido, merced al uso sesgado de titulares, comentarios, interrogantes o inferencias periodísticas, equivale a mentir y si, al hacerlo, el medio de prensa involucra a personas en concreto de manera irresponsable, no hace uso del derecho a informar sino que viola derechos del afectado” (Sentencia T-259/94), puntualiza la Corte.

A través de estos pronunciamientos se evidencia una búsqueda por conciliar el derecho a la información con otros derechos que adquieren preponderancia especialmente en el marco de un proceso penal. Es el caso de la presunción de inocencia, la honra, el buen nombre, y el derecho a un juicio justo, que como veremos más adelante, puede verse afectado como consecuencia de los juicios paralelos: fenómeno que se enmarca en el cubrimiento periodístico de procesos judiciales y en el que el comunicador adquiere un rol juzgador anticipado en deterioro de las garantías constitucionales.

Con este tipo de prácticas, de acuerdo con Bernal & Moya (2015), los medios de comunicación pueden generar un clima favorable o desfavorable para el investigado y sus intereses, lo cual puede traducirse en presiones o corrientes de opinión de una influencia tal como para incidir en las decisiones de los jueces: de quienes tienen en sus manos establecer la inocencia o culpabilidad de una persona. Esto supone un riesgo para el debido proceso.

Garantizar ese derecho, manifiestan, implica el uso de un lenguaje que, por un lado, proteja la presunción de inocencia, y por otro que, sin ser especializado, no deforme el contenido de la información, de modo que induzca a los espectadores a construir apreciaciones erradas. Por ello plantean que “dentro de los deberes profesionales de los periodistas se encuentra el de ser crítico con sus fuentes e intentar corroborar y contrastar las informaciones que les suministran”. (p. 42)

Para resumir lo planteado en este apartado, a partir de la normativa, jurisprudencia y estudios revisados, podríamos decir que:

- La libertad de expresión es una condición para el desarrollo de sociedades democráticas.
- La normativa internacional establece la libertad de expresión como un principio rector inherente a la condición humana; todos tenemos derecho a expresarnos de manera libre sin que ello implique algún tipo de discriminación o censura.

- En el ejercicio del derecho a la libertad de expresión pueden evidenciarse conflictos, especialmente en el marco de la relación entre el derecho a la información y otros principios como el de la presunción de inocencia y el debido proceso.
- La libertad de expresión no puede considerarse como un derecho exento de límites. En el caso específico colombiano y a propósito del ejercicio informativo de los medios de comunicación, la Corte Constitucional ha resaltado la necesidad de que este se suscriba a criterios de verosimilitud y buena fe, de manera que la información que se suministre a la audiencia —que también es sujeto del derecho a estar informado— sea de calidad y propenda por la construcción de sociedades informadas a partir de datos contrastados y no de aquellos producto de tergiversaciones o afirmaciones lesivas de los derechos.
- Se subraya la importancia de un periodismo socialmente responsable que parta de la pluralidad, de la contrastación de fuentes y respetuoso de los derechos, pues sus afirmaciones —cuando estas anticipan las decisiones que se toman en un juicio o hacen valoraciones sobre una persona inmersa en un proceso penal y cuya culpabilidad no ha sido probada— pueden tener una incidencia negativa para el debido proceso y violar la presunción de inocencia.
- La información divulgada a través de los medios de comunicación se consolida como un insumo fundamental para la construcción de opinión. En ese sentido, “la visibilización de las personas procesadas ante los medios de comunicación puede generar diversas reacciones en la sociedad: sentimientos de odio y venganza por parte de la ciudadanía en general o, en algunas situaciones, conmiseración y compadecimiento debido a que son mostradas como seres salvajes expuestos en una jaula con una pijama de rayas y sometidas al escarnio público”. (Bernal & Moya, 2015, p. 85)

2.3.1 Sobre los juicios paralelos y la presunción de inocencia

“Los medios de comunicación desempeñan funciones de vital importancia en el estado democrático contemporáneo. Una de las más trascendentes es la de velar por la legitimidad democrática del poder judicial o, lo que es lo mismo, controlar que las decisiones judiciales se ajusten a la ley”. (Barrero, 2001, p. 171)

Esta premisa, además de resaltar el papel fundamental de los medios de comunicación en la sociedad contemporánea, es el punto de partida para analizar la relación que se establece entre la función de informar, ligada a la libertad de expresión e información, y la presunción de inocencia, otro derecho fundamental del que todo ciudadano debe gozar.

Cuando los medios de comunicación, en el cubrimiento informativo de procesos de carácter penal, emiten juicios que corresponden estrictamente a los jueces, se considera que existe un juicio paralelo (Barrero, 2001). Este fenómeno, además de lesionar la presunción de inocencia de la persona implicada, pues “los medios pueden inducir en la opinión pública un veredicto anticipado de culpabilidad de una persona, con grave menoscabo de sus derechos fundamentales” (Barrero, 2001, p. 171), también puede influenciar la investigación que se desarrolla así como la imparcialidad de los jueces, afirma el mismo autor.

Además, entre las consecuencias de la consolidación de juicios paralelos —indican Bernal & Moya (2015)— se encuentra el conflicto que puede surgir cuando el juicio anticipado efectuado por los medios de comunicación no coincide con la decisión judicial, lo que supondría una contrariedad en la opinión pública y por tanto, una repercusión en la legitimidad de la justicia.

Pese a que la persona implicada o presunto inocente aún no ha sido sometido a un juicio ante las autoridades competentes, los juicios paralelos proporcionan un veredicto de modo que “la comunidad tendría un concepto sobre este, bueno o malo pero anticipado, sin que haya sido juzgado

por el juez natural, de tal suerte que el principio de imparcialidad se encuentra trasgredido”. (Bernal & Moya, 2015, p. 87)

Esta práctica contribuye a la generación de formas de estigmatización en las que se habla de buenos y malos, convirtiendo el proceso penal en “una novela en la que constantemente el imaginario traza percepciones de lo que este considera que es la realidad, incidiendo indirectamente en el proceso penal, sin que exista certeza sobre el imaginario cotidiano”. (Bernal & Moya, 2015, p. 88)

Si bien es cierto que la publicidad es uno de los principios del sistema penal y presenta una estrecha vinculación con el derecho a informar y a estar informado, este no puede extralimitarse hasta el punto de configurarse como un instrumento lesivo de otros derechos. Bernal & Moya (2015) aseveran que su incorrecta utilización puede representar peligros para la adecuada aplicación de la justicia “vulnerando el principio de independencia e imparcialidad del operador judicial, los derechos de buen nombre, presunción de inocencia, al debido proceso —entendido como juicio justo— y a la defensa como consecuencia”. (p. 98)

Barrero (2001), por su parte, indica que una alternativa a esta práctica de los juicios paralelos no contempla la supresión indiscriminada de la información de carácter judicial-penal en los medios, sino más bien implica conciliar “la función constitucional de la justicia con la de los medios de comunicación. Resulta imprescindible evitar la sustitución de los jueces por la prensa, pero ello no debe ser una excusa para limitar el derecho de crítica pública a la justicia ni, por supuesto, limitar la publicidad de las actuaciones judiciales”. (p. 173)

Lo anterior, de acuerdo con el mismo autor, no solo contribuiría a la realización de juicios justos, sino también a la preservación del derecho a la presunción de inocencia, entendida desde el respeto por la dignidad de una persona, cuya supuesta participación en determinada conducta no ha sido debidamente probada.

A propósito del sistema penal colombiano y los medios de comunicación, Bernal & La Rota (2013) afirman que es indudable que con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, el principio de publicidad adquirió un papel de gran relevancia en el sentido de dar mayor transparencia a las actuaciones judiciales.

Sin embargo, y a partir de un trabajo investigativo desarrollado por los citados autores a propósito de la independencia judicial en Colombia, se encontró que la presencia de los medios en las audiencias públicas, además de garantizar el acceso a la información para los ciudadanos, puede tener efectos en dos sentidos: “Los medios mismos intervienen como agentes generadores de presión (ya sea porque tienen intereses u opiniones propias acerca de los casos, o porque el interés del público en los mismos los convierte en temas de interés público)” (Bernal & La Rota, 2013, p. 78) y en un segundo caso cuando “actúan como canales para que otros actores ejerzan las presiones sobre los funcionarios judiciales”. (Bernal & La Rota, 2013, p. 78)

Técnicamente, el registro mediático de los casos penales no tendría por qué afectar la imparcialidad; no obstante, cuando la difusión noticiosa se enmarca dentro de lo que se denomina juicios paralelos la imparcialidad puede verse trastocada “por campañas mediáticas, orientadas unas veces a defender determinadas posturas de los medios y otras simplemente a defender un interés empresarial a través de la publicación de noticias especialmente atractivas para el público”. (Barrero, 2001, p. 183)

El mismo autor sintetiza el sentido ideal de la publicidad del proceso penal como una garantía para los derechos tanto de la persona que está siendo investigada, como para las actividades propias de la investigación - acusación con el fin de evitar al máximo rastros de irregularidades que podrían presentarse bajo el amparo de actuaciones secretas. Bernal & Moya (2015) afirman que “la dificultad no se encuentra en hacer pública la actuación de los tribunales judiciales, sino en hacer un juicio social del proceso penal”. (p. 87)

Los periodistas y medios de comunicación, en general, deben no solo tener claro sino hacer entendible para la audiencia que el objetivo del proceso penal es conocer la verdad sobre los hechos; en ese camino, es decir, en desarrollo de las distintas etapas que lo componen lo que se tiene son distintas versiones de los acontecimientos, así como de las posibles responsabilidades, las cuales deben ser contrastadas y evaluadas por los jueces. “Durante el proceso aún no se conoce la verdad, la oficial claro está, aunque se está en vías de conocerla. Y conociendo que la verdad durante el proceso es una verdad discursiva o controvertida, no ha de alinearse con la parte acusadora”. (Barrero, 2001, p. 182)

De ahí la necesidad —en coherencia con lo manifestado por Barrero (2001) — de un compromiso voluntario de las empresas de los medios de comunicación con la contrastación de fuentes y la pluralidad, de modo que se contemplen las posiciones contradictorias entre acusación y defensa. También, por parte de las instituciones públicas en el sentido de cumplir una “labor didáctica orientada a concienciar a los ciudadanos de que, pese a los errores de la Administración de Justicia, sólo a través del proceso se satisfacen las garantías específicas del imputado. Asimismo, sería aconsejable que los medios de comunicación prestasen su colaboración a esta causa, difundiendo la idea de que la verdad oficial es la que asume la sentencia firme”. (Barrero, 2001, p. 187)

“El periodismo veraz es aquel diligente en la búsqueda de las versiones sobre el hecho, actuando con prudencia en la construcción de la noticia”. (Lello, 2001)

2.4 Los medios de comunicación en la construcción de opinión

“Nada podrá medir el poder que oculta una palabra. Contaremos sus letras, el tamaño que ocupa en un papel, los fonemas que articulamos con cada sílaba, su ritmo, tal vez averigüemos su edad; sin embargo, el espacio verdadero de las palabras, el que contiene su capacidad de seducción, se desarrolla en los lugares más espirituales, etéreos y livianos del ser humano.” (Grijelmo, 2002)

Preguntarnos por la forma como construimos nuestra visión sobre el mundo indudablemente nos lleva a considerar el papel de los medios de comunicación y sus implicaciones en la formación de imaginarios en la audiencia.

Gomis (1991) afirma que por cuenta de los medios podemos conocer el presente social; es decir, aproximarnos al mundo que está más allá de nuestro círculo familiar o inmediato, el cual resultaría bastante pobre de no ser por las posibilidades provistas por los medios de comunicación. “Gracias a los medios percibimos una realidad [...] como algo que es posible percibir y comentar. [...] Son los medios los que mantienen la permanencia de una constelación de hechos que no se desvanecen al difundirlos, sino que impresionan a la audiencia, dan qué pensar, suscitan comentarios y siguen presentes en la conversación”. (p. 14)

Los medios de comunicación se constituyen como parte significativa de la cotidianidad y como telón de fondo de nuestra vida en común (Gomis, 1991); de esa vida que se encuentra ciertamente influida por lo que vemos, leemos u oímos.

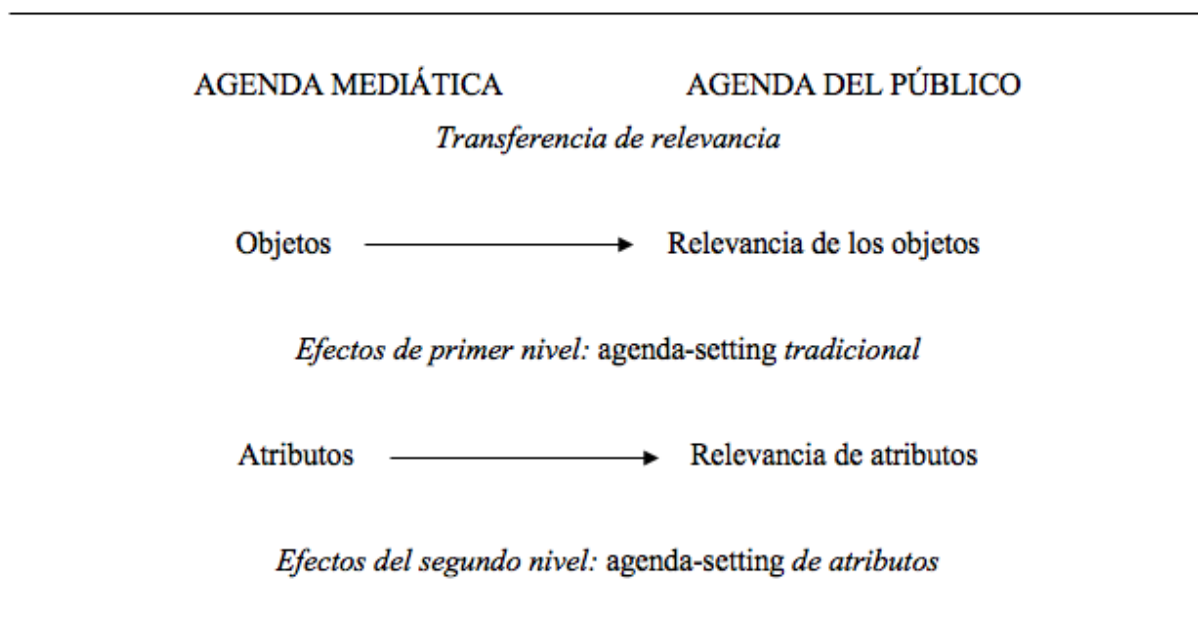
Maxwell McCombs (2006), a propósito de esa relación medios de comunicación - audiencia, plantea que los medios no solo pueden decirnos sobre qué pensar, pues “dirigen nuestra atención e influyen en nuestra percepción de cuáles son los temas más importantes del día” (p. 24), sino que también pueden incidir en cómo pensamos acerca de esa información que ha sido puesta en un escenario visible: “Los medios informativos pueden establecer la agenda del debate y del pensamiento público. Y a veces, hacen más que eso” (p. 26). Tienen pues una repercusión en nuestra opinión, y por extensión, en algunos casos —según el autor estadounidense—, en lo que hacemos.

Esta afirmación, enmarcada dentro de lo que McCombs denomina como el segundo nivel de la *agenda-setting*, se ocupa de un elemento que ya hemos tratado anteriormente y que está relacionado básicamente con el rol de los medios en el contexto social.

El enfoque que se quiere presentar en ningún sentido intenta atribuir una única y exclusiva responsabilidad a los medios de comunicación en la formación de opinión, ni “postula unos efectos todopoderosos [...]”. Tampoco considera a los miembros de la audiencia unos autómatas, que están esperando a que los medios informativos vengan y los programen. Pero la *agenda-setting* sí que asigna un papel central a los medios informativos a la hora de dar inicio al repertorio de la agenda pública”. (McCombs, 2006, p. 31)

El proceso de establecimiento de agenda, en su primer y segundo nivel, es resumido por McCombs (2006) de la siguiente manera:

Imagen 1 - El primer y segundo nivel del establecimiento de la agenda



Fuente: McCombs, M. (2006). Estableciendo la agenda. p. 140.

El objeto se ubica en el primer nivel de la agenda y hace referencia a la “cosa hacia la que dirigimos nuestra atención o la cosa sobre la que tenemos una actitud o una opinión” (McCombs, 2006, p. 138). En el segundo nivel se encuentran los atributos: aquellas características que le otorgamos a

esos objetos. “El primer nivel es, por supuesto, la transmisión de la relevancia de un objeto. Y el segundo nivel es la transmisión de la relevancia del atributo” (McCombs, 2006, p. 139). Ese segundo estadio sugiere entonces que los medios de comunicación no solo indican qué debemos pensar —sobre qué objeto— sino también cómo pensar sobre ese objeto; es decir, qué atribuciones le asignamos y con ello, qué opiniones nos formamos frente al mismo. (McCombs, 2006)

Desde esta perspectiva, el establecimiento de la agenda implica una responsabilidad ética para los periodistas, pues no solo se trata de qué temas se ponen en el escenario público, sino además de cómo se presentan, pues esto repercute en las imágenes de la realidad que construimos. (McCombs, 2006)

A partir de esta premisa es que resulta relevante preguntarse por aquellas contribuciones efectuadas por los medios de comunicación a la opinión que se forman los espectadores. A razón de ello, y en coherencia con el objetivo de trabajo propuesto para esta investigación, realizaremos una aproximación específica al periodismo. Para ello, se tomarán como referencia los planteamientos sobre la cuestión efectuados por autores como David Vidal (2002)¹⁰ y Albert Chillón.

Partiremos de caracterizar al periodismo como una actividad lingüística y por tanto condicionada por un proceso intencional de quien redacta la noticia, que a su vez está influido por múltiples factores que determinan tanto su forma de ver el mundo, como de interpretarlo y transmitirlo (Vidal, 2002); de ahí que:

El conocimiento que ofrece no es científico, sino fruto de excitaciones nerviosas y de la expresión de opiniones sobre experiencias. Esto quiere decir que la noticia nunca puede ser un hecho, ni siquiera la traducción más o menos exacta en palabras de lo que ha pasado, sino la transustanciación (ya que el acto lingüístico avanza a través de diversas sustancias: de materia

¹⁰ Las citas de este autor expuestas en este trabajo corresponden a una traducción propia del catalán al castellano.

a excitación nerviosa, y de excitación nerviosa en sonidos y en signos) en palabras de la experiencia de que el periodista o el medio entero ha vivido. (Vidal, 2002, p. 37)

Esto nos ubica en un contexto que desvirtúa la idea de objetividad en el periodismo en la que se basaban los postulados positivistas, pues como hemos visto, es el resultado de un proceso de interpretación de la realidad (Núñez Ladevéze, citado en Chillón, 2001) y, por tanto, de un conjunto de decisiones del periodista.

Así las cosas, más que discutir sobre el paradigma objetivista, nos enfocaremos en el rol del sujeto; de esa persona que construye los relatos que recibe la audiencia. Por ello, la necesidad de entender al periodista desde una mirada que lo reconoce como un individuo cargado de sentido, definido por un contexto y que interpreta una realidad en función de su subjetividad.

Desde esa perspectiva, Chillón (2001) concibe el periodismo como “una profesión intelectual cuya esencia interpretativa hace inevitable la integración dialéctica de la cultura y la capacidad de discernimiento crítico, por un lado, y de las habilidades expresivas y técnicas, por otro”. (p. 26); entonces, es imposible referirse a la práctica periodística desde una idea objetivista; más bien, y como veremos más adelante, de lo que se trata es de identificar qué narrativas se construyen a partir de la subjetividad propia del periodismo.

Sobre ese asunto y partiendo de entender el periodismo como relato, Vidal (2002) dice que “nos encontramos ante un relato, que ordena el mundo en categorías, personajes y escenarios. La narración supone una valoración y un redimensionamiento de la facticidad objetiva y material a la que se apela”. (p. 46)

De ahí que ese relato y las jerarquizaciones, así como decisiones de denominar o referirse a la realidad de determinada manera en una pieza noticiosa se consoliden como elementos clave para comprender las representaciones que se elaboran en los medios de comunicación.

Son precisamente estas representaciones las que abordaremos de manera transversal a lo largo de este trabajo: 1. La representación de una persona vinculada a un proceso penal como posible responsable y 2. La representación del delito o conducta que se investiga. Cabe resaltar que como línea base se tendrá la presunción de inocencia, la cual ya ha sido definida y abordada en función tanto de la normativa colombiana como de la relación con los medios de comunicación.

Se considera necesario ahondar en este aspecto porque, como se ha mencionado, los medios de comunicación juegan un papel de significativa importancia social y, por tanto, con incidencia en las formas de ver el mundo de los espectadores.

Sobre esa influencia y sobre la necesidad de repensar la manera en que se interpreta la realidad por parte de los medios de comunicación, Campos (2012) afirma:

[...] El problema es que los medios hemos construido un discurso en el que planteamos que lo que nosotros transmitimos es la realidad. [...] Lo que nosotros transmitimos en los medios de comunicación son realidades construidas, lo cual no significa que sean falsas. Lo que quiero decir es que son el resultado de elecciones y de toma de decisiones que hacemos los periodistas constantemente sobre tres cosas: primero, decidir de todo el universo de información disponible qué es noticia y qué no es noticia; segundo, cómo la jerarquizamos, qué tanto tiempo le dedicamos y qué tanto hablamos sobre las otras notas ahí junto a las esquelas; y tercero, cómo encuadramos la información, en qué contexto mostramos la información que estamos presentando. (p. 19)

Así que toda noticia constituye un relato y por tanto es producto de un conjunto de acciones deliberativas e intencionales de un intérprete (Vidal, 2002), entendido como un “Operador semántico”¹¹ que dentro de un conjunto de posibilidades escoge determinados elementos, los procesa, clasifica y presenta a la audiencia tras un proceso de manipulación lingüística (Gomis,

¹¹ Término utilizado por José Luis Martínez Albertos (1978).

1991). “Al definir el hecho en términos verbales, con palabras, la interpretación de la realidad es ya forzosamente selectiva. Califica de algo a alguien, describe con un verbo y no con otro la acción de un individuo. No hay otra manera humana de hacerlo que sirviéndose del lenguaje. Y el lenguaje no puede dar cuenta de la realidad sin caracterizarla, sin escoger unos aspectos y olvidar otros, sin definir la realidad en términos excluyentes.” (Gomis, 1991, p. 42)

2.5 Corrupción y medios de comunicación: el escándalo y su visibilidad¹²

Como lo advertimos, el fenómeno de la corrupción será uno de los asuntos de los que se ocupará este trabajo. Para ello, y con el fin de dar una mirada acerca de algunos de sus rasgos particulares, y especialmente de su interrelación con los medios de comunicación, tomaremos como referencia los planteamientos efectuados por John B. Thompson (2001) en su libro *El escándalo político. Poder y visibilidad en la era de los medios de comunicación*.

La corrupción se define, según Thompson (2001), como “la perversión o pérdida de integridad en el ejercicio de tareas públicas por soborno o favoritismo, especialmente en el caso de funcionarios del estado o de alguna otra institución pública”. (p. 51)

Desde su perspectiva, es probable que este fenómeno y en general, cuestiones de carácter político-financiero sean susceptibles a los escándalos porque normalmente implican “la violación de las normas que rigen la adquisición y la asignación de recursos económicos. En algunos casos también pueden implicar la violación de leyes que regulan las transacciones financieras y la utilización de los recursos por parte de los individuos que desempeñan un cargo público o que aspiran a ocuparlo” (Thompson, 2001, p. 219). Al tratarse de hechos que generalmente involucran a personas que ostentan cargos públicos, es decir, con cierto grado de reconocimiento y de los cuales la ciudadanía espera ciertas conductas, el impacto del escándalo se intensifica.

¹² Este apartado se construye con base en la teoría planteada por Thompson (2001) en su libro *El escándalo político. Poder y visibilidad en la era de los medios de comunicación*.

El autor inglés (2001) define el escándalo como el conjunto de hechos o acontecimientos que infringen ciertas normas, que son puestos en conocimiento de terceros y que por su relevancia provocan una respuesta que trasciende la esfera privada. Según afirma, para que una situación se convierta en escándalo se debe presentar la infracción de determinados valores comunes en una sociedad; la existencia de un elemento secreto que al ser descubierto desata el escándalo; la desaprobación de la acción por parte de personas ajenas a la misma y la denuncia pública de los hechos lo cual incide en la reputación de los responsables.

De ahí que “las actividades corruptas solo podrán convertirse en foco de un escándalo si se las conoce o si los no participantes tienen la firme convicción de que existe; en otras palabras, es preciso que la corrupción se revele para que se convierta en un escándalo. [...] El escándalo estalla si y solo si el velo del secreto se levanta y las actividades corruptas llegan a conocimiento de terceras personas o se convierten en el foco de una investigación pública”. (Thompson, 2001, p. 52)

No obstante, que se convierta o no en escándalo, dice el autor, también depende de la fuerza vinculante de las normas que han sido quebrantadas. Es decir, de la relevancia que posean en el contexto social en el que se producen y si, desde esa realidad, merecen su repudio o censura. La trascendencia que adquiere un escándalo está mediada, entre otros aspectos, por el nivel de gravedad que la sociedad le atribuye.

A propósito de la caracterización de los escándalos político - financieros y por extensión, de corrupción, Thompson (2001) distingue varias formas:

Una de esas formas implica un adecuado intercambio de recursos económicos (dinero, regalos, etcétera) realizado con el propósito de influir en determinadas decisiones o resultados políticos —es decir, implica, en otras palabras, la práctica del soborno—. Un segundo tipo implica la apropiación indebida de fondos públicos, el fraude, el engaño o la mala utilización de la información para la obtención de un beneficio personal o privado. Una tercera forma implica la

existencia de intereses económicos privados o sin declarar que podrían entrar en conflicto, o suscitar la opinión de que entran en conflicto con las obligaciones y responsabilidades públicas de un político. El cuarto tipo comprende varias clases de corrupción electoral y de procedimientos ilegales, incluyendo el soborno de electores, la división amañada de los distritos electorales para obtener ventajas en las elecciones, y la apropiación indebida de los fondos destinados a la campaña. De distintas maneras, las diversas formas de escándalo político-financiero ponen de relieve la existencia de una interconexión ilícita entre el dinero y el poder. (p. 220)

A partir de esta clasificación podemos hacernos una idea general de la relación entre corrupción y escándalo, en la cual el poder, el dinero y las prácticas irregulares adquieren un papel preponderante.

Ahora, valdría la pena ahondar en el papel de los medios de comunicación. Como hemos visto, de acuerdo con la teoría planteada por Thompson (2001), uno de los elementos imprescindibles para que un hecho se convierta en escándalo es que sea reprochado, pero además que trascienda las habladurías propias del entorno privado y alcance un carácter público.

Y qué mejor manera que a través de los medios de comunicación. Son ellos quienes convierten los escándalos en acontecimientos mediáticos, “cuyo alcance se extiende a considerable distancia de las acciones o transgresiones originales que se encuentran en su epicentro. [...] La revelación en los medios y los comentarios en los medios no son rasgos secundarios o incidentales de estas formas de escándalo: son parcialmente constitutivos del escándalo”. (Thompson, 2001, p. 92)

Como bien lo afirma Thompson (2001), el rol de los medios en la difusión y consolidación del escándalo no es un asunto menor. Es más, se trata de un elemento constitutivo, sin el cual sería imposible que una situación considerada como irregular o digna de rechazo en la esfera social dejara de ser un asunto conocido por unos pocos para alcanzar el entorno público.

“El escándalo se desarrolla en los medios, y las actividades de los profesionales y las organizaciones mediáticas, con sus prácticas y ritmos de trabajo particulares, desempeñan un papel crucial. Los medios operan como un dispositivo que enmarca los acontecimientos, concentra la atención sobre un individuo o sobre una supuesta actividad, e impide que esa atención disminuya”. (Thompson, 2001, p. 108)

Con esta aseveración, además de reiterar la importancia de los medios de comunicación y confirmar lo ya mencionado en el apartado anterior frente a la influencia de los medios en la construcción de opinión —recordemos las anotaciones de McCombs (2006)— Thompson nos remite a pensar en lo que a lo largo de este trabajo se quiere abordar de manera transversal y es la lógica periodística a partir de la construcción del relato.

Si bien el autor, desde mi perspectiva, no intenta hacer ninguna revisión crítica sobre el ejercicio periodístico, sino más bien ahondar en la génesis, desarrollo, caracterización y consolidación del escándalo en el que los medios adquieren un rol decisivo, sí nos da algunos elementos que vale la pena poner de manifiesto.

Es el caso, por ejemplo, de aquellos factores que inciden en la configuración del escándalo mediático y del clima que allí se forja: “En el caso de los escándalos mediáticos [...] las formas abiertas de comunicación mediata constituyen el principal modo de la desaprobación. Los titulares de los periódicos, la articulación de juicios adversos en la prensa, los mordaces y en ocasiones humillantes caricaturas de los individuos cuyas acciones (reales o presuntas) constituyen el blanco de los reproches: la repetida expresión de esos actos mediatos de comunicación es lo que genera el clima de censura que caracteriza a los escándalos mediáticos”. (Thompson, 2001, p. 100)

Esas manifestaciones de reproche de quienes no están implicados en el hecho cuestionado son denominadas por Thompson (2001) como discurso infamante:

Se trata de un tipo de discurso moralizador que prodiga reproches y reprimendas, que refunfuña y condena, que expresa desaprobación hacia las acciones o hacia los individuos. Es un discurso que implica que las acciones son vergonzosas o deshonorosas, y por consiguiente implica también que las acciones habrán de acarrear vergüenza, deshonor, y descrédito al individuo o individuos que las realizaron. Es un discurso que puede estigmatizar. El discurso infamante puede expresar diferentes grados de reproche, desde la represión suave y una cierta languidez, o incluso una aburrida desaprobación, hasta la más irrestricta protesta de moral ultrajada. También puede expresarse de diferentes modos y en distintos contextos. (p. 41)

Y este fenómeno mediático tiene lugar en la sociedad de la autorrevelación: manera como Thompson (2001) se refiere a una sociedad caracterizada por la exposición permanente y en la que se diluyen las barreras de espacio y tiempo, de modo que los políticos y en general, muchos aspectos de la vida misma, son cada vez más visibles al mundo gracias a los medios de comunicación.

Desde la práctica mediática, Thompson (2001) plantea que existe cierta contribución a “generar una tendencia al escándalo” (p. 117). A partir de dos ideales —fidelidad a los hechos y entretenimiento— instaurados como parte de la ética atribuida al periodismo desde su surgimiento como profesión, Thompson aclara cómo se evidencia dicha aportación e insiste en que no todos los medios y periodistas dan la misma relevancia a cada uno de estos factores. Así lo refiere:

Para los periodistas y periódicos que subrayan el ideal del entretenimiento, el escándalo es un maravilloso asunto: permite que los periodistas hilen los contenidos fácticos, incluyéndolos en vívidas historias de relaciones secretas y fechorías en las que se hallan implicadas destacadas personalidades públicas, mientras expresan al mismo tiempo, una fuerte dosis de censura moral. Pero el escándalo se encuentra también íntimamente vinculado a los objetivos y las prácticas de los periodistas y las organizaciones mediáticas que tratan de resaltar la realidad de los hechos. Y ello, porque los profesionales del periodismo de investigación han llegado a considerarse a sí mismos algo más que reporteros obligados a explorar bajo la superficie de las cosas con el fin

de llegar a la verdad y se ven también como reformadores sociales que tratan de influir en las agendas políticas provocando la indignación moral de sus lectores y espectadores. (p. 118)

De lo anterior podemos deducir que si bien existe cierta diferenciación en cuanto los ideales que priman en la práctica periodística, frente al escándalo existe un punto de encuentro y es en la idea de provocar indignación. Es por ello que “la revelación de actividades ocultas que conmocionan y sorprenden, que golpean el nervio profundo de la comunidad y obligan a responder a los dirigentes políticos se ha convertido en parte de la propia concepción profesional de los periodistas”. (Thompson, 2001, p. 118)

Sin embargo, indica el autor, la mayoría de los hechos revelados por medio de los escándalos no son el resultado del trabajo investigativo de los periodistas; puede suceder en algunas ocasiones, pero principalmente son el producto de las labores desarrolladas por instituciones encargadas de adelantar funciones de este tipo; de modo que la función de los medios en ese caso, estaría dada, básicamente, por “seleccionar y divulgar la información que otros generan, convirtiéndola en una serie de historias atractivas y proporcionando marcos de interpretación adecuados”. (Thompson, 2001, p. 119)

2.6 Los delitos sexuales en los medios de comunicación

Los delitos sexuales son aquellos que atentan contra la libertad, integridad y formación sexuales de las personas. (Código Penal colombiano. Ley 599 de 2000)

Según Díez Ripollés (2000), el interés de los medios de comunicación por esta tipología delictiva, que podría catalogarse como de interés humano¹³, obedece al significado que esta posee en la cotidianidad. “[...] Agresiones sexuales, lesiones, secuestros, [...] inciden de una manera

¹³ De acuerdo con caracterización efectuada por Rodríguez (2015) a propósito de las temáticas del periodismo de sucesos.

inmediata y especialmente visible en los bienes más elementales para la convivencia, aquellos con los que todos contamos para nuestro desarrollo personal; de ahí que su realización origine una singular inquietud entre el resto de ciudadanos, que se identifican fácilmente con la víctima y sus padecimientos”. (Díez Ripollés, 2000)

Este tipo de casos, de acuerdo con lo manifestado por Rodríguez (2015), se enmarca dentro del denominado periodismo de sucesos, en el que además se abordan hechos relacionados con homicidios, robos, tráfico de estupefacientes, accidentes de tránsito y catástrofes naturales.

En general, se trata de cuestiones que tienen lugar en el día a día de la sociedad y que se relacionan principalmente con la delincuencia común y los siniestros. Trascienden los límites del periodismo de sucesos aquellos delitos que “tienen que ver con corrupción política, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra la Administración Pública (cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes) o contra la Administración de Justicia (prevaricación, encubrimiento, acusación y denuncias falsas)” (Rodríguez, 2015, p. 40) y que por tanto pasan a ocupar espacios en las páginas vinculadas con el escenario político, nacional, social o económico.

Este tipo de periodismo, según Rodríguez (2015), ha sido vinculado tradicionalmente con el sensacionalismo, lo cual es calificado por la misma autora como injusto, pues indica que este no es un elemento propio de la información de que trata el periodismo de sucesos. También es posible encontrarlo en otros ámbitos como el periodismo deportivo o en lo que se denomina prensa rosa.

Lo que sí es cierto, de acuerdo con Rodríguez (2015), es que “la mayoría de las noticias de sucesos son impactantes por sí mismas, no porque sean sensacionalistas ni amarillistas. El periodismo de sucesos es un reflejo de lo que ocurre en la calle, del comportamiento del ser humano en su faceta más sorprendente, violenta y criminal” (p. 30). Empero, recalca la autora que el tratamiento informativo de estos acontecimientos, si bien debe reflejar lo que ha ocurrido, no debe fundarse en “exageraciones e imágenes que nada añaden a la noticia, salvo morbo y detalles escabrosos”. (p. 146)

Otro de los elementos característicos del periodismo de sucesos es que “no necesita ser promovido por fuentes interesadas. [...] Los sucesos suelen estar protagonizados mayoritariamente por gente corriente, personas desconocidas que aparecen en los medios no voluntariamente, sino como consecuencia de los hechos cometidos o padecidos”. (Rodríguez, 2015, p. 28)

Son hechos que están en la cotidianidad y que ponen de presente ese interés humano, que genera diversos sentimientos en los ciudadanos “la ira, la compasión, la pena, la angustia, la tristeza, el miedo, el odio, la sorpresa” (Rodríguez, 2015, p. 27) entre los espectadores.

En este punto vale la pena señalar que además de emociones, la información sobre hechos de este tipo que se transmite en los medios de comunicación también influye en la construcción de alarmismos sociales. Este término es utilizado por Barata (2007) para referirse a una posible consecuencia de la difusión reiterada de información sobre el crimen a través de los medios de comunicación y que por tanto, incide en la percepción sobre el delito que tiene el ciudadano. “Las informaciones y relatos que suministran los medios de comunicación y las industrias culturales constituyen el tercer elemento que amplía o reduce los miedos y las angustias sociales que genera el miedo al delito. Los hechos vividos y los hechos comunicados se interfieren, se refuerzan o se anulan en la mente de las personas. No importa qué haya de realidad o proyección imaginaria, porque, en definitiva, todo se transforma en sentir ciudadano”. (Barata, 2007, p. 28)

Afirma que los medios de comunicación se constituyen en ese actor que media entre los espectadores y el mundo del crimen y, por tanto, en gran medida las percepciones que estos tienen sobre el delito están marcadas ciertamente por los contenidos mediáticos, además de la experiencia personal, es decir, del contacto directo con un hecho delictivo o de la experiencia compartida por personas cercanas. (Barata, 2007)

Por su parte, Gallego (2003) se refiere al suceso como un indicativo de malestar social: “Visto el suceso como un síntoma de un problema social, que hace emerger las tensiones, conflictos y contradicciones latentes en la sociedad, los hechos que podemos abarcar con este término adquieren

otro carácter y lejos de ser acontecimientos *excepcionales* protagonizados por individuos o sectores marginales de la sociedad, los sucesos (que vistos desde esta perspectiva dejarían de serlo para convertirse en problema social) se convierten en signos del malestar social”. (p. 54)

Desde esta mirada, entender los hechos que se enmarcan como sucesos de una manera integral y no como hechos aislados permitiría formar un panorama indicativo frente al ecosistema social en el que se desarrollan.

Finalmente, y a propósito del tratamiento mediático de los sucesos, Rodríguez (2015) informa que inclusive cierto tipo de prensa —que podríamos asociar con aquella de referencia— y que de manera común se muestra renuente a publicar de forma diaria contenidos sobre sucesos “es consciente de que esta información es un contenido inseparable de la actividad periodística y los publica en sus ediciones digitales y en sus páginas impresas de los domingos”. (Rodríguez, 2015, p. 33)

Para concluir el apartado teórico consideramos pertinente aludir al populismo punitivo, cuya relación con los medios de comunicación y la presunción de inocencia abordaremos a continuación.

2.7 El populismo punitivo

De acuerdo con lo afirmado por Larrauri (2009), “lo que caracterizaría el populismo punitivo es precisamente una alusión creciente a la opinión pública para justificar las reformas penales”. (p. 62)

En esa misma línea Díez Ripollés (2000), a propósito de las modificaciones penales como respuesta a la criminalidad y a los llamados de las víctimas, plantea que:

No hay demanda de la opinión pública que los poderes públicos estén más prestos a satisfacer que la que exige la criminalización de ciertos comportamientos. Resulta una decisión relativamente sencilla, cuya posterior puesta en práctica no exige especiales actuaciones de la Administración, recayendo la responsabilidad de su desarrollo en el Poder Judicial y en ámbitos muy limitados del poder ejecutivo —la policía y las instituciones penitenciarias—, y eso siempre que la ley se promulgue con pretensiones de ser aplicada. Un buen negocio, en suma, sin riesgos ni apenas compromisos y con unos réditos electorales indudables.

Más que a una solución factible para la disminución de la criminalidad, este catedrático asocia el fenómeno del populismo punitivo con un asunto demagógico, en el que el Derecho Penal se consolida como una estrategia para ganar votos o aumentar la popularidad de los líderes políticos e institucionales. “Los discursos de la aflictividad, predominio de la prisión como solución y el protagonismo de víctima, extendidos en la crónica criminal mediática, son asumidos por casi todas las opciones políticas”. (Peres-Neto, 2007, p. 204)

Bottoms (1995) (citado en Larrauri, 2006) afirma que el “Populismo punitivo se refiere a cuando el uso del derecho penal por los gobernantes aparece guiado por tres asunciones: que mayores penas pueden reducir el delito; que las penas ayudan a reforzar el consenso moral existente en la sociedad; y que hay unas ganancias electorales producto de este uso”. (p.15)

Además, en este fenómeno, al que Larrauri (2006) se refiere como un viraje, Garland (2001)¹⁴ identifica, entre otros, los siguientes aspectos característicos:

1. **“La reaparición de sanciones punitivas y justicia expresiva”** (Garland, 2001, p. 8):
Según el autor, existe una tendencia marcada por un discurso retributivo que “ha hecho más fácil a los políticos y legisladores expresar públicamente sentimientos punitivos y

¹⁴ Las citas de este autor expuestas en este trabajo corresponden a una traducción propia del inglés al castellano.

promulgar leyes más draconianas” (p. 9), aludiendo a la magnitud de las sanciones como el reflejo del poder represivo del Estado.

“[...] Los intentos explícitos de expresar la ira y el resentimiento públicos se han convertido en un tema recurrente de la retórica que acompaña a la legislación penal y la toma de decisiones. Los sentimientos de la víctima, o la familia de la víctima, o un público exaltado, se invocan rutinariamente en apoyo de las nuevas políticas penales”. (Garland, 2001, p. 9)

Esta tendencia implica que el discurso sobre política criminal adquiere un tono emocional, pues parte de “un público enojado, cansado de vivir con miedo, exigiendo fuertes medidas de castigo y protección” (Garland, 2001, p. 9) para reformular las leyes que sustentan el derecho penal.

2. **La política criminal se convierte en un activo para potencializar el capital político ante la opinión pública:** De acuerdo con Garland (2001), la política criminal se ha convertido en una pieza clave de las contiendas electorales y por tanto muchas decisiones frente a la materia son tomadas a partir de criterios como la publicidad y del nivel de aceptación que la medida pueda tener en la opinión pública. “Décadas antes, la opinión pública funcionaba como un freno ocasional a las iniciativas políticas: ahora opera como una fuente privilegiada”. (p. 13)
3. **“La reinención de la prisión”** (Garland, 2001, p. 14): “[...] La suposición dominante ahora es que la prisión funciona —no como un mecanismo de reforma o rehabilitación— sino como un medio de incapacitación y castigo que satisface las demandas políticas populares de seguridad pública y una dura retribución [...]” (p. 14), de manera que la prisión se consolida como la principal herramienta de garantía de justicia.

Lo anterior pone de presente, según Baucells & Peres-Neto (2008), una perspectiva conservadora del derecho penal, caracterizada por la “reivindicación del derecho de las

víctimas al castigo, la finalidad exclusivamente retributiva de las penas, la peligrosidad del delincuente y la consideración de las garantías como un lastre para la eficacia de la justicia. (p. 150)

4. **“Un permanente sentido de crisis”** (Garland, 2001, p. 19): Esta situación genera ansiedad, pesimismo generalizado y, por tanto, se plantean como alternativas las reformas a las normas penales.

En resumidas cuentas, según Garland (2001), un entorno con ingredientes propios del populismo punitivo entiende la prisión como la principal herramienta de garantía de justicia; en ese sentido, las sanciones deben reflejar el poder del Estado.

Es por ello, que el supuesto delincuente hace parte de “los otros”, con quienes no es posible tener ningún tipo de empatía, por lo cual se hace necesaria una respuesta contundente. La víctima se inserta dentro del proceso penal exigiendo sus derechos y, por tanto, plasma la necesidad de limitar los del supuesto delincuente. (Larrauri, 2006)

Según Díez Ripollés (2000), el populismo punitivo es un instrumento útil para captar la simpatía por parte de la opinión pública a partir de la respuesta —con fundamento en el endurecimiento de las penas contempladas por el Derecho Penal— a “las demandas sociales creadas, en parte, por la prensa”. (Peres-Neto, 2007, p. 14).

En él también se evidencian variables de tipo emotivo, razón por la cual podría hablarse de la búsqueda de una “justicia “afectiva” además de “efectiva””. (Larrauri, 2006, p. 21)

Entonces ¿qué papel juegan los medios de comunicación? La influencia de los medios, de manera particular en el registro de asuntos asociados al crimen, es tal, que según Lowry (2003) (citado en Botella, Joan y Peres-Neto, 2008), “la percepción social de la realidad basada en los medios de

comunicación masivos es, en algunos momentos, más poderosa de lo que la propia realidad criminal”. (p. 49)

De ello se concluye que los medios adquieren un rol fundamental, pues la forma en que asumen su función de informar no solo incide significativamente en las construcciones sobre la realidad que genera la audiencia, sino también en decisiones de tipo político - legislativo, en vinculación directa con las propuestas de reformas penales como respuesta al crimen. (Rebollo, 2008)

Según García Arán & Peres-Neto (2008) la relevancia que los medios de comunicación atribuyen a las distintas temáticas se traslada a la agenda pública y por tanto a la agenda política; es ahí donde se encuentra el papel central de los medios en los procesos políticos actuales. Sin embargo, y sin el ánimo de desconocer su función como garantes de la democracia, los citados autores señalan que cuando la información suministrada se suscribe a la trilogía víctima, castigo, retribución existe un riesgo para el debate y para las garantías constitucionales del procesado.

En razón de lo anterior es que es factible oír propuestas de reforma a la ley penal —enmarcadas dentro de lo que llamamos populismo punitivo— que responden más bien a un momento coyuntural caracterizado por permanentes registros en los medios de comunicación y no a verdaderas razones que propendan por el fortalecimiento de la acción propia del Derecho Penal.

No obstante, y pese a que en muchas oportunidades estos pronunciamientos distan de ser apropiados, y más bien pueden considerarse como “propuestas erróneas, contraproducentes o incluso directamente rechazables” (Botella & Peres-Neto, 2008, p. 48), Rebollo (2008) afirma que son políticamente rentables, pues se adhieren a las corrientes de opinión que propenden por el endurecimiento de las penas como única respuesta a la criminalidad.

García Arán & Peres-Neto (2008) señalan que la “utilización apresurada del mensaje político de las reformas penales representa un claro retroceso para la racionalidad legislativa; simboliza el vacío de la política criminal entendida como política pública, una vez que los profesionales de la

política encuentran únicamente en las modificaciones del Código Penal la mejor o exclusiva solución para solventar los problemas de orden social”. (p. 187-188).

Este fenómeno, según estos autores, desplaza el debate penal y lo sitúa en un escenario que defiende el castigo, desde una perspectiva de venganza, vulnerando de esta forma las garantías procesales, pues ubican al procesado en un escenario que se aleja de los postulados racionales.

Sobre ese particular, Díez Ripollés (2000) insiste en la importancia de que “la sociedad sea consciente de que los poderes públicos no pueden afrontar la criminalidad exclusivamente desde la perspectiva de los intereses inmediatos de las víctimas. Su objetivo no es calmar su indignación, sino asegurar que hechos semejantes no se van a repetir en el futuro. Sólo en ese sentido, y en tal medida, castiga al delincuente”.

Desde esta perspectiva, el Derecho Penal se concibe como un instrumento para mediar el conflicto penal (Rebollo, 2008) y no como un instrumento sujeto a las oleadas informativas. Debe garantizar un juicio justo para todas las partes implicadas, pues de lo contrario se daría lugar a “una alteración de los equilibrios, en detrimento del poder sancionatorio del Estado, que puede llegar a amenazar un modelo punitivo que se caracterizaría por un debilitamiento del grado de garantías”. (Rebollo, 2008, p. 83)

3. PRESENTACIÓN METODOLÓGICA

Este capítulo describe la metodología utilizada para la recolección de datos que sustentan esta investigación. Aspectos relacionados con la operacionalización de las variables de análisis, la selección de la muestra y el *corpus*, así como la delimitación temporal y el libro de códigos que guía la aplicación de la ficha de análisis de contenido serán explicados más adelante con el fin de dar al lector una mirada precisa que sustente las decisiones de carácter metodológico aquí realizadas.

3.1 Operacionalización de variables

A partir de la revisión de los trabajos elaborados a propósito de la relación entre medios de comunicación y presunción de inocencia, se extrajo la información que fue considerada como indicativa, en algún sentido, de la devaluación o violación de este derecho y se construyó la ficha que se aplicará al análisis de contenido de las piezas noticiosas de los periódicos *El Tiempo* y *El Espectador* seleccionadas para esta investigación.

En los siguientes párrafos se describen las principales categorías propuestas para el análisis:

Uso del alias para referirse al presunto inocente: “Cada vez que presentamos a alguien con un apodo estamos generando una imagen al decir “bueno, lo detuvieron y está lleno de tatuajes, además. Qué quiere decir eso, pues quién sabe, pero si tiene tatuajes ha de ser bien malo; y si tiene un apodo seguro que es de una banda”. Y hemos llegado al absurdo de decir José el Pepe Torres, con el Pepe ¿qué es eso? ése es su apodo”. (Campos, 2012, p. 21)

El uso del alias, según lo indicado por el autor, podría identificarse como un elemento que fácilmente puede asociarse con la pertenencia a una banda —lo que conlleva ciertas

implicaciones— y, por tanto, influye en la representación que el espectador recrea sobre la persona que está siendo investigada.

Baucells & Peres-Neto (2008) entienden el alias como un “mecanismo perlocutivo que refuerza la dialéctica moral a la que el autor está sujeto, además de deshumanizarlo y alejarlo de la posible empatía del telespectador”. (p. 133)

De su uso, que los citados autores señalan como reforzadores de la imagen de peligrosidad que se asocia a la persona que es investigada, se derivan consecuencias que afectan tanto lo que pensamos, sentimos e incluso lo que hacemos con respecto a la información que recibimos (Austin, 1998). Cada vez que decimos algo, “realizamos *actos perlocucionarios*; los que producimos o logramos porque decimos algo, tales como convencer, persuadir, disuadir, e incluso, digamos sorprender o confundir”. (Austin, 1998, p. 153)

Términos para referirse al presunto inocente: Como se mencionó en el apartado alusivo a la legislación colombiana, según la etapa procesal una persona puede ser calificada como indiciada, imputada, asegurada (cuando se aplique la medida de aseguramiento) acusada y condenada (cuando exista una decisión en firme que así lo sustente).

Francesc Barata (2009), como resultado de un trabajo sobre la presunción de inocencia en el diario *El País* de España, identificó las denominaciones más comunes para referirse a los procesados utilizadas por ese medio. El análisis, además, incluyó la revisión del uso de la palabra presunto que, mayormente, en el caso analizado se encontró acompañada de términos que, según el investigador, más que presumir la inocencia, presumían la culpabilidad, lo cual contradice, al menos, la definición estricta de la presunción de inocencia.

Dentro de las palabras trabajadas por Barata (2009) y que aplican para nuestro caso de estudio se encuentran: Detenido, implicado, imputado, presunto autor, presunto implicado, sospechoso.

Uso del condicional: El uso de este tiempo verbal en el registro de unos hechos que aún son materia de investigación, así como sus supuestos autores es una condición para garantizar el derecho a la presunción de inocencia. “El empleo del condicional, el hecho de no realizar aseveraciones tendenciosas o incluso el hecho de dar voz a las diversas partes implicadas, acusado y denunciante, empujará al juez a desechar una lesión de la presunción de inocencia”. (Lecucq, 2017, p. 91)

El diccionario define el condicional como un “tiempo verbal que se refiere a una acción futura medida desde el pasado y se utiliza para expresar probabilidad”. (“Condicional - significado de condicional diccionario,” n.d.).

Se trata de una alusión de carácter hipotético y así debe reflejarse en todo momento previo a una condena en firme. Y la existencia de esa probabilidad de ninguna manera es un elemento suficiente para realizar una acusación por fuera de los escenarios judiciales.

Referencias a antecedentes: “Algunos cuerpos facilitan la identidad cuando la persona tiene antecedentes policiales, práctica que no es respetuosa con los derechos del detenido y que representa un trato desigual entre las personas acusadas”. (Barata, 2007, p. 39)

Revelar los antecedentes de una persona o investigaciones de las que ha sido objeto en el pasado podría condicionar la representación que se hace sobre ella, ya que esta información reforzaría la supuesta culpabilidad en los hechos que se investigan a partir de la asociación con otros acontecimientos, incluso cuando estos no tuviesen nada que ver con el objeto de la investigación.

Baucells & Peres-Neto (2008) manifiestan que hacer referencias de este tipo, cuando se tienen, es una forma de reforzar la imagen de peligrosidad de la persona que está siendo investigada. También lo es sugerir la idea de una posible reincidencia.

Información adicional sobre el presunto inocente: Datos de carácter religioso, político, étnico, de género, sexual utilizados por el medio de comunicación y que en algún sentido alimentan

estereotipos que pueden afectar la presunción de inocencia, ya que fortalecen esas creencias o prejuicios que condicionan la interpretación de la realidad que nos cuentan los medios de comunicación. (Lippman, 1969, citado en Gomis, 1991).

Además de no ser necesarios para el relato periodístico contribuyen a la generación de un clima que vincula determinados comportamientos a ciertas preferencias o condiciones y, por ende, facilita la generación de juicios marcados por los estereotipos. De acuerdo con Bañón (2015) “[...] Los medios de comunicación son más eficaces reforzando las ideas, opiniones y estereotipos ya existentes en la sociedad que creando otros nuevos”.

Registro de datos sobre la vida personal del presunto inocente: Acorde con Martínez (2014) es factible encontrar dentro de la práctica periodística alusiones a aspectos personales e incluso íntimos de las personas que enfrentan un proceso penal, lo cual además de violar derechos como la presunción de inocencia vulnera otros como la intimidad y la imagen.

En el caso del presunto pederasta de Ciudad Lineal, varios medios han publicado información personal e imágenes. El diario El Mundo publicaba el jueves 25 de septiembre el siguiente titular: “Divorciado, con un hijo de 17 años y adicto al gym”, acompañado de una fotografía y mucha información sobre su vida privada. Estas informaciones repercuten negativamente en la vida del o de la presunta culpable y de sus familiares, que no tienen por qué verse relacionados con el delito. En muchas ocasiones dichas informaciones establecen conexiones que no son relevantes. En el caso del titular anteriormente citado, ¿se podría pensar que estar divorciado, ir mucho al gimnasio o combinar ambas cosas es un factor para cometer un delito? ¿Es una información realmente relevante? (Martínez, 2014)

Fuentes empleadas: Pensar en cómo se presentan los hechos en un texto periodístico indudablemente nos remite a preguntarnos por las fuentes informativas; es decir, por quienes suministran al periodista la información que utiliza para construir el relato. Manuel López (1995) define la fuente informativa como “una persona, un grupo de personas, una institución, una

empresa, un gobierno, una religión, una secta, un club deportivo... y quién sabe cuántas variables más, que han visto u oído algo, o que tienen documentos sobre ese algo y que están dispuestos a proporcionarlo a algún medio informativo por interés público o porque conviene a sus propias estrategias”. (p. 31-32)

La imposibilidad de contar con fuentes informativas implica una restricción a la hora de redactar una noticia, pues en la actualidad es bastante difícil, por no decir casi imposible, que el periodista sea testigo presencial de los hechos que relata, a no ser que se trate de situaciones previamente planeadas (Ruiz, 2008). Esto se refuerza con los planteamientos efectuados por Gomis (1991) a propósito de cómo se suministran los hechos:

Los hechos no se presentan solos a las manos de los atareados periodistas encargados de escogerlos para publicarlos o arrojarlos al cesto de los papeles. Ni siquiera por regla general han sido buscados afanosamente por reporteros que fuman en pipa, aunque eso suceda también a veces. [...] Como dijo Walter Lippman (1969) “La información es tan difícil de obtener que está más allá de los recursos de la prensa diaria”. Si no fuera por los interesados en que algo se publique, muchas noticias no aparecerían nunca. (p. 59)

Valdría la pena entonces enfocarnos en esos interesados; en esas fuentes que el periodista decide escuchar y cuya información es puesta de manifiesto en sus noticias. Conforme con los intereses propuestos para este trabajo, estudiaremos las fuentes en el marco del respeto por la presunción de inocencia.

Sobre ese particular Barata (2003) señala que la manera de administrar las voces que son presentadas en las piezas noticiosas, las declaraciones de los implicados y las fuentes que se citan son indicativos del tratamiento que un medio de comunicación da a la presunción de inocencia. Es por ello que prestaremos una significativa atención a las fuentes predominantes en los textos analizados a lo largo de esta investigación.

Elementos discursivos que aluden a la emoción y al sentimiento: El abuso de las voces de dolor es otro de los elementos mencionados por Francesc Barata (2003), a propósito del tratamiento periodístico de la presunción de inocencia. “Su utilización resulta preocupante porque introduce en el sentir social un discurso emotivo que choca con la razón sobre la cual se ha edificado el derecho penal moderno. Un discurso de sentimiento que muchas veces se traduce en la petición de penas más duras para los infractores, o, cuando menos, aumenta los viejos recelos ante el sistema de justicia”. (p. 51)

3.2 Diseño metodológico

Este trabajo se enmarca dentro del paradigma de investigación empírico-analítico; en consecuencia, tiene un sentido práctico enfocado en el estudio del contenido de los medios de comunicación.

La aproximación metodológica se efectúa a través de la técnica del análisis de contenido aplicado a una muestra de piezas noticiosas relacionadas con hechos de corrupción y delitos sexuales, registradas por los periódicos colombianos *El Tiempo* y *El Espectador* entre enero y abril de 2018.

Con lo anterior se pretende hacer un acercamiento exhaustivo que permita construir un panorama general frente al respeto por la presunción de inocencia en este tipo de casos.

3.3 Análisis de contenido

De acuerdo con Berelson (1971) el análisis de contenido “es una técnica de investigación para la objetiva, sistemática y cuantitativa descripción del contenido manifiesto de la comunicación” (p. 18)¹⁵. Al ser una técnica con un perfil metodológico extensivo y objetivo permitirá indagar por la

¹⁵ Esta cita corresponde a una traducción propia del inglés al castellano.

forma en que es representada la realidad estudiada por los medios de comunicación seleccionados, específicamente en términos de respeto por el derecho a la presunción de inocencia.

Se encuentra apropiado utilizar esta técnica ya que posibilita la cuantificación de patrones o frecuencias que, como resultado del trabajo, permitirán confirmar o descartar las hipótesis planteadas al inicio de la investigación, a propósito de los contenidos revisados.

De acuerdo con Soriano¹⁶ (2007) “[...] El análisis de contenido sirve sobre todo para cuantificar patrones. No se trata de un procedimiento exploratorio, sino que responde a hipótesis de investigación bien definidas. El recuento de temas, palabras, imágenes, o de otras unidades no tiene sentido si no está guiado por un cuidadoso diseño que oriente el análisis en la dirección prevista por unas hipótesis. Esto acerca de investigaciones que se planteen en términos deductivos”. (p. 151)

3.3.1 Muestra

Los periódicos *El Tiempo* y *El Espectador* son los diarios de pago de circulación nacional en Colombia con mayor número de lectores, lo cual los consolida como medios de comunicación de gran influencia en ese país.

3.3.2 Periódico *El Tiempo*

Es el diario de circulación nacional más leído en Colombia. Fue fundado el 30 de junio de 1911 por el periodista y abogado Alfonso Villegas Restrepo. (Santos, 2001)

¹⁶Las citas de este autor expuestas en este trabajo corresponden a una traducción propia del catalán al castellano.

En 1913 fue vendido a Eduardo Santos Montejo, político colombiano y tío abuelo del actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, por lo que históricamente el periódico estuvo vinculado con esta familia, una de las más reconocidas en el ámbito político colombiano. (Monitoreo de medios, 2015b)

Desde 2007 y hasta 2012, cuando fue comprado Luis Carlos Sarmiento Angulo, *El Tiempo* tuvo como principal accionista al Grupo Planeta.

Sarmiento Angulo es el hombre más rico del país e incluido dentro del grupo de millonarios del mundo (Forbes, n.d.). Tiene una importante participación en los sectores financieros —es propietario del Grupo Aval¹⁷—, hoteleros, de construcción, agroindustria y minería. (Monitoreo de medios, 2015b)

Es el medio más destacado de la Casa Editorial El Tiempo, de la que también hacen parte revistas como Don Juan, Motor, Bocas, Elenco y periódicos como Portafolio, de carácter económico, y ADN (que circula en diferentes regiones del país) y canales de televisión como CityTv y ET. (Monitoreo de medios, 2015b)

“Según el EGM, las audiencias de su lecturabilidad dominical y el número de visitantes de su edición digital suman un total de 3’515.548 lectores [...]. Así mismo, el periódico impreso continúa creciendo como el preferido de los colombianos en la categoría de mayor lecturabilidad diaria, con 969.713 lectores”. (*El Tiempo*, 2015)

¹⁷ “El Grupo Aval es el conglomerado financiero más grande de Colombia y a través de BAC Credomatic es el grupo regional más grande y más rentable en Centroamérica. Grupo Aval es el líder en Colombia en el negocio de banca tradicional a través de sus cuatro bancos (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas), líder en el negocio de banca de inversión a través de Corficolombiana y líder en el negocio de administración privada de pensiones y cesantías a través de Porvenir”(“Grupo Aval - Nuestras Compañías,” n.d.).

3.3.3 Periódico *El Espectador*

Es el periódico más antiguo de Colombia. Fue fundado por Fidel Cano Gutiérrez en Medellín (Antioquia) en 1887. Desde 1997 la mayoría de sus acciones, que eran de propiedad de la familia Cano, pertenecen al Grupo Empresarial Santo Domingo, un grupo económico de gran relevancia en el país.¹⁸. (Monitoreo de medios, 2015a)

Además del periódico *El Espectador*, este grupo es propietario de medios de comunicación como *Caracol Televisión* y *Blu Radio* y tiene participación en sectores como el turismo, entretenimiento, logística, transporte, entre otros. (“Grupo Santo Domingo – Valorem – De quién son los medios,” n.d.)

El Espectador se define a sí mismo como un medio que “se caracteriza por un periodismo investigativo e independiente, y por su oferta de columnas editoriales y de opinión” (*El Espectador*, 2018). Es el segundo diario generalista y de pago más leído en Colombia, después del periódico *El Tiempo*. Cuenta con 45.000 suscripciones (*Noticias Caracol*, 2017) y de acuerdo con el Estudio General de Medios, tiene aproximadamente 1.843.604 lectores. (*El Tiempo*, 2015)

Igualmente, es el segundo diario de referencia de los líderes de opinión del país. (Cifras y Conceptos, 2017)

3.4 Delimitación temporal

Las piezas noticiosas objeto de análisis se ubican temporalmente entre enero y abril de 2018. Se considera que la selección de ese periodo, actual y de fácil acceso, permite obtener una visión

¹⁸El grupo empresarial Santo Domingo fue fundado por Julio Mario Santo Domingo, quien fue considerado como uno de los hombres más adinerados del país. En 2011 ocupó el puesto 108 dentro de la categorización realizada por la revista Forbes que lo ubicó en el segundo lugar a nivel nacional. (“Julio Mario Santo Domingo,” n.d.)

amplia del respeto por la presunción de inocencia en estos medios de comunicación y según la tipología estudiada.

Adicionalmente, durante este periodo se destaca la importante visibilidad mediática de grandes hechos de corrupción en Colombia como las irregularidades en los sectores judicial y político del país y, por tanto, combatirla se ha convertido en uno de los elementos centrales de la campaña por la presidencia del país. (*El Tiempo*, 2018)

3.5 Criterios para la búsqueda de noticias

La búsqueda de las piezas analizadas se realizó a partir de los resultados obtenidos de la base datos *Factiva*. Para ello, se definieron con antelación palabras clave asociadas a la tipología establecida para esta investigación.

Con el fin de procurar una mayor precisión y al tratarse de contenidos específicamente de carácter penal, la selección de las etiquetas se fundamentó en los delitos vinculados con la corrupción y catalogados en el Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000, título XV, como delitos contra la Administración Pública. Particularmente se seleccionaron los establecidos en los capítulos I, II, III, IV, V, VI y VII: Peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos: Interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato. (Congreso de la República de Colombia, 2000)

Para el caso de los delitos sexuales, se tomaron los punibles señalados en el Título IV —Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales—, capítulos I y II, en los cuales se establecen: **De la violación:** acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir; **De los actos sexuales abusivos:** acceso carnal abusivo con menor de catorce años, actos sexuales con menor de catorce años, acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir y acoso sexual. (Congreso de la República de Colombia, 2000)

Otro de los aspectos importantes durante la selección es que, en todos los casos, las noticias debían tratar de investigaciones o procesos penales, en congruencia con el objetivo de este trabajo vinculado principalmente con el respeto por el derecho a la presunción de inocencia por parte de los periódicos *El Tiempo* y *El Espectador* de Colombia. A continuación, se presenta la matriz diseñada para la búsqueda:

Tabla I - Matriz de búsqueda de noticias

Tipología	Palabras clave de búsqueda
Casos de corrupción	Peculado
	Prevaricato
	Concusión
	Cohecho
	Celebración indebida de contratos
	Interés indebido en la celebración de contratos
	Contrato sin cumplimiento de requisitos legales
	Tráfico de influencias
	Enriquecimiento ilícito
	Corrupción
Delitos sexuales	Acceso carnal violento
	Acto sexual violento
	Acto sexual abusivo
	Acoso sexual
	Violación
	Abuso sexual
	Delitos sexuales

Fuente: Elaboración propia.

Tras esta búsqueda se aplicó a cada noticia seleccionada la ficha de análisis (ver anexo 1) construida a partir de las principales conclusiones de trabajos realizados a propósito de la relación entre medios de comunicación y presunción de inocencia y de los cuales se extrajeron las categorías que sustentan la ficha de análisis construida.

3.6 Libro de códigos

El libro de códigos (ver anexo 2) describe cada una de las categorías que conforman la ficha de análisis aplicada a las piezas noticiosas seleccionadas. Es una guía que contiene los elementos o códigos, es decir, “todo el repertorio de formas con las cuales se puede manifestar una categoría analítica”. (Soriano, 2007, p. 157)

Este documento puede entenderse como un manual al cual recurrir en un primer sentido para entender cómo están estructuradas las categorías de análisis y en un segundo momento, en caso de tener dudas sobre cómo completar la ficha a partir de la identificación en el texto de los aspectos concretos que la componen. (Soriano, 2007)

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Este capítulo presenta los hallazgos más significativos identificados tras la aplicación de la ficha de análisis.

Se estudiaron 64 piezas noticiosas, seleccionadas de un total de 594 registros obtenidos como resultado de la búsqueda efectuada a través de la base de datos *Factiva*, en el apartado “*Publications*”.

Se aplicó la matriz de búsqueda de noticias (Ver Tabla I) a cada uno de los medios de comunicación objeto de estudio, producto de lo cual se obtuvieron 238 registros para el periódico *El Tiempo* y 356 para *El Espectador*.

Luego de un proceso de depuración, que en primera instancia descartó las noticias duplicadas (similares – exactas de acuerdo con los parámetros de *Factiva*), se procedió a la revisión de los textos. Para ello, se tuvo en cuenta como criterios de selección que se tratara de noticias, por lo que se omitieron los editoriales y columnas de opinión y, además, que estas abordaran hechos relacionados con procesos penales en el marco de la tipología noticiosa establecida: casos de corrupción y delitos sexuales. Como resultado de este proceso se encontraron 27 piezas divulgadas por el periódico *El Tiempo* y 37 por *El Espectador*. El resto de información generalmente se refirió a asuntos propios de las compañías políticas¹⁹, investigaciones de carácter disciplinario, entre otros.

Del gran total escogido, 53 corresponden a casos de corrupción y 11 a delitos sexuales. Podríamos explicar la primacía del primero sobre el segundo a partir de que durante el primer semestre de 2018 se llevaron a cabo las elecciones de tipo legislativo y presidencial en el país, lo cual afectó la

¹⁹ Durante el primer semestre de 2018 se llevaron a cabo en Colombia las elecciones para el Congreso y Presidencia de la República. Ello explicaría que los diarios destinaran una parte significativa de sus contenidos a abordar los elementos relacionados de estas contiendas electorales.

agenda mediática. La lucha contra la corrupción, además de ser una preocupación generalizada, según lo demuestran las cifras que hemos citado con antelación, se consolidó como uno de los principales aspectos de los discursos políticos e instituciones de ese país; de ahí que alusiones sobre ese particular se evidencien de forma constante en los medios analizados.

La siguiente tabla resume la selección noticiosa elaborada de acuerdo con los medios de comunicación y el tipo de caso estudiado:

Tabla II - Noticias según medio de comunicación y tipología

Medio de comunicación	Hechos de corrupción	Delitos sexuales
El Tiempo	25	2
El Espectador	28	9
Total	53	11

Fuente: Elaboración propia. Periodo de análisis: 1 de enero a 30 de abril de 2018.

De lo anterior tenemos entonces que el 82.8% de las noticias estudiadas corresponde a hechos de corrupción y el 17.2% restante a delitos sexuales.

En los siguientes apartados se da cuenta de los resultados obtenidos frente a las variables de identificación y de representación tanto del presunto inocente como de la conducta punible abordada.

4.1 Información de identificación

En esta sección se plantean los datos de lo que podríamos llamar aspectos generales/ formales de la presentación de las piezas noticiosas analizadas. Elementos asociados a la fecha de su divulgación, autoría y sección serán parte de esta información que, si bien no apunta directamente

a los objetivos e hipótesis de investigación, sí permiten contextualizar los resultados de los que trataremos más adelante.

Tabla III - Distribución mensual de las noticias

Medio de comunicación	Enero	Febrero	Marzo	Abril
El Tiempo	9	5	8	4
El Espectador	1	19	10	7
Total	10 (15.6%)	24 (37.5%)	18 (28.1%)	12 (18.8%)

Fuente: Elaboración propia. Periodo de análisis: 1 de enero a 30 de abril de 2018.

En términos generales, febrero es el mes en el que se registra el mayor número de las noticias examinadas; sin embargo, valdría la pena mencionar que en enero se evidencia un número significativo por parte del periódico *El Tiempo* en comparación con *El Espectador*. Es el único mes en el que el primero supera la muestra del segundo.

Sección

El 60.9% de las noticias examinadas se ubica dentro de la opción nacional (Ver tabla IV). Esto indica que los hechos abordados tuvieron un grado de importancia alto debido a que se trató de casos de corrupción generalmente en las esferas políticas, económicas y judiciales del país (Ver tabla V). Ejemplo de ello son las investigaciones por el caso *Odebrecht*, corrupción en el sector judicial (sobornos, solicitudes de dinero para favorecer procesos penales), contrataciones irregulares, fraudes electorales, entre otros, que se tradujeron en asuntos catalogados como de interés nacional tanto por la calidad que ostentaban los implicados, como por el escenario en el que muchos de ellos se presentaron: instituciones públicas.

Titulares del tipo “Ordenan libertad de José Elías Melo por caso Odebrecht” (*El Tiempo*, 2018); “Fiscalía imputará cargos a Prieto por coima de \$ 650 millones” (*El Tiempo*, 2018); y la “Fiscalía

acusó a Hilda Niño Farfán, la exfiscal que habría ayudado a exparamilitares” (*El Espectador*, 2018) son algunas de las cabeceras utilizadas por los diarios y que se enmarcan dentro de las investigaciones que trascendieron al ámbito nacional.

Tabla IV - Clasificación de las piezas noticiosas según la sección

Medio de comunicación	Local	Nacional
El Tiempo	9	18
El Espectador	16	21
Total	25 (39.1%)	39 (60.9%)

Fuente: Elaboración propia. Periodo de análisis: 1 de enero a 30 de abril de 2018.

La sección local, dentro de la que se agrupa el 39.1% de las noticias, estuvo dedicada principalmente a casos cuya relevancia se suscribe a un municipio o zona en particular. Hechos de corrupción en alcaldías e investigaciones por delitos sexuales se agrupan en esta opción. Como ejemplo, podríamos considerar: “El expediente del saqueo al Hospital de Buenaventura” (*El Tiempo*, 2018), referido a hechos de corrupción en esa localidad del Valle del Cauca colombiano; “Denunciado por posible abuso sexual en La Calera, en libertad” (*El Espectador*, 2018) —a propósito de los delitos sexuales— e “Investigan red de corrupción en Floridablanca” (*El Tiempo*, 2018), en el que se mencionan supuestas irregularidades en la imposición de multas de tránsito.

La siguiente tabla muestra la distribución de las noticias clasificadas tras el análisis en la categoría nacional. Todas ellas pertenecen al tipo noticioso de hechos de corrupción.

Tabla V - Tipología noticiosa en la sección Nacional

Medio de comunicación	Corrupción	Delitos sexuales
El Tiempo	18	-
El Espectador	21	-
Total	39 (100%)	-

Fuente: Elaboración propia. Periodo de análisis: 1 de enero a 30 de abril de 2018.

Autor

El 53.1% de las noticias examinadas no registra la autoría según la caracterización efectuada para este aspecto en el libro de códigos.

El periódico *El Tiempo* indica en todo caso el nombre o iniciales del autor de la noticia (Ver tabla VI), lo que, en el caso de *El Espectador* no es evidente en el 100% de las piezas analizadas. Este diario, en su gran mayoría, utiliza expresiones tales como: *Redacción judicial*, *redacción política*, *redacción nacional*.

Solo en tres casos de los 37 estudiados sobre este diario, es decir en el 8.1%, es visible el nombre de quien redactó la noticia.

Tabla VI - Autoría de las noticias

Medio de comunicación	Periodista	Sin autor
El Tiempo	27	-
El Espectador	3	34
Total	30 (46.9%)	34 (53.1%)

Fuente: Elaboración propia. Periodo de análisis: 1 de enero a 30 de abril de 2018.

4.2 Representación del presunto inocente

Tipología del personaje

De acuerdo con los resultados derivados de la aplicación de la ficha de análisis, se tiene que el 51,6% de los personajes implicados en los casos analizados corresponde al código “Figura con reconocimiento público (político, judicial, económico)”;

es decir, que se trata de personas con cierta relevancia en el ámbito nacional, local o en el sector económico-social en el que se desenvuelven. Es el caso de exsenadores de la República, (ex)congresistas, exmagistrados, alcaldes, exalcaldes, exgobernadores y exdirectores de entidades de carácter público, por ejemplo, que son registrados como protagonistas en más de la mitad de las piezas noticiosas examinadas. Todos estos casos se enmarcan dentro de la tipología hechos de corrupción.

El 48.4% restante corresponde a “Figuras sin reconocimiento público”: personas cuya actividad previa a estar supuestamente implicadas en los procesos penales no representaba un reconocimiento de las dimensiones de una figura pública. (Ver tabla VII)

El 100% de los casos analizados, a propósito de los delitos sexuales, son protagonizados por personas agrupadas bajo esta calidad.

Tabla VII - Tipología del personaje por medio

Medio de comunicación	Figura con reconocimiento público (político, judicial, económico)	Figura sin reconocimiento público
El Tiempo	17	10
El Espectador	16	21
Total	33 (51.6%)	31 (48.4%)

Fuente: Elaboración propia. Periodo de análisis: 1 de enero a 30 de abril de 2018.

Como se muestra, el periódico *El Tiempo* registra mayor número de noticias con relación a las figuras con reconocimiento público. De las 27 piezas noticiosas analizadas, 17, es decir, el 63%, corresponde a esta categorización. Para el caso de *El Espectador*, el 43.2% equivale a personajes de este tipo.

Uso de alias para referirse al presunto inocente

En el 93.8% de los casos estudiados, el uso del alias no es utilizado para referirse a los presuntos inocentes (Ver tabla VIII). Por el contrario, los diarios prefieren aludir a ellos a partir de los cargos ostentados —cuando estos cuentan con cierto reconocimiento— de modo que la atención se centra en el rol que los personajes de la noticia ocupan. Esto adquiere trascendencia especialmente en los hechos de corrupción, en los que el hecho delictivo como tal podría verse agravado en la medida en que involucra personajes de carácter público.

Tabla VIII - Uso del alias por medio

Medio de comunicación	Sí	No
El Tiempo	2	25
El Espectador	2	35
Total	4 (6.3%)	60 (93.8%)

Fuente: Elaboración propia. Periodo de análisis: 1 de enero a 30 de abril de 2018

Términos para referirse al presunto inocente

Como se señaló en la categoría anterior, los medios de comunicación estudiados emplean distintas maneras para referirse a los presuntos inocentes. Si bien el alias no es una constante para nombrarlos —por lo menos en los casos analizados— es posible identificar otras maneras.

La tabla IX muestra el número de casos en que cada medio empleó los términos asignados a esta categoría.

Tabla IX - Referencias al presunto inocente por medio

Términos	El Tiempo	El Espectador	Total
Detenido/ capturado/aprehendido	12	16	28
Indiciado	1	0	1
Imputado	0	0	0
Asegurado	0	0	0
Acusado	1	4	5
Presunto autor/ responsable	0	3	3
Presunto agresor/ abusador/ violador	0	1	1
Agresor	0	1	1
Violador	1	0	1
Responsable	1	0	1
Investigado/ procesado	8	10	18
Supuesto / implicado	1	4	5
Sospechoso	0	0	0
Señalado	4	5	9

Fuente: Elaboración propia. Periodo de análisis: 1 de enero a 30 de abril de 2018.

Las palabras “Detenido/capturado/aprehendido” son las aplicadas de forma más reiterada por los medios de comunicación objeto de estudio. En total, se encontraron 28 registros, de los cuales 12 corresponden a *El Tiempo* y 16 a *El Espectador*. En segundo lugar se ubican los conceptos de “investigado/procesado” que, según la etapa procesal, fueron empleados correctamente casi en la totalidad de los casos. Tan solo en dos piezas noticiosas fueron utilizados por el periódico *El Espectador* durante la etapa de indagación, cuando según la norma, la persona aún no está

vinculada formalmente a un proceso penal —lo cual sucede tras la formulación de imputación— y, por tanto, no podría denominarse como tal. En términos legales, la palabra adecuada para ese momento sería indiciado.

En tercera posición se encuentra el término señalado, empleado en 9 casos: 4 por el diario *El Tiempo* y 5 por *El Espectador*. Como se mencionó previamente, se entiende este concepto desde la definición dada por el Diccionario de la Lengua Española, a propósito de señalar: “Poner o estampar señal en una cosa para darla a conocer o distinguirla de otra [...]. Llamar la atención hacia alguien o algo, designándolo con la mano o de otro modo” (“DLE: señalar - Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario,” n.d.).

Su uso podría vincularse con un tono que de cierta manera estigmatiza pues “pone una marca” sobre alguien que en todo momento es presunto inocente y, en ese sentido, no puede ser designado de modo que se sugiera su culpabilidad.

La cuarta posición es compartida por dos conceptos: acusado y supuesto/implicado. Sobre el primero valdría la pena recordar que solo puede ser usado en la última etapa del proceso penal; es decir, durante el juicio.

En tres de los cinco casos, el término fue utilizado de manera incorrecta. Dos por parte del periódico *El Espectador* y una por *El Tiempo*, pues se refieren con ese término a personas cuyo proceso penal aún se encuentra en etapa de investigación.

En cuanto a los términos supuesto/implicado, cuyo uso es correcto a lo largo de todo el proceso penal según lo manifestado por Barata (2009), estos fueron solamente utilizados en cinco casos; cuatro por parte del diario *El Espectador* y una por *El Tiempo*.

El uso de presunto autor/responsable se evidenció en tres casos y solo por parte del periódico *El Espectador*; como ya se ha manifestado, la aplicación de este concepto va en contra del derecho a

la presunción de inocencia, pues presume la culpabilidad y no la inocencia de la persona que se encuentra implicada en el proceso penal.

Con una sola mención se ubican los términos: indiciado, utilizado correctamente, es decir, en etapa de indagación por parte del periódico *El Tiempo*; presunto agresor/ abusador/ violador, empleado por el periódico *El Espectador*, y que, como en el caso anterior, presume la culpabilidad; agresor, usado de forma indebida por parte de ese mismo diario, ya que afirma la culpa del implicado sin lugar a duda; y por último, violador y responsable, empleados por el diario *El Tiempo* y que adjudican la culpabilidad de manera directa.

Imputado y asegurado, palabras correctas según la legislación colombiana para referirse a una persona implicada en un proceso penal, en fases específicas, no fueron utilizadas en las piezas analizadas. Igual sucedió con el término sospechoso.

A propósito de los hallazgos frente a la manera de referirse a los presuntos inocentes por parte de los periódicos objeto de estudio, podríamos decir que:

- La forma más común de aludir a los presuntos inocentes está dada por el cargo que los implicados ocupaban. Exgerente, exsenador, directivo, funcionaria, oficial en retiro, exsenador, senador, exfiscal, exmagistrado, suspendido gobernador, excongresista, coronel de la policía (r), ejecutivo, senadora, educador, alcalde, exalcaldesa, exmandatario son algunos de los ejemplos de las denominaciones aplicadas.
- Existen modos distintos a los planteados en las opciones de selección para referirse a los presuntos inocentes. Se tiene:
 - ✓ Preso: Equivalente a detenido, capturado o aprehendido.
 - ✓ Autor: Equivalente a responsable. Afirma culpabilidad.

- ✓ Vinculado: Equivalente a investigado/procesado.
 - ✓ Enredado: De enredar:

“Meter a alguien en obligación, ocasión o negocios comprometidos o peligrosos”.
 (“DLE: enredar - Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario,” n.d.)
 - ✓ Denunciado: Persona cuya supuesta participación en algún delito ha sido puesta en conocimiento de las autoridades. Su utilización se considera apropiada ya que refleja un hecho concreto que no sugiere responsabilidad.
 - ✓ Asesino: Equivalente a responsable. Afirma culpabilidad.
 - ✓ Presunto testafarro: Supone la culpabilidad y no la inocencia.
 - ✓ Testafarro: Equivalente a responsable. Afirma culpabilidad.
 - ✓ Presunto delincuente: Supone la culpabilidad y no la inocencia.
 - ✓ Condenado: Que ha sido sujeto de la acción penal, producto de la cual se le ha encontrado culpable.
 - ✓ Posible involucrado: Equivalente a supuesto.
 - ✓ Delincuente: Equivalente a responsable. Afirma culpabilidad.
 - ✓ Sindicado: Denominación utilizada para referirse a una persona que es indiciada en desarrollo de un proceso penal. Corresponde a la terminología propia del sistema penal previo a la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), por lo cual su aplicación en procesos posteriores al 2005 es inadecuada.
 - ✓ Cabecilla: Designa una posición al interior de una banda delincuencial.
 - ✓ Clan: “Grupo, predominantemente familiar, unido por fuertes vínculos” (“DLE: clan - Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario,” n.d.). Utilizado en ese sentido en el texto.
- El uso de la palabra presunto en lugar de asociarse de manera generalizada al supuesto implicado, se vincula comúnmente a las acciones; de ahí que sea factible encontrar

expresiones del tipo: presuntos hechos de corrupción; presunto abuso sexual; presunto incremento injustificado.

Uso del condicional

El uso de este tiempo verbal marca una diferencia definitiva entre afirmar o no la culpabilidad de una persona. En el caso de los periódicos analizados se observa que en el 57.8% de las noticias a las cuales se les aplicó la ficha existen omisiones en cuanto su uso (ver tabla X). De las 27 piezas estudiadas a propósito del diario *El Tiempo*, 17 evidencian este fenómeno, lo cual representa un 63% de ese total. Para el caso del periódico *El Espectador*, la cifra equivale a un 54.1% (20 piezas) sobre un total de 37 noticias.

Esta situación se hace evidente de manera especial a través de los pronunciamientos citados por los medios de comunicación, lo que si bien podría ser justificado a partir de que fue una persona ajena al medio quien lo afirmó, también es cierto según lo asegurado por Barata (2009) que “serán los periodistas y las periodistas, quienes con su esfuerzo de entendimiento y de explicación, los que toman unas palabras y dejan otras en ese viejo oficio de narrar y proponer significados para entender la realidad, escuchando a las fuentes más o menos próximas y a los testimonios más o menos certeros” (p. 222-223). Las palabras que se seleccionan, así como la forma en la que se presentan también son indicativos del respeto por el derecho a la presunción de inocencia.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional de Colombia (1995) que, a propósito del trabajo del periodista, declaró “si ha recurrido a terceros en calidad de fuentes y hace públicos los datos que ellos suministran, sin ocuparse en su verificación, asume los riesgos inherentes al crédito que les ha concedido”. (Sentencia No. T-074/95)

Estos son algunos ejemplos identificados durante la aplicación de la ficha de análisis:

- "De acuerdo con la Fiscalía, Alcibiades Vargas Bautista, hoy detenido; Joel Darío Trejos Londoño, en prisión domiciliaria, y Fausto Rubén Díaz, en libertad, pero todavía vinculado a la investigación, terminaron beneficiando a delincuentes [...]". (*El Tiempo*, 2018)

En ese caso, el diario se refiere a una información relacionada con la investigación adelantada por la Fiscalía y da por hecho que los implicados beneficiaron a delincuentes, pese a que en ese momento el proceso penal no había entrado en etapa de juicio y, por tanto, era imposible contar con un pronunciamiento por parte del juez frente a la supuesta responsabilidad de las personas investigadas.

A pesar de que se ponga de manifiesto que esta información obedece a lo dicho por el ente acusador, es imprescindible el uso del tiempo condicional en concordancia con la premisa de que la autoría de los hechos imputados aún son materia de investigación y, en ese orden de ideas, nada puede ser afirmado. Todo planteamiento debe ubicarse en un plano hipotético, de modo que se garantice la presunción de inocencia.

- “A la cárcel exfuncionaria de Colpensiones por adulterar historias laborales” (*El Espectador*, 2018)

Este titular no pone en duda la culpabilidad de la persona que es investigada y omite el uso del tiempo condicional. Una modificación del tipo: “A la cárcel exfuncionaria de Colpensiones que habría adulterado historias laborales” registra la misma información utilizada por el medio de comunicación, pero incluye el uso del condicional con lo cual se evita caer en atribuciones de culpabilidad prematuras.

Tabla X - Tiempo condicional según medio de comunicación

Medio de comunicación	Siempre	Excepcionalmente
El Tiempo	10	17
El Espectador	17	20
Total	27 (42.2%)	37 (57.8%)

Fuente: Elaboración propia. Periodo de análisis: 1 de enero a 30 de abril de 2018.

Referencias a antecedentes del presunto inocente

En el 84.4% de los casos estudiados no se registran menciones sobre antecedentes de los presuntos inocentes (Ver tabla XI), lo cual indica que esta no es una práctica habitual por parte de los medios de comunicación estudiados. El periódico *El Espectador* hizo alusiones de este tipo en un 13.5%, mientras que *El Tiempo* en un 18.5%.

Tabla XI - Alusiones a antecedentes del presunto inocente

Medio de comunicación	Sí	No
El Tiempo	5	22
El Espectador	5	32
Total	10 (15.6%)	54 (84.4%)

Fuente: Elaboración propia. Periodo de análisis: 1 de enero a 30 de abril de 2018.

Referencias de esta clase pueden ejemplificarse con la siguiente afirmación efectuada por el periódico *El Tiempo*: “[...] Su nombre ya había aparecido en una operación de la Dirección de Extinción de Dominio del ente acusador en la que ocuparon seis predios en el departamento de Córdoba [...]”. (*El Tiempo*, 2018)

Como ya se anunció en el apartado relacionado con la operacionalización de variables, los datos relacionados con el pasado de la persona investigada pueden reforzar y apoyar su supuesta

responsabilidad en los hechos por los que es procesada en la actualidad, a partir de un principio de asociación del que podría surgir el interrogante ¿si hizo aquello antes, por qué no va a ser responsable de esto ahora?

Al margen de los resultados de la investigación penal y de los argumentos de la parte acusadora para sustentar sus acusaciones, la condición supuesta e hipotética de la responsabilidad debe mantenerse desde el inicio del proceso penal hasta un pronunciamiento definitivo por parte del juez.

Y esta condición no puede ligarse exclusivamente al uso correcto del presunto, es decir, presumiendo la inocencia, y no la culpabilidad, o al uso en todo momento del tiempo condicional, sino también a la mención u omisión de elementos que podrían contribuir a la construcción de la culpa.

Información adicional sobre el presunto inocente

Suministrar datos de tipo religioso, político, étnico, de género y sexual no es una práctica frecuente por parte de los diarios objeto de análisis (Ver tabla XII). Los resultados obtenidos muestran la presencia de este indicador en 6 casos, lo que representa un 9.4% del total de noticias estudiadas.

El mayor número de menciones efectuadas corresponde a información de tipo político, lo cual podría ser explicado a partir de la clase de delitos estudiados, particularmente los vinculados con hechos de corrupción.

Como ejemplo de esta alusión tenemos: “Los próximos 17 y 18 de mayo empezarán las audiencias preparatorias del juicio contra Ricaurte, que al momento de estallar el escándalo, a mediados del año pasado, era precandidato presidencial del partido Conservador y paralelamente estaba aspirando a lograr un asiento como magistrado de la Justicia Especial para la Paz (JEP)”. (*El Tiempo*, 2018)

Sobre los dos casos restantes, con relación a datos de tipo religioso, uno estuvo ligado a un caso de violencia sexual, y el otro a un hecho de corrupción.

Tabla XII - Tipo de información adicional según medio de comunicación

Tipo de información	El Tiempo	El Espectador	Total
Religiosa	1	1	2 (3.1%)
Política	2	2	4 (6.3%)
Étnica	0	0	0
De género	0	0	0
Sexual	0	0	0
No registra	24	34	58 (90.6%)

Fuente: Elaboración propia. Periodo de análisis: 1 de enero a 30 de abril de 2018.

Registro de datos sobre la vida personal del presunto inocente

La tabla XIII muestra que en un 23.4% de las piezas noticiosas estudiadas se registra algún tipo de información relacionada con la vida personal del presunto inocente. Vínculos familiares, datos propios de su domicilio y pasatiempos son algunos de los aspectos referidos por los periodistas a lo largo de los relatos divulgados.

El periódico *El Tiempo* es el que más recurrió a esta práctica con un 33.3%, mientras que el diario *El Espectador* lo hizo en un 16.2%.

Como ejemplos de la manifestación de esta categoría tenemos:

- “Este viernes, agentes del CTI lo sacaron de una millonaria mansión en uno de los más exclusivos condominios de la sabana de Bogotá, en La Calera. La captura sorprendió al ejecutivo, que, pese a sus líos con la justicia, se movía entre Miami y Bogotá y ha sido

señalado de seguir jugando en el sector a través de varias fichas de confianza en Saludcoop”. (*El Tiempo*, 2018)

El autor de la noticia entrega información sobre el domicilio de la persona capturada y lo caracteriza con los adjetivos de exclusivo y millonario lo que podría incidir en el respeto por el derecho a la presunción de inocencia, pues permite asociar el delito de peculado de apropiación, por el que es investigado, con la supuesta vida de lujos que lleva.

Igual sucede con la afirmación “[...] Pese a los líos con la justicia, se movía entre Miami y Bogotá” (*El Tiempo*, 2018). En ese momento, no se evidenciaba ningún tipo de restricción en contra del presunto inocente por lo que viajar, como para cualquier persona, era una actividad libre que no debería ser objeto de cuestionamiento y menos, acompañarse de la palabra pese.

Este tipo de afirmaciones si bien no atribuyen la responsabilidad de manera directa al implicado, sí contribuyen a la generación de un clima de culpabilidad, en el que el lugar de residencia, y las actividades desarrolladas (viajes) se constituyen como elementos que refuerzan un juicio anticipado.

- “A Rodríguez Gómez, de 26 años, lo investigan luego de ser denunciado por una joven de 18, quien dijo haber sido accedida carnalmente y de forma violenta por el procesado, en la madrugada del 31 de diciembre de 2017, en el municipio de La Calera”. (*El Espectador*, 2018)

La alusión a la edad de la persona que es procesada, así como de la víctima no sería relevante en este caso; solo lo es cuando las afectaciones son sufridas por alguien que es menor de edad o con condiciones especiales. En cierta forma, esta idea podría significar

una devaluación de la presunción de inocencia, especialmente si se parte de los estereotipos ligados al hombre como fuerte.

Tabla XIII - Menciones sobre la vida personal del presunto inocente según el medio de comunicación

Medio de comunicación	Sí	No
El Tiempo	9	18
El Espectador	6	31
Total	15 (23.4%)	49 (76.6%)

Fuente: Elaboración propia. Periodo de análisis: 1 de enero a 30 de abril de 2018.

Número de fuentes empleadas

El uso de una fuente de información en la construcción de relato periodístico es la opción más recurrente dentro de los casos analizados (Ver tabla XIV). Esto se refleja con un porcentaje del 34.4%; es decir, 22 noticias del total examinado.

De las 27 piezas revisadas sobre el periódico *El Tiempo*, 9 se suscriben a esta opción, lo que corresponde a un 33.3% de ese total; mientras que *El Espectador*, frente al cual se exploraron 37, un 35.1% (13 piezas) puede catalogarse bajo este código.

El porcentaje restante del total global de noticias analizadas (65.6%) se distribuye así: 29.7% (19 noticias), más de dos fuentes; 26.6% (17 noticias), 2 fuentes, y 9.4% (6) cero fuentes.

Tabla XIV - Cantidad de fuentes empleadas por medio

Número de fuentes	El Tiempo	El Espectador	Total
0	4	2	6 (9.4%)
1	9	13	22 (34.4%)
2	7	10	17 (26.6%)
Más de 2	7	12	19 (29.7%)

Fuente: Elaboración propia. Periodo de análisis: 1 de enero a 30 de abril de 2018.

Fuentes utilizadas

De acuerdo con los resultados obtenidos, en el registro noticioso de los casos de corrupción y de delitos sexuales efectuado por los diarios *El Tiempo* y *El Espectador* entre enero y abril de 2018 predominan las fuentes institucionales (Ver tabla XV). Esto se expresa en que estas fueron empleadas 51 veces: 21 por parte del periódico *El Tiempo* y 30 por parte de *El Espectador*.

En segundo lugar se encuentran las voces de los presuntos inocentes/defensa, citados 19 veces: 8 por *El Tiempo* y 11 por *El Espectador*. Después se ubican los testigos: 12 veces; otras fuentes: 9 veces, y víctimas: 3 veces. Esta última opción solo se hace evidente en las noticias producidas por el periódico *El Espectador*.

Tabla XV - Tipo de fuente según medio de comunicación

Tipo de fuentes	El Tiempo	El Espectador	Total
Institucional	21	30	51
Víctimas	0	3	3
Procesado/ defensa	8	11	19
Testigo	7	5	12
Otras	2	7	9

Fuente: Elaboración propia. Periodo de análisis: 1 de enero a 30 de abril de 2018

4.3 Representación del delito

Tipología noticiosa

Como se ha mencionado, el 82.8% del total de las noticias analizadas a lo largo de este trabajo corresponde a casos de corrupción. El 17.2% restante aborda los asuntos relacionados con delitos sexuales.

Tabla XVI - Tipología noticiosa según medio de comunicación

Medio de comunicación	Casos de corrupción	Delitos sexuales
El Tiempo	25	2
El Espectador	28	9
Total	53 (82.8%)	11 (17.2%)

Fuente: Elaboración propia. Periodo de análisis: 1 de enero a 30 de abril de 2018.

Etapas procesal

El 62.5% de las noticias revisadas se suscribe a la segunda etapa del proceso penal colombiano; se trata de la fase de investigación. Le sigue la etapa de indagación con un 28.1% y finalmente el juicio con un 9.4%.

Tabla XVII - Clasificación de noticias según etapa procesal

Medio de comunicación	Indagación	Investigación	Juicio
El Tiempo	6	18	3
El Espectador	12	22	3
Total	18 (28.1%)	40 (62.5%)	6 (9.4%)

Fuente: Elaboración propia. Periodo de análisis: 1 de enero a 30 de abril de 2018

Adjetivos en el texto

En 24 casos los adjetivos adoptados en las piezas noticiosas consideradas hacen referencia a la acción. Alusiones a la cuantía y a la magnitud de la defraudación en los casos de corrupción son algunos de los ejemplos más comunes registrados por esos medios. Dentro de las menciones realizadas podríamos citar: “Mayor caso de corrupción registrado en la historia del país”, “coimas millonarias”, “jugoso negocio”, “polémico negocio”, “contratación antieconómica”, “uno de los mayores escándalos”, “elevado monto de dineros”, “actos crueles”, “aberrantes hechos” entre otros.

A propósito de este código, el periódico *El Espectador* difundió la noticia “Padres son acusados de abusar sexualmente de sus propios hijos en Buga” de la cual se extrajo el siguiente fragmento:

“[...] Según informó la Fiscalía, los aberrantes hechos habrían ocurrido en el 2016 cuando el padre, al parecer, abusó sexualmente de sus dos hijos con el consentimiento de la madre. Y, no suficiente con eso, la mujer se bañaba con su pareja y cometía actos sexuales en frente de los pequeños”. (*El Espectador*, 2018)

En una primera instancia el texto, enmarcado dentro de la tipología denominada delitos sexuales, califica como aberrantes los hechos materia de investigación y adiciona la expresión “no suficiente con eso” que da cuenta de que existen otros elementos que hacen de la supuesta conducta un asunto aún más grave.

El mismo diario, en una pieza noticiosa de 13 de febrero de 2018, informó:

“Eran más de las 10:00 p.m. de ese día cuando presuntamente los llevaron a un lugar oscuro, les dieron patadas y los golpearon con palos en todo el cuerpo. A la mujer, que usaba un corte de pelo estilo afro, la trasquilaron y la siguieron agrediendo. En medio de los tratos crueles, les habrían echado agua y luego presuntamente les dieron choques eléctricos”. (*El Espectador*, 2018)

El texto vincula los hechos investigados con tratos crueles, a lo que se agrega que la mujer que habría sido víctima “usaba un corte de pelo estilo afro”.

En cuanto a los adjetivos asociados al presunto inocente, de acuerdo con el libro de códigos elaborado, se evidencian en 12 oportunidades. 8 por parte del periódico *El Tiempo* y 4 por *El Espectador*. Algunos de los adjetivos utilizados son: “cuestionado (agente, senador, exgobernador, exgerente)” “exitosos empresarios,” “polémico exgobernador”, “poderoso (expresidente, empresario)” y “suspendido congresista”.

Como ejemplo podríamos citar la información divulgada por el periódico *El Tiempo* a través de la noticia titulada “Ocho años le tomó a la justicia apresar al ‘zar’ de Saludcoop”.

“[...] Conductas como esas son parte del voluminoso expediente contra el otrora poderoso expresidente de Saludcoop Carlos Gustavo Palacino Antía, quien llegó a ser uno de los más poderosos en el negocio de la salud en Colombia y este viernes pasó su primera noche en un calabozo por el desvío de al menos 400.000 millones de pesos”. (*El Tiempo*, 2018)

En ese fragmento es posible identificar el uso de adjetivos en dos sentidos:

1. **Poderoso expresidente de Saludcoop:** caracteriza a la persona investigada como influyente e indica que fue remitida a una celda por el desvío de dinero. En esa última afirmación el periodista no usa el condicional o las variaciones para garantizar la condición hipotética de su supuesta responsabilidad (supuesto desvío, supuesta participación en, posible, aparente), sino que da por cierta su participación lo que contribuye a la construcción de un clima de culpa. Para confirmarlo, basta con dar una mirada al titular de la nota “Ocho años le tomó a la justicia apresar al ‘zar’ de Saludcoop” en el que se hace énfasis en el tiempo que le tomó a la justicia poner tras las rejas al procesado (lo que en términos legales de ninguna manera significa que haya sido declarado culpable).

2. **El periodista refiere el “voluminoso expediente”:** el diccionario de la Real Academia Española (RAE) asocia este adjetivo con corpulencia, definida como “Grandeza y magnitud de un cuerpo natural o artificial”. (“DLE: corpulencia - Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario,” n.d.).

Dentro del contexto de la noticia, este adjetivo se vincula a la magnitud del expediente del ente acusador en contra del presunto inocente. Pruebas en su contra y el registro de los supuestos hechos delictivos son contenidos en el expediente. Este aspecto puede ejemplificar también el siguiente código, a propósito de los elementos materiales probatorios, pues sugiere que estas son de un tamaño considerable.

En cuanto a las supuestas pruebas contra el presunto inocente, vale la pena decir que en 6 oportunidades se registran por parte del primer diario y 5 por el segundo. En total se identifican 11 asociaciones, dentro de las cuales se tiene: “Testimonios claves”, “principales testigos”, “pruebas contundentes”, “solidez de la evidencia”, “voluminoso expediente”, y “comprometedor material”, por ejemplo.

Tabla XVIII - Uso de adjetivos según el medio de comunicación

Medio de comunicación	Agravan la acción	Asociados al presunto inocente	Asociados a las supuestas pruebas contra el presunto inocente	No se asocian a la caracterización establecida
El Tiempo	11	8	6	9
El Espectador	13	4	5	20
Total	24	12	11	29

Fuente: Elaboración propia. Periodo de análisis: 1 de enero a 30 de abril de 2018.

Elementos discursivos que aluden a la emoción y al sentimiento

No se identifica un uso generalizado de elementos de este tipo. En los casos en los que se registran, estos están ligados fundamentalmente a acciones por parte de las autoridades (8). Las alusiones al dolor de las víctimas se hacen efectivas en dos casos vinculados con delitos sexuales. Una expresión que podría ejemplificar este ítem es: “Las imágenes y el estado psicológico de la joven (quien, según sus familiares, dice que no quiere seguir viviendo) despertaron la indignación de los habitantes del municipio, que les piden a las autoridades celeridad en las investigaciones”. (*El Espectador*, 2018)

En ese caso, se hacen presentes los dos criterios: por un lado, un llamado a las autoridades para que asuman y desarrollen la investigación de manera pronta, y por otro, referencias al dolor de la víctima, quien según lo indican sus familiares y lo retoma el medio “no quiere seguir viviendo”.

Barata (2007) afirma que el abuso de este tipo de voces podría suponer la violación del derecho a la presunción de inocencia, ya que contribuiría a la construcción de un clima emotivo, que muchas veces se traduce en llamados a endurecer las penas y se sobrepone a la racionalidad en la que se fundamenta el derecho penal, e incluso puede llegar a consolidar el clima para el surgimiento de propuestas que se enmarcan dentro de populismo punitivo.

Tabla XIX - Registro de elementos discursivos alusivos a la emoción y al sentimiento según medio de comunicación

Medio de comunicación	Apelan al dolor de las víctimas	Refieren a algún tipo de acción por parte de las autoridades	No se registran
El Tiempo	0	2	25
El Espectador	2	6	31
Total	2	8	56

Fuente: Elaboración propia. Periodo de análisis: 1 de enero a 30 de abril de 2018

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS: CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

Este capítulo analiza los resultados presentados en la sección anterior en función de las tres hipótesis planteadas al principio de la investigación.

Para ello se tomarán como base las categorías de análisis definidas en el apartado metodológico, las cuales se estructuraron a partir de información de identificación; datos sobre la representación del presunto inocente, e información sobre la representación del delito.

Esta clasificación permitió elaborar un panorama general frente al respeto por el derecho a la presunción de inocencia en el registro noticioso de casos de corrupción y delitos sexuales en los periódicos *El Tiempo* y *El Espectador*, del que damos cuenta a continuación:

Hipótesis 1: Existe una tendencia a dar por cierta la responsabilidad penal de los presuntos inocentes con antelación a una sentencia judicial en su contra, lo cual supone la violación de la presunción de inocencia.

El uso excepcional del tiempo condicional en el registro noticioso de los casos analizados da cuenta de que los medios de comunicación estudiados tienden a afirmar la responsabilidad de los presuntos inocentes con antelación a una sentencia condenatoria en su contra. Esta situación se hace visible en el 57.8% del total de piezas exploradas.

No obstante, vale la pena afirmar que esta práctica se concretiza, en algunos de los casos, a través de las fuentes citadas por los medios de comunicación; es decir, que prefieren retomar los pronunciamientos realizados por otros y poner de presente indicios de afirmación de culpabilidad en sus palabras.

Para ejemplificar este asunto podemos examinar el siguiente fragmento de una noticia publicada por el periódico *El Espectador*:

“La Fiscalía indicó en audiencia pública que los tres patrulleros involucrados en este caso no sólo presenciaron los actos crueles, sino que despojaron a las víctimas de sus teléfonos celulares, dinero y documentos de identidad [...]”. (*El Espectador*, 2018)

Con esta afirmación el medio de comunicación, parafraseando lo dicho por la Fiscalía, da por hecho que los implicados tuvieron participación en los acontecimientos materia de investigación, de forma que sugieren la responsabilidad de manera anticipada, pues en ese momento, según el texto, los procesados solo habían sido objeto de imputación de cargos y medida de aseguramiento, actuaciones propias de la segunda fase del proceso penal, y que de ninguna manera son sinónimo de culpabilidad.

Bernal & Moya (2015) indican que presentar las medidas de aseguramiento, detenciones preventivas, como una pena anticipada o muestra de culpabilidad no solo genera desinformación en la audiencia, sino que se aleja de los fines establecidos en la normativa colombiana frente a su implementación.

De acuerdo con la Ley 906 de 2004, en su artículo 308, la aplicación de esta medida —que puede ser de diversos tipos— debe ceñirse a lo siguiente:

El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.

Como vemos, su implementación se constituye únicamente como una garantía para el normal desarrollo del proceso y para la protección de la víctima y, por tanto, no puede asimilarse ni como una muestra de responsabilidad o como “[...] Una medida cautelar a imponer sobre todos los acusados sin excepción y al margen de finalidades procesales, o bien como una respuesta judicial para calmar el sentimiento de alarma social”. (Baucells & Peres-Neto, 2008, p. 148)

Incurrir en este tipo de prácticas, así como obviar el uso del condicional con sustento en que *así lo dijo la fuente* se constituye como lesivo de la presunción de inocencia en la medida en que, de acuerdo con los pronunciamientos de la Corte Constitucional de Colombia (1995)²⁰, los medios de comunicación son responsables de la información que suministran y esto incluye el crédito que dan a las fuentes que citan.

De manera que no pueden sustituir su función de informar a partir de criterios de verosimilitud y de respeto por las garantías, bajo el amparo de que la información citada de manera directa o indirecta proviene de otras personas.

²⁰ En la Sentencia No. T-074/95, el alto tribunal se ha pronunciado de la siguiente manera:

Por el sólo hecho de publicar algo, el medio respectivo se responsabiliza de lo publicado. Si ha recurrido a terceros en calidad de fuentes y hace públicos los datos que ellos suministran, sin ocuparse en su verificación, asume los riesgos inherentes al crédito que les ha concedido. La práctica de confirmar las noticias que se difunden es un comportamiento que se desprende de la ética periodística y de la indispensable lealtad hacia los receptores de ellas. Desde el punto de vista jurídico, tiene que ver con la responsabilidad social incorporada a todo ejercicio del derecho a informar. La confirmación salvaguarda la credibilidad del informador y simultáneamente neutraliza la eventual reacción de quien temerariamente aspire a rectificar lo que encuentra sustento en hechos reales y probados. A juicio de la Corte, representa una verdadera garantía del derecho a la información en cuanto fortalece y afirma la certeza colectiva.

Sobre esa cuestión, Bernal & Moya (2015) plantean que “dentro de los deberes profesionales de los periodistas se encuentra el de ser crítico con sus fuentes e intentar corroborar y contrastar las informaciones que les suministran”. (p. 42). Para nuestro caso de estudio, se encontró que en un 34.4% predomina el uso de una sola fuente de información, que mayoritariamente es de tipo institucional (empleada en 51 casos).

Es claro entonces, según los resultados obtenidos, que en el cubrimiento de las noticias de carácter judicial - penal, la Fiscalía —como ejemplo de fuente institucional— se convierte en la principal voz tenida en cuenta por los periodistas a la hora de construir relatos noticiosos sobre el crimen; sin embargo, y sin el ánimo de desacreditar el trabajo de esta institución, cuya misión está ligada al ejercicio de “la acción penal y de extinción de dominio en el marco del derecho constitucional al debido proceso; participa en el diseño y la ejecución de la política criminal del Estado; garantiza el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de los delitos; y genera confianza en la ciudadanía” (“Misión | Fiscalía General de la Nación,” n.d.), es necesario enfatizar en la importancia de que los profesionales de la comunicación ejerzan una función de control frente a la información, ya que es posible que, incluso desde las mismas instituciones, se generen pronunciamientos que representen una devaluación de la presunción de inocencia.

Basta con revisar el siguiente boletín de prensa, divulgado por la Fiscalía General de la Nación colombiana, para confirmar esta afirmación:

Imagen 2 - Boletín de prensa Fiscalía General de la Nación, 1 de junio de 2018.

[Inicio](#) > [Seccionales](#) > [Seccional Pasto](#) > [Asegurado hombre de 68 años por delitos sexuales contra una vecina](#)

[Seccionales](#) [Seccional Pasto](#) [Violencia sexual e intrafamiliar](#)

Asegurado hombre de 68 años por delitos sexuales contra una vecina

Tumaco (Nariño). Viernes, 01 de Junio de 2018 10:47 am [Boletín 22865](#)

El Juzgado Tercero Penal Municipal, con funciones de control de garantías de Tumaco (Nariño), aceptó los argumentos de la Fiscalía y profirió medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Virgilio Castro, por el delito de acto sexual violento agravado con menor de 14 años.

Los hechos ocurrieron en la vereda El Colorado zona rural del municipio de Tumaco, el 26 de mayo de 2016, en la casa de la víctima, quien se encontraba sola cuando el presunto agresor —un vecino— ingresó y le realizó tocamientos en todo el cuerpo.

La captura fue efectuada por servidores del CTI de la Fiscalía, mediante orden judicial, en el sector conocido como la Y, zona urbana del puerto nariñense.

El hoy procesado, de 68 años de edad y de oficio pescador, no se allanó a cargos y por disposición del juez fue enviado a cumplir la medida en su residencia por problemas de salud.

MPHA/DLBM

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juez aseguró a 4 familiares del llamado Zar de la chatarra Pedro Aguilar en Cali

Impactada organización delincuencia en Inglaterra que delinquía en Armenia (Quindío)

Asegurado joven gestor de paz de la Alcaldía Municipal de Ibagué por homicidio de su par

Impactada organización delincuencia en Los Perlas de Montenegro (Quindío)

Juez negó permiso de trabajo a expresidente de Reficar

En él se evidencian, entre otros aspectos, el uso erróneo de la palabra presunto²¹, pues está acompañada del término agresor. “Sorprende la referencia a los acusados como “presuntos violadores, cuando la presunción constitucionalmente lo es de inocencia, y no de culpabilidad”. (Baucells & Peres-Neto, 2008, p. 148)

También es posible identificar la presencia de otros elementos que contribuirían a la configuración de la culpabilidad anticipada, por ejemplo: “Cuando el presunto agresor —un vecino— ingresó y le realizó tocamientos en todo el cuerpo”. (Fiscalía General de la Nación, 1 de junio de 2018). Esa frase, que alude al procesado como el presunto agresor —identificado con nombre y apellido, edad e incluso profesión a lo largo de la noticia— da por cierto que el implicado ejecutó esas acciones en contra de su vecina, como se indica en el titular.

²¹ Contrario a los resultados obtenidos en esta investigación en los que el uso equivocado de este término no se presenta como una práctica reiterada.

La información no se despliega de modo que, a través del uso del tiempo condicional o de palabras como supuesto / posible, deje claro que la persona investigada es en ese momento presunto inocente. Decidir sobre su culpabilidad deberá ser el resultado de un juicio justo, en presencia de un juez imparcial que, de acuerdo con el sustento probatorio del ente acusador, atribuirá o no algún tipo de responsabilidad en los hechos investigados. (Bernal & Moya, 2015)

En esas condiciones, el ejercicio del periodismo más que reproducir lo que dijo la fuente institucional, que indudablemente se consolida como un insumo clave, debe ser entendido —desde la perspectiva de Vidal (2002) y Chillón (2001)— como una labor intelectual que interpreta la realidad y que por tanto, responde a un conjunto de decisiones que toma el periodista desde su subjetividad. Es solo desde allí, desde donde es posible ser “honestamente neutral o imparcial”. (Vidal, 2002, p.54)

Así que la revisión cuidadosa de la información suministrada se concibe como una labor clave del trabajo periodístico en el cubrimiento de procesos penales, pues si bien es cierto que de acuerdo con la Constitución Política de Colombia (1991) la libertad de expresión y de información son expresiones legítimas de una sociedad democrática, también lo es que esta en ningún sentido puede consolidarse como violatoria de otros principios como el de la presunción de inocencia, que debe ser preservado a lo largo de todo el proceso penal. (Corte Constitucional, 1992, Sentencia No. T-512/92)

La incorporación en el relato periodístico de expresiones que aseguren la culpabilidad anticipada de una persona a partir de distintas manifestaciones tanto implícitas como explícitas, más que enmarcarse dentro del derecho a la libertad de expresión, se constituye en un acto que deteriora la función de responsabilidad social que se le atribuye a los medios de comunicación. Sobre este particular, Baucells & Peres-Neto (2008) afirman que: “[...] Todo esto comporta graves vulneraciones a los deberes deontológicos del periodista, pero también conduce a una suerte de cinismo en los que la construcción de un discurso (*sic*) en el que los principios y garantías político

– criminales fijados en la Constitución son menospreciados para el bien del relato y el beneficio para la cuota de la audiencia”. (p. 151)

De acuerdo con estos autores, el registro de hechos noticiosos relacionados con procesos penales y con el crimen causa especial interés en la ciudadanía, pero ello no debería traducirse en una disminución de las garantías del procesado como respuesta a la búsqueda por aumentar la audiencia. Además de sugerir la necesidad del autocontrol deontológico, al que podemos sumar el uso indiscutible del tiempo condicional o de palabras equivalentes de modo que se transmita al espectador que lo que se está diciendo en ningún sentido refleja la culpabilidad del procesado, Baucells & Peres-Neto (2008) plantean la necesidad de “[...] La intervención de alguna institución independiente que, sin necesidad de imponer sanciones por los contenidos, ejerza una actividad de valoración, advertencia y, en su caso, denuncia pública de aquellos que afecten valores democráticos esenciales”. (p. 151)

En cuanto al trabajo de los organismos acusadores, por ejemplo, el de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, se entiende que su función constitucional está dada por la investigación y acusación de los posibles infractores de la Ley ante los juzgados respectivos (Constitución Política de Colombia, 1991) ; no obstante lo anterior, como bien lo dice la misma entidad en su misión, esta labor debe fundarse en el respeto por el derecho constitucional al debido proceso que implica, entre otras cosas, evitar pronunciamientos que afirmen la culpabilidad, que pongan en desventaja al procesado o que sirvan como insumo para la construcción de un clima estigmatizante.

Hipótesis 2: La presunción de inocencia es violada con mayor frecuencia en los casos relacionados con delitos sexuales que en aquellos vinculados con hechos de corrupción.

En el capítulo dedicado al marco teórico que sustenta esta investigación nos referimos a la corrupción y a los delitos sexuales en relación directa con su tratamiento en los medios de comunicación.

Sobre el primero, a partir de los planteamientos efectuados por Thompson (2001), dijimos que es probable que la corrupción —definida por el citado autor como “la perversión o pérdida de integridad en el ejercicio de tareas públicas por soborno o favoritismo, especialmente en el caso de funcionarios del estado o de alguna otra institución pública” (p. 51)— sea propensa a los escándalos.

Al tratarse de hechos que generalmente involucran a personas que ostentan cargos públicos o con cierto grado de reconocimiento, y en los cuales la ciudadanía ha depositado su confianza, por lo que espera ciertas conductas ligadas a la integridad en el ejercicio de sus funciones, un hecho de este tipo podría alcanzar una notoriedad significativa. Es ahí donde los medios de comunicación juegan un papel fundamental como visibilizadores. Son ellos quienes convierten asuntos de esta clase en escándalos mediáticos, de manera que trascienden la esfera privada a un escenario público accesible a una gran cantidad de personas.

Sin embargo, que se convierta o no en escándalo, señala el autor, depende además del contexto social en el que se presente y de la fuerza vinculante de las normas que han sido quebrantadas con el hecho. En otras palabras, la trascendencia que adquiere está mediada, entre otros aspectos, por el nivel de gravedad que la sociedad le asigna.

En cuanto a los delitos sexuales en los medios de comunicación, podemos resumir lo especificado previamente, diciendo que las conductas abarcadas por esta tipología se enmarcan dentro del denominado periodismo de sucesos. (Rodríguez, 2015)

De acuerdo con Díez Ripollés (2000), los hechos de este tipo son de interés humano y su representación en los medios de comunicación genera inquietud en los ciudadanos, “[...] que se identifican fácilmente con la víctima y sus padecimientos”. A su turno, Baucells & Peres-Neto (2008) manifiestan que “Un homicidio o una violación son, por definición, hechos perturbadores del orden social y con ello noticias trascendentes a la normalidad de los hechos cotidianos”. (p. 150)

En su tratamiento mediático, especialmente en el de tipo televisivo —afirman estos autores—, es posible encontrar características ligadas al sensacionalismo y el drama, lo cual contribuye a la representación de la imagen del supuesto delincuente a partir de su peligrosidad. La víctima, en estos casos, generalmente adquiere un papel preponderante, así como sus pedidos en torno a la reivindicación del castigo y los llamados a respuestas ejemplares por parte de las autoridades. (Baucells & Peres-Neto, 2008)

A partir de este contexto, procederemos a la contrastación de la hipótesis. Para ello, realizaremos un cuadro comparativo (Tabla XX) que da cuenta de los resultados más relevantes obtenidos tras la aplicación de la ficha de análisis según cada uno de los tipos noticiosos estudiados:

Tabla XX - La presunción de inocencia según la tipología noticiosa

Categorías de análisis	Delitos sexuales²²	Casos de corrupción²³
Tipología del personaje	El 100% de los casos analizados frente a esta clase de delitos corresponde a figuras sin reconocimiento público en coherencia con lo planteado por Rodríguez (2015), a propósito de los hechos que se enmarcan en el periodismo de sucesos, que “[...] suelen estar protagonizados mayoritariamente por gente corriente, personas desconocidas que aparecen en	El 62.3% de las noticias relacionadas con hechos de corrupción son protagonizadas por figuras con reconocimiento público. Esto confirma los planteamientos realizados por Thompson (2001) con relación a la predominancia de este tipo de personajes en

²² El 100% equivale a 11 noticias correspondientes a esta tipología noticiosa.

²³ El 100% corresponde a 53 piezas noticiosas clasificadas dentro este tipo.

	los medios no voluntariamente, sino como consecuencia de los hechos cometidos o padecidos”. (p. 28)	situaciones asociadas con escándalos de corrupción.
Términos para referirse al presunto inocente²⁴		
Uso errado de la palabra presunto: Expresiones que contemplan la combinación Presunto (autor, responsable, agresor, abusador, violador).	Evidenciado en el 27.3% de los casos analizados.	Evidenciado en el 1.9% de los casos analizados.
Agresor/Violador/Responsable: Se afirma culpabilidad.	Registrados en el 18.2% de los casos.	Registrados en el 1.9% de los casos estudiados.
Acusado: Uso antes de la etapa de juicio, lo que se considera incorrecto.	Registrado en el 9.1% de los casos.	Registrado en el 3.8% de los casos.
Supuesto/ implicado: Adecuados para referirse al presunto inocente.	Empleados en el 18.2% de los casos.	Empleados en el 5.7% de los casos.
Señalado (De señalar): “Poner o estampar señal en una cosa para darla a conocer o distinguirla de otra [...]. Llamar la atención hacia alguien o algo, designándolo con la mano o de otro modo”(“DLE: señalar - Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario,” n.d.)	Usado en el 27.3% de los casos.	Usado en el 11.3% de los casos.

²⁴ Tomaremos las que representan una afectación al derecho de la presunción de inocencia.

En el capítulo inmediatamente anterior concluimos que el uso errado de la palabra presunto no es una práctica sistemática dentro del registro noticioso estudiado; no obstante, teniendo en cuenta que la hipótesis que aquí queremos comprobar refiere que la presunción de inocencia es violada con mayor recurrencia en los casos relacionados con delitos sexuales que en aquellos vinculados con hechos de corrupción, consideramos necesario resaltar las frecuencias en las que se registran ciertas categorías de análisis en los relatos noticiosos revisados haciendo una diferenciación según la tipología.

En ese sentido, tenemos que el uso errado de la palabra presunto se evidencia de forma más reiterada en el caso de los delitos sexuales que en los hechos de corrupción; igual sucede con el uso de palabras como agresor, violador, responsable, señalado y acusado, cuyo porcentaje en el primer caso es mayor que en el segundo.

Uso excepcional del condicional	En el 81.8% de los casos analizados frente a este delito se evidencia el uso excepcional del condicional.	Las noticias de corrupción analizadas muestran en un 52.8% el uso excepcional de este tiempo verbal.
--	---	--

Si bien es claro que el uso del condicional no es empleado en la totalidad de los casos en ninguno de los dos tipos noticiosos analizados lo que, de entrada, como ya lo hemos dicho, representa un devalúo para la presunción de inocencia, es preciso afirmar que se ve de manera más reiterada en el registro noticioso de los delitos sexuales.

Referencias a antecedentes del presunto inocente	En el 27.3% de las piezas analizadas a propósito de los delitos sexuales se evidencian alusiones a los antecedentes del procesado.	En los casos de corrupción, las menciones de este tipo se hacen visibles en el 13.2% de las noticias.
---	--	---

Baucells & Peres-Neto (2008) afirman que aludir a los antecedentes de los presuntos inocentes, en caso de tenerlos, es una forma de reforzar su imagen de peligrosidad, como también lo es

plantear la idea de la reincidencia. La frecuencia de alusiones de este tipo es mayor en los casos de delitos sexuales.		
Información adicional sobre el presunto inocente	En 10 de los 11 casos estudiados, que equivale al 90.9%, no se registran alusiones de este tipo.	En el 90.6% de los casos estudiados no se presentan alusiones de este tipo.
No es frecuente encontrar datos que pudiesen contribuir a la generación y/o fortalecimiento de estereotipos (políticos, religiosos, de género, sexuales) en las piezas analizadas. En los dos casos encontramos cifras equivalentes. Este es un elemento que vale la pena destacar positivamente dentro de la práctica periodística puesta de manifiesto en el registro de casos estudiados.		
Registro de datos sobre la vida personal del presunto inocente	En seis de los once casos estudiados, lo que corresponde al 54.5% del total examinado para esta tipología, no se evidencian menciones sobre aspectos de la vida personal/ privada del presunto inocente.	En 43 de los 53 casos analizados, es decir, en el 81.1% no se hacen menciones sobre este asunto.
La mención de datos familiares, edad, estado civil, lugar de nacimiento, características de alojamiento/domicilio, pasatiempos (ocio), nivel de escolarización, sitios frecuentados, que no se consolidaran como información necesaria en la noticia, no fue una práctica habitual en ninguno de los dos tipos estudiados.		
Número de fuentes	En el cubrimiento de los delitos de este tipo predomina el uso de más de dos fuentes, lo que se demuestra en el 45.5% de los casos.	En la mayoría de los casos (35.8%) se contempla una sola fuente; en el segundo lugar se encuentran dos fuentes con el 30.2% y el tercero más de 2 fuentes con el 26.4%

Fuentes utilizadas	Además de las fuentes institucionales, en el registro de esta clase de delitos, también se evidencian las voces de las víctimas, cuyos pronunciamientos son puestos de presente en tres casos de los 11 analizados, mientras que las del procesado o su defensa en dos ocasiones.	En el registro de los hechos de corrupción no se evidencia la voz de la víctima, pues en esta clase de delitos, esta es “difusa, desaparece” (Baucells & Peres-Neto, 2008, p. 146). Por el contrario, los pronunciamientos del procesado y su defensa se muestran en 17 casos.
<p>Al comparar de manera específica la tipología de las fuentes empleada en el tratamiento informativo de los delitos sexuales y de los hechos de corrupción podemos confirmar los planteamientos de Baucells & Peres-Neto (2008) que refieren que en los delitos económicos es más factible que en los de la delincuencia común o de sucesos, que se contemple la voz de los procesados, generalmente personajes públicos, mientras que en el otro tipo, la víctima —que se hace visible— es considerada en la construcción del relato. Esta práctica, cuando es utilizada de forma desmedida o “[...] Utilizando el sufrimiento y el dolor de las víctimas como mecanismo de persuasión y captación de los espectadores” (Baucells & Peres-Neto, 2008, p. 130), puede significar un riesgo para la presunción de inocencia del implicado, además de favorecer la construcción de un clima que culpabiliza, y que a la larga puede dar paso a juicios paralelos y al populismo punitivo.</p> <p>“Todo ello sin perjuicio de reconocer a las víctimas su derecho a expresar cualquier opinión sobre el sistema penal, porque lo que aquí se critica no es el discurso de la víctima —que puede ser comprendido en especial situación—, sino que las instancias mediáticas y políticas lo consagren como el más atendible e ignoren que la posición de la víctima es, por definición,</p>		

parcial, y que la del Estado, en cambio, debe ser mediadora y racional”. (García Arán & Peres-Neto, 2008b, p. 39)		
Etapas procesales	El 27.3% de los casos analizados en esta tipología se encuentran en etapa de indagación. El 72.7% se suscribe a la segunda fase; es decir, la de investigación.	El 28.3% corresponden a la etapa de indagación; 60.4% a investigación y 11.3% a juicio.
Adjetivos en el texto	<p>En cuatro de las 11 piezas estudiadas, es decir en el 36.4% de los casos, es factible identificar adjetivos que agravan la acción. “Aberrantes hechos” (<i>El Espectador</i>, 2018), y “actos tan atroces” (<i>El Espectador</i>, 2018) son algunos de los ejemplos.</p> <p>En solo un caso los adjetivos se asocian a las pruebas contra el presunto inocente. Las demás piezas examinadas se clasifican dentro del código “No se asocian a la caracterización establecida”.</p>	<p>Para el caso de los hechos de corrupción encontramos que en 20 casos, es decir, en el 37.7% del total de las piezas de esta clase, se evidencian adjetivos que agravan la acción.</p> <p>En cuanto a los adjetivos asociados al presunto inocente, estos se hacen notorios en 11 casos. Como se planteó en el apartado de presentación de resultados, estos fueron principalmente: poderoso, exitoso, cuestionado y polémico.</p> <p>Sobre el tercer código, adjetivos asociados a la solidez de las pruebas en</p>

		<p>contra del procesado, podemos decir que están presentes en 10 casos.</p> <p>Adjetivos relacionados con la solidez de las pruebas en contra de los presuntos inocentes se evidencian en 10 casos. “Testimonios claves”, “principales testigos”, “pruebas contundentes”, “solidez de la evidencia”, “voluminoso expediente”, y “comprometedor material” son algunos de los hallazgos.</p>
<p>De estos resultados podemos inferir que en los casos de corrupción el uso de adjetivos, según la descripción realizada en el libro de códigos, es más común que en el tipo sexual, y estos resaltan la calidad e influencia del personaje. Además, refieren la solidez de las pruebas con las que cuenta el ente que tiene a cargo la acusación. La predominancia de los adjetivos a propósito del hecho que se investiga, en el caso de los delitos asociados a la corrupción, es coherente con los pronunciamientos de Thompson (2001) a propósito de los discursos infamantes comúnmente utilizados por los medios de comunicación en el marco de los escándalos de corrupción. “Se trata de un tipo de discurso moralizador que [...] implica que las acciones son vergonzosas o deshonorosas, y por consiguiente implica también que las acciones habrán de acarrear vergüenza, deshonor, y descrédito al individuo o individuos que las realizaron”. (Thompson, 2001, p. 41)</p>		
	En 6 casos analizados, lo que corresponde al 54.5% del total de	Los hechos de corrupción estudiados registran en un

Elementos discursivos que aluden a la emoción y al sentimiento	piezas catalogadas dentro de la tipología de delitos sexuales, se encuentran elementos discursivos de esta clase. De ellos, cuatro refieren algún tipo de acción por parte de las autoridades y dos aluden al dolor de las víctimas.	7,5% elementos de este tipo y en su totalidad refieren alguna clase de acción por parte de las autoridades.
La prevalencia de esta variable en los delitos sexuales sobre los de corrupción obedece a que en el primer caso la víctima es clara, mientras que en el segundo, esta es identificada como difusa (Baucells & Peres-Neto, 2008). No obstante, en ambos casos se presentan referencias a acciones por parte de las autoridades. Para el caso de los delitos sexuales, se muestran llamados a aclarar los acontecimientos con el fin de resarcir el daño causado a la víctima, y en el segundo, hechos de corrupción, son visibles pronunciamientos de los líderes políticos o institucionales ligados a la lucha anticorrupción.		

Fuente: elaboración propia. Periodo de análisis 1 de enero a 30 de abril de 2018.

Podemos concluir lo relativo con esta hipótesis diciendo que se registra un tratamiento diferenciado en cuanto la presunción de inocencia de acuerdo con los delitos analizados. En el caso de los delitos sexuales la devaluación de la presunción de inocencia pareciese ser mayor, que en los hechos de corrupción. Respecto de esta diferencia, Baucells & Peres-Neto (2008) dicen: “[...] La discriminación se refiere también, como vimos, a la forma como se plantea y aborda la delincuencia económica. En ellos el discurso cambia radicalmente: el protagonismo de la víctima, ahora difusa, desaparece; el estigma del delincuente como un ser peligroso se desdibuja; el acusado —en muchas ocasiones personaje público— genera empatía con el periodista; su versión de los hechos es escuchada; y el sistema penal, ahora sí, debe mostrar su cara más humanitaria”. (p. 146 - 147)

Sobre el mismo asunto, Thompson (2001) dice que el discurso mediático a propósito de la corrupción y de los implicados, “puede expresar diferentes grados de reproche, desde la represión

suave y una cierta languidez, o incluso una aburrida desaprobación [...]. También puede expresarse de diferentes modos y en distintos contextos”. (p. 41). La manera como son presentados este tipo de hechos, además, según el citado autor, está influida por la fuerza vinculante de las normas que han sido quebrantadas y por la trascendencia que la sociedad en la que se presentan le atribuya.

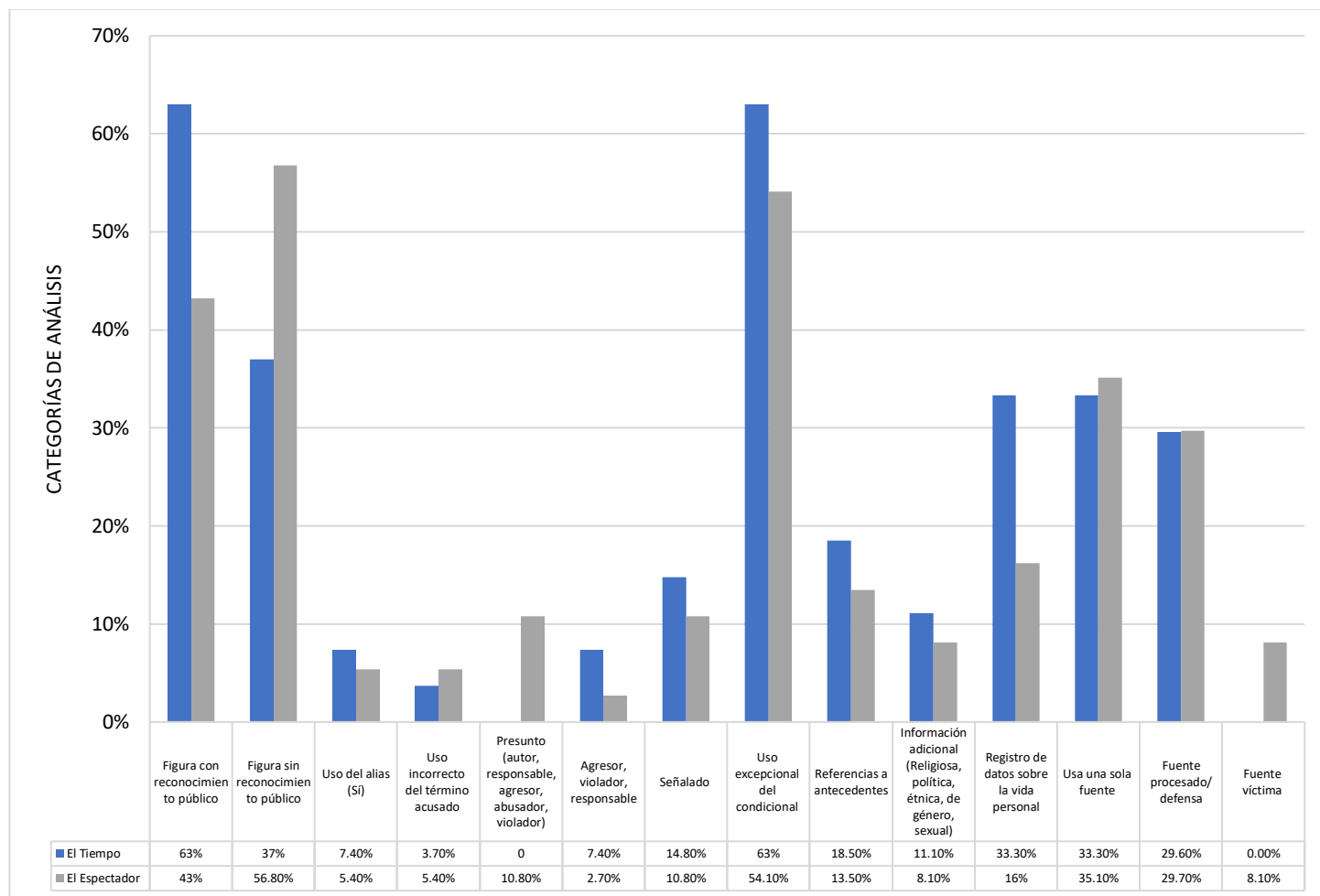
En ese sentido, un mismo hecho de corrupción podría ser tratado de formas muy diferentes en distintos contextos en los que los valores y las creencias varían.

Hipótesis 3: El periódico *El Espectador* respeta en mayor medida la presunción de inocencia en comparación con el periódico *El Tiempo*.

En sentido estricto, esta hipótesis se confirma teniendo en cuenta que, según las categorías de análisis que se muestran en el gráfico 1, el periódico *El Tiempo* fue quien recurrió en mayor medida en la afectación de la presunción de inocencia en el registro de los casos analizados. Sin embargo, esto no se logra a través de un margen muy amplio. Si observamos, es posible encontrar que, con excepción de los indicadores “figura con reconocimiento público” y “figura sin reconocimiento público”, consideradas como elementos de contexto, las demás categorías de análisis muestran comportamientos similares entre los dos medios.

Si bien existen elementos que nos permiten evidenciar una tendencia a vulnerar la presunción de inocencia, los porcentajes se ubican en la mayoría de los casos por debajo del 50%. Solo en una categoría se supera este tope y es en la correspondiente al “Uso excepcional del condicional”: cuando a lo largo de la pieza noticiosa se obvió el uso de este tiempo verbal en todo caso al referirse a la supuesta participación o responsabilidad del presunto inocente en los hechos que se investigan.

Gráfico 1 - Representación del procesado según medio de comunicación



Fuente: elaboración propia. Periodo de análisis 1 de enero a 30 de abril de 2018.

Con lo anterior no se quieren subestimar en ningún sentido los índices de devaluación o afectación a la presunción de inocencia, ya que omitir en algunos casos el uso del tiempo condicional y con ello afirmar la culpabilidad del implicado es suficiente para concluir una devaluación de este derecho. No obstante, tras los resultados obtenidos de manera global (sin tener en cuenta la distinción según la clase de delitos) es posible identificar que la mención de aspectos como el alias, la aplicación equivocada de las palabra presunto, acusado, agresor, violador y responsable y

referencias a antecedentes e información de carácter personal no es una regla general dentro del registro noticioso analizado.

CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo insistimos en la importancia de los medios de comunicación en la construcción de opinión pública, así como su incidencia en el establecimiento de las agendas políticas del contexto en el que tienen lugar las informaciones por ellos suministradas. García Arán & Peres-Neto (2008b) afirman que “Fijar la agenda de los medios es fijar el calendario de los hechos sociales. Seleccionar lo que es y lo que no es importante. Sacar a la luz determinados hechos en detrimento de otros. Legitimar un hecho. Destacar un problema. Crear el clima en el que será recibida una información”. (p. 27)

De acuerdo con la perspectiva que hemos querido plantear, los medios de comunicación desempeñan una función que va más allá de la mera transmisión de información. Sus elecciones, jerarquizaciones y formas de referirse a ciertos acontecimientos impactan los imaginarios colectivos que se gestan y es ahí donde surge la necesidad de profundizar en las representaciones realizadas por los medios, específicamente en el ámbito penal.

Quisimos, además, referirnos a la práctica del periodismo desde una perspectiva que parte de la subjetividad que le es inherente a cada individuo y, por tanto, es en su ejercicio consciente a partir del cual es posible “ser honestamente neutral o imparcial”. (Vidal, 2002, p.54)

Tras realizar esta y otras consideraciones de tipo teórico a propósito del ejercicio periodístico, y de conceptualizar la relación entre medios de comunicación y presunción de inocencia, para lo cual tuvimos en cuenta factores vinculados con la normativa internacional y nacional colombiana, hicimos una aproximación a cuestiones como los juicios paralelos y el populismo punitivo.

Sobre esos dos puntos reflexionamos en torno a la libertad de expresión como un derecho que no puede ejercerse a partir de la vulneración de otros como el debido proceso, la honra y la presunción de inocencia y, en ese sentido, se planteó la necesidad de encontrar un equilibrio entre derechos,

de manera que en todo caso se busque la protección de las garantías constitucionales y legales sin coartar el ejercicio libre del periodismo.

Posteriormente, y tras la aplicación de la ficha de análisis construida para identificar los aspectos más relevantes del respeto por el derecho a la presunción de inocencia en el tratamiento informativo de los hechos de corrupción y delitos sexuales en los diarios *El Tiempo* y *El Espectador*, en el periodo seleccionado, se encontraron los hallazgos que se resumen a continuación:

Existe una tendencia a dar por cierta la responsabilidad de los presuntos inocentes con antelación a una sentencia condenatoria, planteamiento contenido en la primera hipótesis de investigación.

Dentro de los aspectos más significativos que permitieron llegar a esa conclusión se encuentra el uso excepcional del tiempo condicional en más de la mitad de los casos estudiados, lo cual se hizo evidente en el 57.8% del total analizado. Además de esta variable se contemplaron otros factores como el uso de las fuentes en el discurso periodístico, las maneras de referirse al presunto inocente, la existencia o no de referencias a sus antecedentes, así como alusiones a información sobre la vida personal del implicado, entre otras variables clasificadas como de “Representación del presunto inocente”.

Los resultados generales indican el predominio de una sola fuente en el registro noticioso de los casos estudiados, que es generalmente de carácter institucional. Demuestran también que el uso erróneo de la palabra presunto no es una constante en el tratamiento informativo, como tampoco lo es el alias, ni las denominaciones sugeridas de acuerdo con cada fase del proceso penal (indiciado, imputado, asegurado, acusado).

En el caso de la segunda hipótesis, comparamos el respeto a la presunción de inocencia según la tipología noticiosa y encontramos mayor grado de afectación en el abordaje de los delitos sexuales. Las principales diferencias radican en que en los casos de corrupción las voces de los presuntos inocentes son escuchadas en mayor medida que en los delitos sexuales; en estos últimos, las

víctimas se hacen visibles, especialmente con alusiones al daño causado y al llamamiento a las autoridades a esclarecer los hechos, lo cual no es claro en los casos de corrupción pues en ellos la víctima se diluye. (Baucells & Peres-Neto, 2008)

Los resultados de la tercera hipótesis, relacionada con el respeto a la presunción de inocencia según cada uno de los diarios analizados, nos permitieron concluir que, si bien el periódico *El Tiempo* registra mayor recurrencia en ciertas categorías de análisis que el periódico *El Espectador*, las diferencias entre uno y otro no son considerables. En ese orden de ideas, podemos afirmar que los dos diarios de referencia en Colombia demuestran prácticas periodísticas semejantes en el abordaje de los asuntos aquí analizados.

En ese sentido, y a partir de los resultados obtenidos en función de las hipótesis de investigación, se considera necesario hacer algunas precisiones y recomendaciones para fortalecer el trabajo periodístico, especialmente con relación al cubrimiento de procesos penales:

1. El conocimiento que tenemos sobre la realidad del mundo del crimen está condicionado por los medios de comunicación. Según Barata (2007) existen tres factores que determinan nuestras percepciones sobre este tema: 1. El contacto directo (ser víctima); 2. La experiencia de alguien cercano (que nos cuenta), y 3. Lo que registran los medios de comunicación.

Si las dos primeras no tienen lugar, nos quedamos con la información suministrada por los periodistas, quienes pueden contribuir en el tratamiento informativo a la consolidación de un público informado a partir de criterios de verisimilitud o a la generación y/o fortalecimiento de un clima que criminaliza y condena con antelación a una sentencia judicial. En ese sentido, el uso cuidadoso del lenguaje y de los tiempos verbales se consolida como imprescindible, especialmente a la hora de referirse a personas que aún están siendo objeto de investigación.

De igual manera es relevante incluir en el registro noticioso fuentes de diverso tipo en pro del pluralismo informativo. Limitar los contenidos a los datos suministrados por fuentes institucionales, necesarias sin duda alguna, reduce la representación de la realidad a una única perspectiva, en detrimento de la función de informar a partir actividades como la contrastación. López (1995) dice que “toda fuente es valiosa en sí misma y en contraposición a las otras porque se enriquece a través del contraste y la polémica”. (p. 35)

De ahí la necesidad de consultar varias y de diverso tipo, ya que las informaciones y “las notas de prensa oficiales están llenas de lagunas informativas que conviene colmar con preguntas por parte de los periodistas”. (López, 1995, p. 99)

En esa misma línea conceptual, Rodríguez (2015) manifiesta que los datos provenientes de los gabinetes de prensa y por extensión, de las fuentes institucionales, están mediatizados ya que proveen la versión de la entidad, la cual está alineada a cierta estrategia institucional que resalta aquello que le favorece y omite lo que le pueda perjudicar.

Dar voz a unos y no a otros puede implicar ciertas afectaciones a la presunción de inocencia, que como vimos también varía según la tipología estudiada.

2. El derecho a la presunción de inocencia, esencial para el ser humano, debe ser respetado en todo caso, independientemente del hecho que se investigue. Se considera inadecuado que el registro noticioso establezca una clase de *status* para los presuntos inocentes a quienes, dependiendo del delito que supuestamente cometieron, se les respeta en mayor o menor medida sus derechos.
3. Los medios de comunicación son actores clave en el escenario social, pero no pueden convertirse en jueces, de modo que, aún sin pronunciamientos en firme, atribuyan responsabilidades a *priori*, lo cual podría afectar la imparcialidad judicial, así como los derechos del presunto inocente.

4. La presunción de inocencia no se viola solamente con el uso errado de la palabra presunto. Existen otras variables, que intentamos condensar en la ficha de análisis propuesta, y que refieren distintos modos a partir de las cuales los medios de comunicación pueden vulnerar este derecho.
5. Los contenidos periodísticos no son solo información; son una construcción que resulta de un proceso selectivo e intelectual en el que influyen factores como “interpretaciones, valoraciones y opiniones implícitas que la periodista infiltra por acción o por omisión, desde la competencia profesional, o todo lo contrario, desde la negligencia, da igual, porque se elabore con rigor profesional o se haga de un modo irresponsable, nunca hay información sin informador”. (Burguet, 2008, p. 180).

Lo que resulta problemático de esto, según el mismo autor, es que no se trata solamente de los datos que se transmiten, sino de lo que se da a entender con ellos. Del clima social que resulta de esa información que a partir de asociaciones y/ omisiones, entre otras acciones, incide en las representaciones que nos hacemos del otro, hasta el punto de criminalizar y culpabilizar a alguien que aún no ha sido declarado como tal en los tribunales competentes.

Se atribuye de esta manera un papel activo al periodista y a los medios de comunicación, que desde el lenguaje, las jerarquizaciones de información, el manejo de las fuentes y las referencias a los distintos actores sociales pueden contribuir al respeto de los derechos, la eliminación de estereotipos que fomenten la discriminación, la exclusión, estigmas y la criminalización o, por el contrario, pueden suministrar información que, bajo la idea de “objetividad”, puede resultar completamente falaz y constituirse como lesiva de derechos.

“Detrás de un texto siempre hay un sujeto, competente o necio, y una intención, leal o perversa. O sea, que puede ser tan parcial, tendencioso, sectario o tramposo como una redacción impersonal —el llamado estilo informativo, que se propone como garantía de

imparcialidad y veracidad, y que a veces es solo una forma de disimular intenciones y de enmascarar informaciones— como con un texto de opinión”. (Burguet, 2008, p. 76)

Es en esa cuestión donde se plantea el interrogante por la responsabilidad de los medios de comunicación y la ética periodística, pues como vimos, no se trata solamente de datos; se trata de la manera como se presentan, de la forma en la que se construye el relato, ¿hay ganadores y perdedores? ¿buenos y malos? ¿héroes y villanos?

6. Es necesario un compromiso por parte de los medios de comunicación con la toma de acciones que permitan mitigar la afectación a la presunción de inocencia. Revisar los códigos deontológicos, abstraer la presunción de inocencia como concepto a un escenario concreto que ponga de manera explícita lo que podría constituirse como vulneración, así como talleres con los periodistas a propósito de la importancia de su rol en la construcción de imaginarios colectivos son algunos ejemplos de las medidas que podrían tomarse desde las redacciones con el fin de fortalecer el cubrimiento periodístico, específicamente en el ámbito judicial.

Finalmente, a propósito de cuestiones metodológicas y de futuras investigaciones, se considera necesario precisar que:

1. La ficha de análisis planteada para esta investigación, con ciertos ajustes, podría ser utilizada en la revisión no solo de textos periodísticos, sino también en el escenario televisivo y radial, así como en diversos tipos delictivos, con el propósito de futuros análisis comparados.
2. Por cuestiones de tiempo, este trabajo se centró en un análisis de tipo cuantitativo, el cual puede ser enriquecido a partir de una aproximación narratológica o crítica del discurso que permita vislumbrar otros aspectos que escaparon a esta investigación y que permitirían ampliar el contexto de la presunción de inocencia a propósito de las representaciones

efectuadas por los medios de comunicación. Aspectos de tipo ideológico de los medios pueden ser abordados a partir de esas propuestas.

ANEXOS

ANEXO 1. FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO

Información de identificación	
1	Noticia
2	Título de la noticia
3	Fecha
4	Diario
5	Sección
6	Autor
<div> <div>Periodista</div> <div>Sin autor</div> </div>	
Indicadores de representación del presunto inocente	
7	Tipología del personaje
<div> <div>Figura con reconocimiento público (político/ judicial/ económico)</div> <div>Figura política/ judicial no pública</div> </div>	
8	Uso del alias para referirse al presunto inocente
<div> <div>Sí</div> <div>No</div> </div>	

9	Términos para denominar al presunto inocente				
	Detenido/ capturado/aprehendido	Indiciado	Imputado	Asegurado	
	Acusado	Presunto autor/ responsable	Presunto agresor/ abusador/ violador	Agresor	
	Violador	Responsable	Investigado/ procesado	Supuesto / implicado	
	Sospechoso	Señalado	Otro		
10	Uso del condicional				
	Siempre		Excepcionalmente		
11	Referencias a antecedentes del presunto inocente				
	Sí		No		
12	Información adicional sobre el presunto inocente				
	Religiosa	Política		Étnica	
	De género	Sexual		No registra	
13	Registro de datos sobre la vida personal del presunto inocente				
	Sí		No		
14	Número de fuentes empleadas				
	0	1	2	Más de 2	
15	Fuentes utilizadas				
	Institucional	Víctimas	Presunto inocente/ defensa	Testigo	Otros
Observaciones					

Indicadores de representación del delito				
16	Tipología noticiosa			
Casos de corrupción			Delitos sexuales	
17	Etapa procesal			
Indagación		Investigación	Juicio	
18	Los adjetivos utilizados en el texto			
Asociados a la acción		Asociados al presunto inocente	Asociados a las supuestas pruebas contra el investigado	No se asocian a la caracterización establecida
19	Elementos discursivos que aluden a la emoción y al sentimiento			
Apelan al dolor de las víctimas		Refieren algún tipo de acción por parte de las autoridades		No se registran
Observaciones				

ANEXO 2. LIBRO DE CÓDIGOS

Información de identificación	
1	Noticia: Número de identificación para cada pieza analizada. Para efectos de este trabajo se entiende pieza como el hecho noticioso del que se ocupa el texto. Inicia en 1.
2	Título de la noticia: Transcripción del registrado por el medio de comunicación analizado.
3	Fecha: Día, mes y año de la divulgación de la noticia.
4	Diario: Medio a través del cual se difundió la noticia. Seleccionar según la categorización planteada: <i>El Tiempo/ El Espectador</i>
5	Sección: Ubicación de la noticia en el diario. Seleccionar según la siguiente caracterización:
<div> <div> Local: Noticias de carácter regional. Impacto en una zona específica. </div> <div> Nacional: Noticias con una trascendencia mayor a la local; es decir que su impacto va más allá de las fronteras de una única ciudad o departamento. Dentro de esta categoría se encuentra: <ul style="list-style-type: none"> • Corrupción en entidades de carácter nacional. </div> </div>	
6	Autor: Quien escribe la noticia.
<div> <div> Periodista: Nombre completo o iniciales. </div> <div> Sin autor: No se registra el nombre del periodista o encargado de la información. </div> </div>	
Indicadores de representación del presunto inocente	
7	Tipología del personaje: Clasificación de las personas investigadas/ procesadas penalmente. Seleccionar de acuerdo con la siguiente categorización:
<div> <div> Figura con reconocimiento público (político, judicial, económico): “Persona que posee notoriedad o trascendencia colectiva [...]. Aquella que alcanza cierta publicidad por la actividad profesional que desarrolla”. (“Figura pública - Práctico </div> <div> Figura sin reconocimiento público: Toda persona que no cumple con los requisitos indicados para ser categorizada como figura con reconocimiento público. </div> </div>	

Sociedades Mercantiles,” n.d.). Dentro de esta categoría se encuentran, por ejemplo: <ul style="list-style-type: none">• Magistrados/ Exmagistrados• Senadores/ Exsenadores• Representantes a la Cámara• Gobernadores/ Exgobernadores• Alcaldes/ Exalcaldes				
8	Uso del alias para referirse al presunto inocente: “Apodo o sobrenombre”(“DLE: alias - Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario,” n.d.) utilizado para aludir a la persona procesada/ investigada en el proceso penal. Se codifica con las siguientes opciones:			
Sí		No		
9	Términos para denominar al presunto inocente: Palabras utilizadas a lo largo del texto periodístico para referirse al presunto inocente/investigado en el marco del proceso penal ²⁵ .			
Detenido/ capturado/ aprehendido: Aparición de alguno de estos términos. Se asumen como sinónimos.		Indiciado: Quien se encuentra en etapa de indagación. Seleccionar independientemente de si su uso está acorde con la etapa procesal en el texto.	Imputado: Persona a quien se le ha formulado imputación. Seleccionar independientemente de si su uso está acorde con la etapa procesal en el texto.	Asegurado: Quien ha sido sujeto de alguna medida restrictiva de la libertad en un centro carcelario o en su lugar de residencia mientras avanza el proceso.
Acusado: Denominación para quien ha sido objeto de escrito de acusación. Seleccionar independientemente de si su uso está acorde con la etapa procesal en el texto.		Presunto autor/ responsable: Aparición de la palabra presunto acompañada de alguno de los términos indicados.	Presunto agresor/ abusador/ violador: Aparición de la palabra presunto acompañada de alguno de los términos indicados.	Agresor: Atribución de culpabilidad en el hecho. No está precedida de ninguna palabra como supuesto, presunto, aparente, sería u otras que condicionen la afirmación.

²⁵ Esta tipificación está basada en los resultados obtenidos por (Barata, 2009) tras el análisis realizado al cubrimiento periodístico del diario *El País*. Adicionalmente, incluye tanto los términos formales establecidos por la ley colombiana para definir a una persona que es investigada de acuerdo con la etapa procesal, así como otros términos utilizados en el ámbito periodístico.

Violador: Atribución de culpabilidad en el hecho. No está precedida de ninguna palabra como supuesto, presunto, aparente, sería u otras que condicionen la afirmación.		Responsable: Atribución de culpabilidad en el hecho. No está precedida de ninguna palabra como supuesto, presunto, aparente, sería u otras que condicionen la afirmación.	Investigado/ procesado: Seleccionar esta opción cuando se detecte cualquiera de los dos términos. Se toman como sinónimos.	Supuesto / implicado: Seleccionar esta opción cuando aparezca alguno de estos términos.
Sospechoso: “Que da fundamento o motivo para sospechar o hacer mal juicio de las acciones, conducta, rasgos, caracteres, etc.” Diccionario de la Real Academia Española, citado en (Barata, 2009, p. 227)		Señalado (De señalar): “Poner o estampar señal en una cosa para darla a conocer o distinguirla de otra [...]. Llamar la atención hacia alguien o algo, designándolo con la mano o de otro modo”(“DLE: señalar - Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario,” n.d.)	Otro: Denominaciones diferentes a las opciones planteadas. Detectarlas y escribirlas para cada caso.	
10	Uso del condicional: Verbos expresados de modo que refieren una posibilidad frente a la responsabilidad de una persona en el hecho que se investiga. No se afirma su culpabilidad. Ejemplo de tiempo verbal: Habría, sería. Se determina a partir de las siguientes opciones:			
Siempre: uso del condicional en todo caso.			Excepcionalmente: cualquier caso diferente a la definición dada a la opción “Siempre”	
11	Referencias a antecedentes del presunto inocente: Información relacionada con hechos del pasado por los que la persona procesada fue investigada. Indicar su existencia o no.			
Sí			No	

12	Información adicional sobre el presunto inocente: Datos que podrían contribuir a la generación y/o fortalecimiento de estereotipos ²⁶ .			
Religiosa: Referencias al credo o creencias.		Política: Alusiones al grupo político al que pertenece.	Étnica: Menciones sobre aspectos raciales, lingüísticos o culturales. (“DLE: etnia - Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario,” n.d.)	
De género: Referencias a elementos ligados a las “creencias o pensamientos que las personas tienen acerca de los atributos personales de hombres y mujeres”. (Sánchez, n.d.)		Sexual: Referencias a su orientación sexual.	No registra: Seleccionar esta opción cuando no se identifiquen elementos acordes con la clasificación establecida.	
13	Registro de datos sobre la vida personal: Datos familiares, edad, estado civil, escolarización, lugar de nacimiento, características de alojamiento/domicilio, pasatiempos (ocio), sitios frecuentados. Indicar su aparición o no en el texto noticioso.			
Sí		No		
14	Número de fuentes empleadas: Cantidad de “[...] personas, instituciones y organismos de toda índole que facilitan la información que necesitan los medios para suministrar noticias”. (De Fontcuberta, 2011, p. 76). Seleccionar alguna de las siguientes opciones:			
0		1	2	Más de 2
15	Fuentes utilizadas: Quienes suministran información. Clasificarlas de acuerdo con las siguientes categorías:			
Institucional: Fiscalía, juzgados, Corte Suprema de Justicia, Policía y demás entidades que intervienen en el desarrollo del proceso penal. (Los voceros de la entidad hablan en nombre de la institución). Ejemplo: Declaraciones del Fiscal General de la Nación		Víctima: Quien se ve afectada por el hecho que se investiga	Presunto inocente/ defensa: Persona investigada en el marco del proceso penal/ voces en su defensa.	Testigo: Persona que tiene información del hecho y de la supuesta responsabilidad del presunto inocente, ya sea por su cercanía o participación en la conducta que se investiga.
				Otras: No cumplen con la caracterización de las demás opciones establecidas.

²⁶Tipología planteada según lo establecido por (Varela, n.d.) a propósito de las clases de estereotipos.

Observaciones		
Información adicional que explica, complementa o aclara datos tras el análisis. No es de obligatorio diligenciamiento.		
Indicadores de representación del delito		
16	Tipología noticiosa: Categorización de los casos estudiados en esta investigación. Se clasifica de la siguiente manera:	
	Casos de corrupción: Hechos asociados a los siguientes términos: <ul style="list-style-type: none"> • Peculado • Prevaricato • Concusión • Cohecho • Celebración indebida de contratos • Interés indebido en la celebración de contratos • Contrato sin cumplimiento de requisitos legales • Tráfico de influencias • Enriquecimiento ilícito 	Delitos sexuales: Hechos asociados a los siguientes términos: <ul style="list-style-type: none"> • Acceso carnal violento • Acto sexual violento • Acto sexual abusivo • Acoso sexual • Violación • Abuso sexual
17	Etapas procesales: Momento del proceso penal en el que se enmarcan los hechos registrados en la noticia. Se identifica a partir de las siguientes fases:	
	Indagación: Primera fase. “Empieza desde que un servidor público, en ejercicio de sus funciones de Policía Judicial, recibe una denuncia querrela o informe de otra clase, del cual puede inferir la posible comisión de un delito”(Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Acusatorio, 2006, p. 28). Busca determinar la existencia de la conducta y en ese caso, los posibles autores y/o partícipes. De encontrarse el mérito, a criterio del acusador, se procede con la formulación de imputación o con su archivo.	Investigación: Inicia con la formulación de imputación que “permite la vinculación de una persona a una investigación. En ella la Fiscalía, en presencia del juez de garantías, le debe comunicar a la persona los hechos por los cuales lo va a investigar” (Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Acusatorio, 2006.p. 38). Termina
		Juicio: “Es la fase final del proceso penal previsto en la Ley 906 de 2004. Está integrado por las audiencias de formulación de acusación, preparatoria, juicio oral, y fijación de sentencia”.(Fiscalía General de la Nación, 2007, p. 87)

		con la presentación del escrito de acusación.		
18	Adjetivos en el texto: Calificativos utilizados por el periodista en el registro noticioso de los hechos. Se catalogan de la siguiente manera según su rol.			
Asociados a la acción: Agravan los hechos objeto de investigación.		Asociados al presunto inocente: Ligados a la persona en cuestión. No incluye características físicas Ejemplo: Polémico Cuestionado Poderoso	Asociados a las supuestas pruebas contra el investigado: Adjetivos que refuerzan la solidez de las pruebas y/ nuevos hallazgos.	No se asocian a la caracterización establecida: Los adjetivos que se identifican en el texto no corresponden con ninguna de las otras tres opciones planteadas para esta categoría. Marcar esta opción en caso de no encontrar adjetivos a lo largo del texto.
19	Elementos discursivos que aluden a la emoción y al sentimiento: se clasifican de acuerdo con las siguientes opciones:			
Apelan al dolor de las víctimas: Alusiones al sentir de las víctimas.		Refieren algún tipo de acción por parte de las autoridades: Relacionados con el proceder de las instituciones.	No se registran: No se identifican elementos de este tipo.	
Observaciones: Información adicional que explica, complementa o aclara datos tras el análisis. No es de obligatorio diligenciamiento.				

ANEXO 3. NOTICIAS ANALIZADAS

1. Fiscalía imputará cargos a Prieto por coima de \$ 650 millones
2. Investigan red de corrupción en Floridablanca
3. ‘Ñoño’ Elías, en el ventilador del exgobernador Lyons
4. Hechos por los que le imputaron cargos al presunto agresor de Laura Catalina
5. La purga en la justicia de los Llanos
6. Ausentarse: ¿la jugada de Malo para no ser suspendido por Corte Suprema?
7. Juez ordena detener a exdirector de CB&I por el caso Reficar
8. Ordenan libertad de José Elías Melo por caso Odebrecht
9. General Castiblanco, enredado por irregularidades en contrato
10. Fiscalía imputará dos delitos a papá de exgobernador Lyons
11. Denunciado por posible abuso sexual en La Calera, en libertad
12. Edwin Besaile le echa el agua sucia de la corrupción a Alejandro Lyons
13. El ‘ventilador’ de Bula contra Carlos Albornoz
14. Los testimonios que tienen a Álvaro Ashton en la cárcel
15. Asesino de una menor en Florencia aceptó los cargos
16. Daniel Díaz, fiscal del cartel de la hemofilia, fue enviado a la cárcel La Picota
17. ¿Quién definirá el juicio contra el exmagistrado Francisco Ricaurte?
18. El caso de tortura y secuestro en Bogotá que enreda a tres policías
19. Alejandro Lyons se robó más de \$150 millones de la Gobernación: Edwin Besaile
20. Exsenador Plinio Olano responderá por 4 delitos por caso Odebrecht
21. Capturan en Cali a un supuesto pastor cristiano que abusó de dos menores de edad
22. Capturados presuntos testaferros de las Farc que habrían lavado dinero con supermercados
23. FARC niega relación con cadena de supermercados afectada por saqueos
24. Exguerrillero implica a ‘Romaña’ con testaferros de Supercundi
25. Capturan a Hugo Aguilar, exgobernador de Santander
26. Envían a la cárcel a presuntos testaferros de las Farc
27. Aprovechando disfraz de mimo, hombre habría abusado de menores en Tolima
28. Captura de Aguilar sacude política en Santander
29. El poderoso coronel (r) Hugo Aguilar
30. Hugo Aguilar es trasladado a Bogotá para resolver su situación judicial
31. Roberto Prieto traicionó a su padre
32. Luz Mary Guerrero, dueña de Efecty, quedó en libertad por vencimiento de términos
33. Profesor en Cali habría abusado de estudiantes amenazándolas con malas calificaciones
34. Al senador “Ñoño” Elías aún le falta lo más difícil
35. Capturados funcionarios judiciales y del ICBF que habrían favorecido a un condenado
36. Hijo de diplomático, ante juez por intento de abuso
37. El expediente de sobornos que enreda a Alan Jara
38. Ocho años le tomó a la justicia apresar al ‘zar’ de Saludcoop

39. Pruebas de compra de votos pondrán a la senadora Merlano ante la Corte Suprema
40. A la cárcel fue enviado el supuesto responsable de red de corrupción en el Vichada
41. Casa por cárcel para Luis Alirio Mora presunto testaferro de las Farc
42. Cayeron "Los Choris", dedicados al hurto de locales en el sur de Bogotá
43. Luz verde para juicio contra Ricaurte
44. Capturan exgerente de Triple A por supuesta apropiación ilícita de \$27.879 millones
45. Exgerente de la empresa Triple A aceptó los tres delitos que le imputó la Fiscalía
46. Saqueo a Barranquilla en caso Triple A llega a \$ 264 mil millones
47. Fiscalía acusó a Hilda Niño Farfán, la exfiscal que habría ayudado a exparamilitares
48. Capturan al presunto abusador sexual de siete niños en internado de Zarzal, Valle
49. Ramón Navarro Pereira, de 'gran caballero' a responsable por corrupción en la Triple A
50. Así fue el fraude electoral de Aída Merlano
51. García, el gran soplón del saqueo de la española Inassa en Colombia
52. Medida de aseguramiento para conductor de SITP que habría abusado de una pasajera
53. Miembro del Consejo Superior de U. de Antioquia capturado y acusado de corrupción
54. Los contratos que llevaron a la captura de Luz Piedad Valencia, exalcaldesa de Armenia
55. Los tentáculos de la red de los 'narcojets' en la Fuerza Aérea
56. Padres son acusados de abusar sexualmente de sus propios hijos en Buga
57. A la cárcel exfuncionaria de Colpensiones por adulterar historias laborales
58. Últimos 4 alcaldes de Buenaventura, en la lupa por corrupción
59. Vinculan a oficial por irregularidades en contratos de FF. MM.
60. Casa por cárcel para Eduardo Zambrano, procesado por Odebrecht
61. La Fiscalía insistirá en que los dueños de Supercundi vayan presos por nexos con las Farc
62. Envían a la cárcel a Luz Piedad Valencia, exalcaldesa de Armenia
63. El expediente del saqueo al Hospital de Buenaventura
64. Alcalde de Armenia fue capturado por caso de corrupción en obras de valorización

BIBLIOGRAFÍA

- A la cárcel exfuncionaria de Colpensiones por adulterar historias laborales. (2018, April 13). *El Espectador*.
- ACNUDH | Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (1976). Retrieved from <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>
- Asamblea General de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Retrieved from http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
- Asamblea Nacional Constituyente. (1789). Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Retrieved from http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/espagol/es_ddhc.pdf
- Austin, J. (1998). *Cómo hacer cosas con palabras*. (Paidós, Ed.) (5 reimpres). Barcelona.
- Avella, P. (2007). *Estructura del Proceso Penal Acusatorio* (Primera ed). Bogotá: Fiscalía General de la Nación. Retrieved from <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/01/EstructuradelProcesoPenalAcusatorio.pdf>
- Bañón, J. M. (2015). Medios de comunicación, opinión pública y política criminal. Retrieved May 15, 2018, from <http://cj-worldnews.com/spain/index.php/en/criminologia-30/criminalidad-y-medios-de-comunicacion/item/2907-medios-opinion-politica-criminal>
- Barata, F. (2003). Los mass media y la información criminal El ‘caso King’ y las perversiones mediáticas. Retrieved April 13, 2018, from http://www.mesadiversitat.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q17barata_ES.pdf
- Barata, F. (2007). Los medios, el crimen y la seguridad pública. Retrieved April 13, 2018, from http://www.insyde.org.mx/wp-content/uploads/2013/09/f_barata.pdf
- Barata, F. (2009). La devaluación de la presunción de inocencia en el periodismo | Barata Villar | Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura. *Quaderns Del CAC*, 217–236. Retrieved from <http://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/view/184497/237765>
- Barrero, A. (2001). Juicios paralelos y Constitución: su relación con el Periodismo. *Ámbitos No. 6. Primer Semestre de 2001*, 171–180. Retrieved from <https://issuu.com/ambitoscomunicacion/docs/revista-comunicacion-ambitos-06>
- Baucells, J., & Peres-Neto, L. (2008). Discurso televisivo sobre el crimen: Los programas especializados en sucesos. In Tirant Lo Blanch (Ed.), *Malas noticias. Medios de comunicación, política criminal y garantías penales en España* (pp. 109–151). Valencia, España.
- Berelson, B. (1971). *Content analysis in communication research*. New York: Hafner publishing company, INC.
- Bernal, C., & La Rota, M. (2013). Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada. Informe Colombia. In *Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada. Los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú* (pp. 65–114). Washington, D.C. Retrieved from http://www.idl.org.pe/sites/default/files/publicaciones/pdfs/Estudio_independencia_judicial_insuficiente_prision_preventiva_deformada.pdf

- Bernal, C., & Moya, M. (2015). *Libertad de expresión y proceso penal*. (Universidad Católica de Colombia, Ed.) (Primera ed). Bogotá.
- Botella, J., & Peres-Neto, L. (2008). La formación de la opinión pública y la construcción de discursos sobre la realidad criminal en España. In Tirant Lo Blanch (Ed.), *Malas noticias. medios de comunicación, política criminal y garantías penales en España* (pp. 43–65). Valencia, España.
- Botero, C., Federico, M., Duque, G., Jaramillo, S., Salomé, O., & Upegui, G. (2017). *El derecho a la libertad de expresión. Curso avanzado para jueces y operadores jurídicos en las Américas. Guía curricular y materiales de estudio*. (D. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Ed.). Bogotá. Retrieved from <https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/07/El-derecho-a-la-libertad-de-expresión-PDF-FINAL-Julio-2017-1-1.pdf?x54537>
- Burguet, F. (2008). *Las trampas de los periodistas*. (Trípodos, Ed.) (Primera ed). Barcelona.
- Campos, M. (2012). Medios de comunicación: entre la libertad de expresión y la violación del derecho a la presunción de inocencia. Retrieved from <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28709.pdf>
- Capturan al presunto abusador sexual de siete niños en internado de Zarzal, Valle. (2018, March 22). *El Espectador*.
- Caracol Radio. (2017). *Los periódicos más leídos de Colombia en La Luciérnaga - Caracol Radio en mp3(04/08 a las 01:28:45) 02:59 20158329 - iVoox*. Retrieved from https://www.ivoox.com/periodicos-mas-leidos-colombia-audios-mp3_rf_20158329_1.html
- Chillón, A. (2001). El «giro lingüístico» en periodismo y su incidencia en la comunicación periodística. Retrieved from <http://cuadernos.info/index.php/CDI/article/viewFile/180/791>
- Cifras y Conceptos. (2017). *Noveno Panel de Opinión*. Bogotá. Retrieved from <http://cifrasyconceptos.com/wp-content/uploads/2017/11/Cartilla-WEB.pdf?8ab3a8>
- Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Acusatorio. (2005). *Parámetros para el ejercicio informativo de los medios de comunicación en el marco del Sistema Penal Acusatorio* (Documento). Bogotá.
- Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Acusatorio. (2006). *Parámetros para el ejercicio informativo de los medios de comunicación en el marco del Sistema Penal* (primera ed). Bogotá.
- Congreso de la República de Colombia. (2000). Código Penal. Ley 599 de 2000. Colombia. Retrieved from <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388>
- Congreso de la República de Colombia. (2004). Código de Procedimiento Penal. Ley 906. Colombia. Retrieved from <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787>
- Constitución Política de Colombia (1991). Retrieved from <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125>
- Convención Americana de Derechos Humanos (1969). Retrieved from https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
- Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ). (2015). *Balance diez años de funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio en Colombia (2004 - 2014). Análisis de su funcionamiento y*

propuestas para su mejoramiento (Primera Ed). Bogotá. Retrieved from http://www.cej.org.co/files/DOCS_SPA_BALANCE_10_Y.pdf

Corte Constitucional de Colombia. (1992). Sentencia No. T-512/92. Retrieved from <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/T-512-92.htm>

Corte Constitucional de Colombia. (1994). Sentencia No. T-259/94. Retrieved from <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/T-259-94.htm>

Corte Constitucional de Colombia. (1995). Sentencia No. T-074/95. Retrieved from <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/T-074-95.htm>

De Fontcuberta, M. (2011). *La noticia. Pistas para percibir el mundo*. (Paidós, Ed.) (Edición re). Barcelona.

Denunciado por posible abuso sexual en La Calera, en libertad. (2018, February 1). *El Espectador*.

Díez Ripollés, J. L. (2000). La delincuencia en los medios. *EL PAÍS*. Retrieved from https://elpais.com/diario/2000/06/14/opinion/960933604_850215.html

DLE: alias - Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario. (n.d.). Retrieved May 5, 2018, from <http://dle.rae.es/?id=1q3Mb6q>

DLE: clan - Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario. (n.d.). Retrieved May 29, 2018, from <http://dle.rae.es/?id=9OpQuK0>

DLE: corpulencia - Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario. (n.d.). Retrieved June 4, 2018, from <http://dle.rae.es/?id=AwRZ4qi>

DLE: enredar - Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario. (n.d.). Retrieved June 14, 2018, from <http://dle.rae.es/?id=FZ6wCIO>

DLE: etnia - Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario. (n.d.). Retrieved May 7, 2018, from <http://dle.rae.es/?id=H4lgMZ4>

DLE: señalar - Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario. (n.d.). Retrieved May 7, 2018, from <http://dle.rae.es/?id=XbqWuzX>

El caso de tortura y secuestro en Bogotá que enreda a tres policías. (2018, February 13). *El Espectador*.

El Espectador. (2018). Somos el medio más antiguo de Colombia. Retrieved May 1, 2018, from <https://www.facebook.com/elspectadorcom/>

El expediente del saqueo al Hospital de Buenaventura. (2018, April 30). *El Tiempo*.

El Tiempo. (2015). Audiencia de EL TIEMPO continúa en crecimiento. Retrieved from <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15907306>

Factiva | Global News Database & Licensed Content - Dow Jones. (n.d.). Retrieved June 4, 2018, from <https://www.dowjones.com/products/factiva/>

Figura pública - Práctico Sociedades Mercantiles. (n.d.). Retrieved May 5, 2018, from <https://app.vlex.com/#vid/424462810>

Fiscalía General de la Nación. (2018). Asegurado hombre de 68 años por delitos sexuales contra una vecina | Fiscalía General de la Nación. Retrieved from <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/asegurado-hombre-de-68-anos-por-delitos-sexuales-contra-una-vecina/>

Fiscalía imputará dos delitos de papá de exgobernador Lyons. (2018, January 27). *El Tiempo*.

Forbes. (n.d.). Luis Carlos Sarmiento. Retrieved May 1, 2018, from

- <https://www.forbes.com/profile/luis-carlos-sarmiento/>
 Francesc Barata. (n.d.). Retrieved April 15, 2018, from
<http://webs.ucm.es/info/mediars/AutoresMS/BarataF/baratafrancesc.html>
- Gaceta del Congreso No. 134 de 26 de abril de 2002. (2002). Bogotá: Gaceta del Congreso 134.
 Retrieved from
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=03&p_numero=237&p_consec=4092
- Gallego, J. (2003). *Información de sociedad. Del suceso a la calidad de vida* (Primera ed). Bellaterra (Barcelona): Universitat Autònoma de Barcelona.
- Gallup Colombia Ltda. (2018). Colombia, febrero 2018. Retrieved from
<http://www.elpais.com.co/especiales/encuesta-gallup-poll-123.pdf>
- García Arán, M., & Peres-Neto, L. (2008a). Discursos mediáticos y reformas penales de 2003. In Tirant Lo Blanch (Ed.), *Malas noticias. Medios de comunicación, política criminal y garantías penales en España* (pp. 153–189). Valencia, España.
- García Arán, M., & Peres-Neto, L. (2008b). Perspectivas de análisis y principios constitucionales. In T. Lo Blanch (Ed.), *Malas noticias. Medios de comunicación, política criminal y garantías penales en España* (pp. 23–42). Valencia, España.
- Garland, D. (2001). *The culture of control: Crime and social order in contemporary society* (Primera ed). Oxford: Oxford University Press.
- Gomis, L. (1991). *Teoría del periodismo: Cómo se forma el presente*. (Paidós, Ed.) (Primera ed). Barcelona.
- Grijelmo, Á. (2002). La seducción de las palabras. Retrieved May 1, 2018, from
<https://www.megustaleer.com/libros/la-seducin-de-las-palabras/MES-064420/fragmento/>
- Grupo Aval - Nuestras Compañías. (n.d.). Retrieved May 1, 2018, from
<https://www.grupoaval.com/wps/portal/grupo-aval/aval/nuestras-companias>
- Grupo Santo Domingo – Valorem – De quién son los medios. (n.d.). Retrieved May 4, 2018, from <http://www.monitoreodemedios.co/grupo-santo-domingo-valorem/>
- Investigan red de corrupción en Floridablanca. (2018, January 6). *El Tiempo*.
- Julio Mario Santo Domingo. (n.d.). Retrieved May 4, 2018, from
<https://www.forbes.com/profile/julio-mario-santo-domingo/>
- La purga de la justicia en los Llanos. (2018, January 14). *El Tiempo*.
- Larrauri, E. (2006, March). Populismo punitivo...Y cómo resistirlo. *Jueces Para La Democracia Número 55*, 15–22. Retrieved from
https://www.academia.edu/9812655/Populismo_Punitivo
- Larrauri, E. (2009). La economía política del castigo. *Revista de Estudios de La Justicia – N° 11*, 57–79. Retrieved from http://web.derecho.uchile.cl/cej/rej11/LARRAURI_9_.pdf
- Lecucq, O. (2017). Presunción de inocencia y juicios paralelos en Francia. In T. Lo Blanch (Ed.), *Presunción de inocencia y juicios paralelos en derecho comparado* (pp. 79–96). Valencia, España.
- Lello, I. G. (2001, March). Justicia penal y medios de comunicación. *Revista Latina de Comunicación Social, Número 41*. Retrieved from
<http://www.ull.es/publicaciones/latina/2001/latina41may/53lello.htm>
- López, M. (1995). *Cómo se fabrican las noticias. Fuentes, selección y planificación*. (Paidós,

- Ed.). Barcelona.
- Luz verde para juicio contra Ricaurte. (2018, March 17). *El Tiempo*.
- Martínez, L. (2014, October). Sentencias mediáticas: la presunción de inocencia y sus repercusiones | La Huella Digital. Retrieved from <http://www.lahuelladigital.com/sentencias-mediaticas-la-presuncion-de-inocencia-y-sus-repercusiones/>
- McCombs, M. (2006). *Estableciendo la agenda*. (Paidós, Ed.). Barcelona.
- Misión | Fiscalía General de la Nación. (n.d.). Retrieved June 5, 2018, from <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/mision/>
- Monitoreo de medios. (2015a). El Espectador – De quién son los medios. Retrieved May 1, 2018, from <http://www.monitoreodemedios.co/el-espectador/>
- Monitoreo de medios. (2015b). El Tiempo – De quién son los medios. Retrieved May 1, 2018, from <http://www.monitoreodemedios.co/el-tiempo/>
- Noticias Caracol. (2017). El Espectador celebra 130 años de existencia haciendo lo que mejor sabe: buen periodismo | Noticias Caracol. [Noticiascaracol.com](http://noticias.caracoltv.com/colombia/el-espectador-celebra-130-anos-de-existencia-haciendo-lo-que-mejor-sabe-buen-periodismo). Retrieved from <https://noticias.caracoltv.com/colombia/el-espectador-celebra-130-anos-de-existencia-haciendo-lo-que-mejor-sabe-buen-periodismo>
- Ocho años le tomó a la justicia apresar al “zar” de Saludcoop. (2018, March 11). *El Tiempo*.
- Padres son acusados de abusar sexualmente de sus propios hijos en Buga. (2018, April 9). *El Espectador*.
- Peres-Neto, L. (2007). *Leyes a golpe de suceso: el efecto de los discursos mediáticos en las reformas políticas en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor (2000- 2003)*. Universidad Autónoma de Barcelona. Retrieved from <https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/5146/PERES NETO Luiz Leyes a golpe de suceso.pdf?sequence=1>
- Qué plantean los candidatos presidenciales contra la corrupción - Presidenciales - Elecciones Colombia 2018. (2018, May 1). *El Tiempo*. Retrieved from <http://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/presidenciales/que-plantean-los-candidatos-presidenciales-contrala-corrupcion-212192>
- Rebollo, R. (2008). Oleadas informativas y respuesta político-criminal. In Tirant Lo Blanch (Ed.), *Malas noticias. Medios de comunicación, política criminal y garantías penales en España* (pp. 67–108).
- Reyes, Y. (2008, May 29). El principio de oportunidad. *El Espectador*. Retrieved from <https://www.elespectador.com/opinion/el-principio-de-oportunidad-columna-16690>
- Rodríguez, R. (2015). *Manual del periodismo de sucesos*. (L. Grehco, Ed.) (Colección). Sevilla.
- Ruiz, A. (2008, May). Fuentes periodísticas: concepto, clasificación y modos de uso. *Tram[p]as de La Comunicación y La Cultura*, 14–25. Retrieved from http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/36422/Documento_completo.pdf?sequence=1
- Sánchez, Y. (n.d.). Estereotipos de género: Formación y ejemplos en hombres y mujeres. Retrieved May 7, 2018, from <https://www.lifeder.com/estereotipos-de-genero/>
- Santos, E. (2001, February 9). El Tiempo, toda una historia. *El Tiempo*. Retrieved from <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-634534>

- Soriano, J. (2007). *L' ofici de comunicòleg. Mètodes per investigar la comunicació*. (E. Editorial, Ed.) (Primera ed). Romanyà.
- Thompson, J. (2001). *El escándalo político. Poder y visibilidad en la era de los medios de comunicación*. (Paidós, Ed.). Barcelona.
- Vanegas, P. (2007). *Las Audiencias Preliminares en el Sistema Penal Acusatorio* (Primera ed). Bogotá: Fiscalía General de la nación. Retrieved from <https://www.salapenaltribunalmedellin.com/images/doctrina/LasAudienciasPreliminaresenelSistemaPenalAcusatorio.pdf>
- Varela, I. (n.d.). Los 8 Tipos de Estereotipos Principales - Lifeder. Retrieved May 2, 2018, from <https://www.lifeder.com/tipos-de-estereotipos/>
- Vidal, D. (2002). La transformació de la teoria del periodisme: una crisi de paradigma? *Anàlisi* 28, 21–54. Retrieved from <https://ddd.uab.cat/pub/analisi/02112175n28/02112175n28p21.pdf>